

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Enero de 2010

Editado en junio



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 613

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana de Colombia



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Diana Patricia Cárdenas Quintero (asistente)

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal; Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS e Indymedia Colombia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Enero de 2010

Viernes 1

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBÓN) denuncia ante la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, comunidad nacional e internacional, la persecución y atropello de la cual son objeto los trabajadores tercerizados en el Complejo Carbonífero del Cerrejón por parte de la empresa Cerrejón y de las contratistas Sotrans y Sintrachaneme, que han emprendido una campaña de persecución y hostigamiento hacia los trabajadores que decidieron agruparse en sindicatos, con el fin de buscar mejoras básicas en su sistema de vida. El sindicato manifiesta que en el complejo carbonífero del cerrejón no se respeta el derecho de asociación y negociación colectiva, se despide a fundadores de los sindicatos, desconociendo el fuero especial que les otorga la ley, y las empresas contratistas hostigan y atropellan a los trabajadores.

Lunes 4

Organizaciones defensoras de derechos humanos del país y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) celebran el fallo de la Procuraduría General que destituye e inhabilita por 10 años a dos oficiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) por la muerte de un estudiante que sufrió trauma craneoencefálico por los golpes que recibió el 1 de mayo de 2005, cuando estudiantes salieron a marchar por las calles de Bogotá para celebrar el Día del Trabajo. Varios testigos aseguraron que el menor perdió el conocimiento luego de ser golpeado brutalmente por agentes del ESMAD. Para el Ministerio Público, los oficiales tenían la responsabilidad de garantizar que dentro de la marcha llevada a cabo en la avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá, no se afectaran los derechos inherentes a la dignidad humana y que a nivel interno sus hombres no incurrieran a la violencia. El padre del joven asesinado denunció en repetidas ocasiones ante la opinión pública diferentes atropellos y hostigamientos en su contra por exigir castigo a los responsables del crimen. Las organizaciones juveniles, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos vienen exigiendo al gobierno colombiano la disolución del ESMAD cuyas acciones represivas han ocasionado muertes a varios colombianos y lesiones por abusos en operativos en los que los gases lacrimógenos, las botas, balas y bolillos se ponen por encima de la protección de los derechos humanos de los manifestantes.

Jueves 7

Organizaciones defensoras de derechos humanos encienden las alarmas por la libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales de Soacha (Cundinamarca). Un juez de garantías ordena las libertades porque el juicio no se inició en los 90 días siguientes a la acusación contra los militares. Estos fueron acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, luego de ser vinculados a un proceso por la muerte de 11 jóvenes en Soacha. La investigación logró establecer que los 11 muchachos fueron asesinados y vestidos como guerrilleros. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifiesta su preocupación por la manera en que se lleva el proceso, por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como en las madres de las víctimas y los testigos. MOVICE expresa su preocupación y envía al fiscal de la Corte Penal Internacional una carta solicitando que se observe de cerca el proceso, pues “hay decisiones que generan impunidad”. Actualmente en la Fiscalía General de la Nación cursan más de 1.200 investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública.

Viernes 8

Los representantes de la autoridad indígena del Norte del Cauca y los gobernadores aborígenes de Agua Negra y de Chimborazo reciben amenazas de muerte por parte de integrantes del grupo armado ilegal denominado Águilas Negras. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian que las amenazas y hechos que han atentado contra la vida de comuneros indígenas, líderes afro descendientes, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos se incrementaron desde el mes de octubre de 2009. Manifiestan gran preocupación por las amenazas, hostigamiento, persecución y muerte que se extiende por todo el territorio del noroccidente del Cauca, particularmente en los municipios de Morales y Suárez, generando un ambiente de terror y zozobra en toda la comunidad. Situación que ha desestabilizado la armonía y normal desarrollo de las actividades de los pobladores de esta región. De la misma manera, la organización civil Asociación NOMADESC denuncia la interceptación de sus líneas telefónicas y persecuciones, seguimientos y vigilancia irregular cerca a las instalaciones de los cabildos, de la Asociación y de las casas de sus miembros. Entre las organizaciones firmantes de la denuncia se encuentran: Asociación NOMADESC, Campaña Prohibido Olvidar, Concejo Comunitario de la Toma, Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, Cabildo Cerro Tijeras, Cabildo Chimborazo, Cabildo Agua Negra, Cabildo Honduras.

Sábado 9

Habitantes de la localidad Zambrano (Bolívar) saquean la vivienda del alcalde y atacan otras sedes de la municipalidad por la suspensión de las tradicionales corralejas taurinas. Cuando la policía impide que quemen la casa del alcalde, los lugareños entran por la fuerza y saquean electrodomésticos, muebles y cerca de 2 mil paquetes escolares que se iban a entregar a los niños pobres de Zambrano. Las autoridades policiales toman el

control de la población y envían refuerzos al área para evitar nuevos hechos violentos.

Los habitantes de las poblaciones Horizonte y Villa Cielo en el Departamento de Córdoba bloquean la vía que conduce a la finca El Ubérrimo, propiedad del presidente Álvaro Uribe en área rural de Montería, para llamar la atención ante la problemática de la energía eléctrica. Los usuarios denuncian que tienen que padecer abusos con las altas tarifas impuestas por la empresa privada Electricaribe y la falta del debido mantenimiento y reparación al sistema eléctrico.

Domingo 10

Cerca de 55 conductores que cubren dos rutas de buses desde el centro de Medellín hasta la parte alta del barrio Robledo, en el occidente de la ciudad, inician un cese de actividades por las agresiones y las extorsiones semanales a manos de las bandas delincuenciales que se disputan el control de la zona. Esta situación no es nueva y es más crítica en las comunas 1 y 13, en el nororiente y el centro occidente de Medellín, respectivamente. El 18 de diciembre, los conductores de los buses de las empresas Autocol y Transconor, en el nororiente de Medellín, pararon ante la falta de garantías y seguridad en los barrios de la comuna 1, donde las distintas bandas los etiquetan de pertenecer a uno u otro bando.

Lunes 11

Habitantes de Cóbbita (Boyacá) protestan frente a la Alcaldía municipal por el aumento en las tarifas de acueducto, aseo y alcantarillado que representa, según los manifestantes, más del 400 %.

Martes 12

Cerca de 185 trabajadores de la Finca Palo Alto, perteneciente a Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa, en jurisdicción de Ciénaga, Magdalena, son desalojados a tiros de su sitio de labores, dejando herido a uno de ellos. Los trabajadores estaban protestando desde el pasado 23 de diciembre de 2009 por el no pago de salarios, primas, cesantías, intereses de cesantías, subsidio familiar, servicios funerarios y 7 años de cotización a pensión y salud. Los trabajadores se afiliaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) el pasado día 5, presentaron un pliego de peticiones el día 7, y el 9 de enero fueron despedidos por la empresa por haberse afiliado al sindicato, a lo que se sumó la intimidación de los hombres armados. Palo Alto es una finca ubicada en San Juan de Palos Prieto, municipio de Pueblo Viejo (Magdalena); es propiedad de la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa y Cía., y herencia de Jorge Gnecco Cerchar, cuyos posibles nexos con el narcotráfico denunció en su momento el extraditado líder paramilitar alias 'Jorge 40'. La finca se encuentra ubicada en una zona de tradición bananera, pero fue inundada de cultivos de palma africana, y es gerenciada por Ramón Tovar. SINTRAINAGRO denuncia la clara violación de los derechos laborales por parte de esta empresa, que acudiendo a hechos

de violencia atenta también contra los derechos humanos, tomando represalias porque se ejerció el libre derecho a la sindicalización.

Termina el paro de buses en el occidente de Medellín que comenzó el domingo en la noche con la participación de 55 conductores que cubren dos rutas de buses desde el centro de Medellín hasta la parte alta del barrio Robledo.

Lavadores de carros y vendedores protestan en el Palacio de La Aduana, en Cartagena. Los primeros le exigen al gobierno distrital que les dé soluciones de empleo, tras ser retirados del espacio público para darle paso al tramo IV de Transcaribe. El grupo de vendedores informales del Mercado de Bazurto, sector Martínez Martelo, se une a la manifestación para exigir la devolución de productos y enseres decomisados durante un operativo sorpresa a finales de diciembre.

Miércoles 13

Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan el asesinato del líder afrocolombiano Argenito Diaz, que luchaba por lograr la restitución de la propiedad a sus legales y legítimos dueños desplazados por empresas vinculadas a los agronegocios dentro del territorio chocoano. Argelino lideraba la reclamación de tierras colectivas de Curvaradó y Jiguamiandó y había conseguido en 2009 fallos judiciales que ordenaban la restitución de tierras por parte de empresas. Fue amenazado en agosto de 2008 por paramilitares al promover la creación de una Zona Humanitaria en Caño Claro. Las empresas continúan su ocupación ilegal y la ampliación de sus operaciones empresariales en Caño Claro Andalucía, Caracolí, Las Menas, Caño Manso en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Los asesinatos y amenazas contra los líderes y las comunidades que reclaman tierras no se han detenido. Sólo entre 1996 y 1998 se desplazaron 17 mil afrodescendientes en el Bajo Atrato.

Jueves 14

La ONU presenta su primer informe global sobre la situación de los cerca de 370 millones de indígenas en el mundo y destaca que la situación de esas comunidades en Colombia “es precaria”. El coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Bruno Moro, afirma que factores como el conflicto armado han puesto en situación de vulnerabilidad a 34 de los 84 pueblos indígenas que existen en el país. Moro afirma que los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo amenazados y vulnerados y que “en general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país”. Además señala que el despojo de tierras se ha convertido en uno de los más graves problemas de los pueblos indígenas en Colombia. También asegura que las dificultades de los indígenas se derivan de la situación de “violencia, amenazas, masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, confinamiento, desplazamiento y desintegración”. Los datos del organismo indican que en los últimos 15 años los indígenas han reportado 2.660 violaciones de los derechos humanos.

Sábado 16

Un grupo de conductores de volquetas y camiones bloquean el paso por el llamado “peajito social” en inmediaciones del barrio Navarra del municipio de Bello (Antioquia) para protestar por el alza de la tarifa del peaje a partir del 1 de enero de 2010. La protesta se realiza de manera pacífica y con autorización de la Policía y consiste en el bloqueo de la Autopista Norte durante poco más de 5 minutos. Los aproximadamente 25 camiones y volquetas se atraviesan en la vía y dejan oír sus bocinas por un momento, ante la atenta mirada de las autoridades presentes.

Cerca de 100 personas se toman en parque principal de Bello (Antioquia) para pedir ayuda para la consecución de vivienda, luego de ser desalojadas de los terrenos aledaños del Hospital Mental, donde se habían instalado hace más de un año. El Hospital, propietario de esos terrenos, inició una demanda contra las personas que se encontraban allí, por considerar que estaban invadiendo una propiedad privada y cerca de 600 familias son desalojadas.

Lunes 18

Se realiza una concentración frente a los juzgados de Paloquemao en Bogotá, a partir de las 9 de la mañana, para decir NO a la criminalización del pensamiento crítico en Colombia y exigir la libertad de William Javier Díaz -profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, defensor de Derechos Humanos, miembro activo de la Asociación Distrital de Educadores y del Polo Democrático Alternativo- quien fue detenido el 14 de noviembre de 2008 acusado de tener supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Martes 19

Decenas de ex trabajadores de la liquidada empresa estatal de telefonía Telecom marchan en el centro de Bogotá para hacer un llamado a toda la sociedad civil, con el fin de que se solidarice a la causa de una lucha que, insisten, ha sido marcada por amenazas contra sus vidas y las de sus familias, azotadas por las persecuciones y las vicisitudes económicas. Pese al acuerdo al que llegaron con las directrices de la firma, poco antes de iniciar la liquidación, nunca se respetó el pacto para la jubilación de los empleados a quienes les faltaban 7 años para alcanzar su pensión. Luego de agotar todas las vías legales en la Justicia Ordinaria, dicen, sólo les queda apelar a la movilización y la solidaridad social, para seguir insistiendo en una lucha que parece perdida, como lo fueron muchas de las grandes gestas de la historia.

Más de 300 trabajadores y usuarios de la salud inician una vigilia en la Catedral Primada de Colombia y en la iglesia del Voto Nacional, en Bogotá, para rechazar las medidas tomadas por el gobierno en el marco de la Emergencia Social que busca mantener la sostenibilidad del sistema de salud nacional. Según la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC), entidad que lidera esta acción de protesta, se

trata de una jornada de vigilia y oración por la salud de los colombianos, a la espera de que el Gobierno Nacional escuche y negocie las propuestas que el sindicalismo y otras organizaciones sociales tienen frente a la crisis del sistema de salud. Los trabajadores solicitan que los recursos originados en el Estado de Emergencia Social en Salud, procedan de la nación y no de los usuarios y consumidores, y que se tenga como prioridad cubrir la inmensa deuda que hay con los hospitales públicos de las Entidades Territoriales, y posteriormente la de los otros actores del sistema. ANTOHOC señala que la medida tomada por el Gobierno Nacional lo único que hace es liberar recursos para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pero no fortalece a la red pública. La acción es encabezada por miembros de ANTHOC, la CUT nacional, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS) y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).

Miércoles 20

Por la precaria situación que siguen enfrentando las poblaciones en situación de desplazamiento, son citados por parte de la Corte Constitucional los gobernadores de Antioquia, Cundinamarca y Valle, así como los alcaldes de Medellín, Cali, Bogotá y Soacha. El llamado se da en el marco del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 a través de la cual el alto Tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional que ha rodeado la atención a desplazados por la violencia, en la actualidad.

El Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) denuncia el incumplimiento y falta de asistencia de Alcaldes de municipios risaraldenses en la reunión que se desarrollaría en la Gobernación de Risaralda con la intención de analizar qué pasa con los recursos desembolsados a poblaciones indígenas por el Gobierno Nacional, a través del Sistema General de Participación. El encuentro se programó porque el CRIR solicitó al Defensor del Pueblo programar una reunión con el secretario de Gobierno, Germán Darío Saldarriaga, y los alcaldes de los municipios donde existen resguardos indígenas que reciben transferencias del Estado. Al encuentro fueron citados los alcaldes de Guática, Belén de Umbría, Quinchía, Marsella, Mistrató y Pueblo Rico, pero el único mandatario que asiste fue el alcalde de Guática, José Fernando Montoya Gómez, mientras que Belén y Pueblo Rico envían delegados.

Los Presos Políticos del Patio No. 3 de la Penitenciaría de Palogordo en Girón (Santander) denuncian una persecución política por parte de las directivas del centro de reclusión y guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Los presos señalan que son amenazados constantemente con traslados y que se ha iniciado una campaña para eliminar los espacios de convivencia que han ganado los presos políticos y prisioneros de guerra, algunos de los cuales ostentan incluso medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH). El patio N° 3 de la prisión de Girón, es el espacio donde se encuentran reclusos los prisioneros con medidas cautelares desde hace 5 años y por ende el gran número de presos políticos.

Habitantes del barrio Manzanares de Santa Marta protestan con carteles e incluso juegan un partido de fútbol frente a las instalaciones del batallón Córdova para llamar la

atención de las autoridades y lograr que les devuelvan la cancha deportiva del barrio que fue ocupada por el Ejército. En diciembre pasado, el entonces comandante de la Primera División del Ejército, general José Rafael González Villamil, se reunió con los integrantes de la Junta de Acción Comunal y algunos moradores del barrio para decirles que iban a encerrar la cancha a fin de acondicionarla y que podrían seguir utilizándola. Aunque el terreno pertenece al Ministerio de Defensa y un General dijo que iban a acondicionarlo para uso de la comunidad, el espacio está custodiado por militares que impiden el ingreso de personas.

Viernes 22

Conductores de buses del barrio Castilla de Medellín comienzan un cese de actividades por atentados y amenazas de bandas delincuenciales. Para los conductores el amparo de la autoridad no es suficiente porque dicen que sólo se hace durante 3 ó 4 días, luego de los cuales vuelven a quedar a merced de las bandas. Son cerca de 55 los buses que quedan estacionados y cerca de 16 mil los usuarios afectados. Según versiones de personas del sector, la situación es muy complicada porque hay 5 bandas en la zona que presionan a los conductores y los obligan a pagar vacunas, de entre 50 mil y 72 mil pesos semanales. Tres casos de paro de transporte público de buses ocasionados por amenazas a conductores por cobro de vacunas se han presentado en menos de un mes.

Sábado 23

Una comisión de funcionarios estatales de España, liderada por el senador Joan-Josep Nuet, llega a Colombia, como parte del trabajo de verificación a la grave violación a los derechos humanos de las que vienen siendo víctimas varios sectores sociales en el país. Se reunirán con organizaciones sociales, dirigentes políticos, líderes sindicales y con el presidente de la Corte Suprema. La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea. Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos Humanos.

Unos 500 niños de instituciones educativas de Medellín marchan desde las 9:00 de la mañana para pedir reconocimiento y respeto por sus derechos. La caminata “Ruta de los Derechos” es liderada por el programa Crecer con Dignidad de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Bienestar Social. Parte del Parque Bolívar y llega a la Plaza Botero, pasando por el viaducto del Metro, Carabobo, la plaza Rojas Pinilla y El Raudal, y culmina en la Plaza Botero, donde se cumple un programa cultural y hay juegos callejeros.

Domingo 24

El Consejo Regional Indígena Zenú de Córdoba y Sucre y organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian el asesinato de su secretario, Efraín Basilio, en el municipio de Sampedra (Sucre). El dirigente indígena había sido reportado como desaparecido el pasado viernes ante las autoridades y su cuerpo es hallado en una zona boscosa el día sábado, degollado y parcialmente incinerado, según la jefatura policial del departamento (provincia) de Sucre. Este es el segundo hecho que enluta al resguardo indígena Zenú, pues el pasado 24 de agosto, el capitán del cabildo indígena de Comején, municipio de Purísima (Córdoba), Bernabé De Agustín Roqueme, de 45 años, fue asesinado de múltiples balazos en horas de la noche. El cacique mayor del resguardo indígena Zenú de Sucre y Córdoba, Nelson Zurita, quien había denunciado amenazas, asegura que la disputa de los territorios por parte de las bandas emergentes, han generado panfletos desde octubre del año pasado con amenazas contra la comunidad indígena Zenú.

Un 80% de los conductores de 55 buses de las rutas 262 y 265 de Castilla decide reanudar la prestación del servicio público que se encontraba paralizado desde el viernes en la noche por los ataques y amenazas de las bandas delincuenciales contra los conductores.

Martes 26

Diferentes organizaciones sociales rechazan la propuesta del Gobierno Nacional sobre la incorporación de 1.000 jóvenes estudiantes como informantes de la Fuerza Pública en la ciudad de Medellín y advierten que la medida convertiría a los estudiantes y jóvenes en objetivo, en la guerra interna que se está viviendo en esta ciudad. El presidente Álvaro Uribe anuncia en horas de la mañana desde Medellín la decisión de “vincular a través de la fuerza pública, 1.000 jóvenes estudiantes universitarios de Medellín como informantes” a cambio de un pago de 100 mil pesos mensual “a título de bonificación”. También anuncia la llegada de 1.300 policías y 137 investigadores más a esa ciudad “para combatir el crimen”. Las voces de rechazo no se hacen esperar en todo el país; algunos manifiestan que la meta debería ser excluir definitivamente a los jóvenes del conflicto y no delegar a los privados la responsabilidad que le compete al Estado en materia de seguridad, además de reiterar que este tipo de propuestas chocan con disposiciones del Derecho Internacional Humanitario como la vinculación de civiles a este tipo de actividades. El recrudecimiento de los delitos en esa ciudad ha sido atribuido por las autoridades al enfrentamiento de pequeñas mafias que buscan quedarse con el negocio generado por el narcotráfico. Según informes de Medicina Legal, en 2009 hubo 2.178 homicidios en Medellín, lo cual representa un aumento del 108%, toda vez que en 2008 se registraron 1.044 delitos entre robos, los homicidios y los secuestros en Medellín.

Seis integrantes de un grupo cívico, llamado 'No más Silencio', cumplen 7 días de estar encadenados a las oficinas de la Alcaldía de Calarcá (Quindío) para protestar por el proyecto de peatonalización de la carrera 25 de este municipio. Los manifestantes piden

que suspendan el proyecto que tendrá un costo de 7 mil millones de pesos y empezaría a ejecutarse este año. Aseguran que la deuda que se va a adquirir es inviable y que los más afectados serían los ciudadanos que pagarían los impuestos durante más de 15 años. El grupo cívico 'No más Silencio' considera que el gasto es innecesario y que debería invertirse en asuntos que beneficien verdaderamente a la comunidad evitando que se generen sobre costos en el presupuesto del municipio.

Habitantes del barrio La Chinita y defensores de Derechos Humanos denuncian amenazas contra la población del sector por medio de panfletos que reparten motociclistas armados. En los panfletos se hace una advertencia a las personas para que no permanezcan en horas nocturnas en las calles.

Miércoles 27

En el marco de la 7ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con la Unión Europea, los diputados del Parlamento Europeo escuchan, por primera vez, la voz del sindicalismo colombiano en torno a la situación de los derechos humanos y la violencia antisindical en el país, esgrimidas como razones que los eurodiputados deben tener en cuenta a la hora de votar un acuerdo comercial con Colombia., pese a que el gobierno colombiano hizo lo posible para que este tema no se tratara. En la sesión de la Comisión de Comercio, que decidió abordar el tema del TLC con Colombia desde un enfoque de derechos humanos, por parte de Colombia, intervienen un representante del gobierno, otro de los empresarios, el director del área de Derechos Humanos de la CUT y otro sindicalista que actúa como vocero del gobierno y que es presentado como "independiente".

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) presenta su Informe 2009 en una conferencia de prensa en la que analiza la política de seguridad democrática del Gobierno, el eje central de la gestión de Uribe. Esta Organización No Gubernamental (ONG), dedicada al estudio del conflicto armado colombiano, señala que sólo en 2009 alrededor de 286.389 personas fueron desplazadas y un total de 2,4 millones de colombianos ha sido víctima del desplazamiento forzado desde 2002, cuando el presidente Uribe llegó al poder, lo que supone la mitad de los 4,9 millones registrados en los últimos 25 años. Sólo en 2009 "alrededor de 286.389 personas fueron desplazadas", un 24 por ciento menos que en 2008, cuando se registró la cifra récord de 380.863. La ONG reconoce que ha habido avances en algunos sectores de la sociedad, pero no para toda la población. Los departamentos más afectados por este fenómeno son Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar, Cesar, Meta y Guajira. La primera semana de 2010, el Gobierno Nacional declaró una caída del 56% en las cifras de desplazamiento para el periodo de enero a noviembre de 2009, comparado con el mismo periodo en 2008, cifras que fueron rechazadas por CODHES.

Jueves 28

La Corporación SISMA-Mujer denuncia ante la comunidad nacional e internacional las amenazas de muerte que el grupo denominado "Águilas Negras" hace a lideresas y líderes en situación de desplazamiento, además del plan de "aniquilamiento" a diferentes organizaciones sociales, entre ellas la Corporación Sisma Mujer. Sisma Mujer es una organización no gubernamental de carácter feminista, dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, hace parte de la Red Nacional de Mujeres y es reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo de asesoramiento a instituciones gubernamentales y apoyo a organizaciones sociales. Cuenta con un Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia "En situaciones de Conflicto Armado las Mujeres también tienen Derechos". Por lo tanto, la Red Nacional de Mujeres exige al Estado y a los organismos responsables de velar por la protección a los derechos humanos de la población colombiana, que se manifiesten y coordinen actividades en las que de verdad se responda, de manera eficiente, a la defensa y protección de las vidas de las personas que lideran procesos de empoderamiento y exigibilidad de derechos en las comunidades en situación de desplazamiento, y en particular por las vidas e integridad de las mujeres.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denuncia en un comunicado que presuntos guerrilleros de las FARC habrían asesinado a un indígena y herido a otros 3 lugareños al atacar un camión que transitaba por una carretera del Cauca el pasado lunes en el sitio Los Robles. Detalla el documento que la situación se generó por los enfrentamientos que se presentan en esta parte del país entre tropas del Ejército colombiano y presuntos guerrilleros de las FARC. La organización indígena señala que tanto el "Ejército como la guerrilla son culpables de los hechos lamentables, unos por subirse al vehículo que transportaba civiles y los otros por atacar indiscriminadamente".

Las Autoridades Indígenas del Resguardo Cañamomo-Lomapieta, jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía Caldas, manifiestan gran alarma y preocupación acerca del inminente peligro de agresión violenta que corre la comunidad indígena en general y en especial las víctimas de la masacre de la Herradura ocurrida en el año 2003 en la vía que va del municipio de Supía a Riosucio Caldas, por la terrible amenaza que el grupo denominado "Águilas Negras" ha lanzado contra ellas. Hacen un llamado urgente a la comunidad internacional y solicitan que en sus países se reúnan con autoridades, juristas, jueces, humanistas, demócratas y les soliciten pronunciarse de manera urgente ante el gobierno colombiano para que frene de inmediato la presencia e intimidación que este grupo de hombres armados viene haciendo en las comunidades indígenas del municipio de Riosucio Caldas Colombia. La masacre de la Herradura fue una de las grandes agresiones sufridas por el Pueblo Indígena Emberá Chamí del departamento de Caldas, ocurrió el día 8 de junio del año 2003, siendo aproximadamente la 1:00 de la tarde en el sector la Herradura en la comunidad de Alto San Juan, jurisdicción del Resguardo Cañamomo Lomapieta, sobre la carretera Troncal de Occidente que de Riosucio conduce al municipio de Supía (Caldas), fue atacada, por un grupo de hombres fuertemente armados entre los cuales habían uniformados y otros con prendas de civil y utilizando armas largas y granadas, la ambulancia OU 5723 propiedad del Cabildo.

Viernes 29

Organizaciones estudiantiles y juveniles desarrollan con éxito en Bogotá una concentración en la carrera 7ª con avenida Jiménez para demostrar su descontento ante el anuncio del Presidente Uribe de vincular en la ciudad de Medellín a 1.000 estudiantes como informantes de la Fuerza Pública, con una bonificación de 100 mil pesos mensuales, con el supuesto fin de combatir la criminalidad que se ha apoderado de la capital del Departamento de Antioquia. Voceros del estudiantado universitario y de secundaria ratifican su posición contraria a esta iniciativa de la Casa de Nariño y manifiestan que han dado inicio a un plan nacional de movilizaciones por mejoras en educación, empleo, salud y muchas oportunidades para los jóvenes, en vez de acciones que los involucren en la guerra interna. La iniciativa del presidente Uribe ha recibido el rechazo de sectores políticos, académicos y ciudadanía en general.

La Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares (FUNTRAENERGETICA) denuncia la negativa de la transnacional Continental Gold Ltd, para solucionar peticiones de sus trabajadores en el Municipio de Buritica en el Departamento de Antioquia, quienes se organizaron en un sindicato de empresa a finales de 2009 y presentaron su pliego de peticiones, iniciándose las negociaciones el 12 de enero de 2010. Transcurridos 15 días la comisión negociadora por parte de la empresa se niega a resolver las peticiones obreras presentadas y como respuesta adelanta una campaña para convencer a los trabajadores renunciar al sindicato. En este momento el sindicato cuenta aproximadamente con 100 afiliados; la empresa manifiesta tener 166 trabajadores activos en la planta de producción en Buritica - Antioquia. Los trabajadores exigen en su pliego, aumentos salariales del 15%, diferentes auxilios económicos y sociales para ellos y sus familias, estabilidad laboral, reconocimiento sindical, garantías y derechos laborales, seguridad industrial y seguro de vida, primas extralegales, inversión social para las comunidades del municipio, entre otros puntos.

Sábado 30

La CUT denuncia ante la opinión pública que la llamada emergencia social decretada por el Presidente Uribe y el paquete de medidas que la desarrollan constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.

Domingo 31

Autoridades indígenas y militares informan que una pareja de indígenas y su bebé de año y medio resultan heridos de gravedad por un bombardeo erróneo de militares que perseguían a una columna de las FARC en el noroeste del país.

Glosario de Siglas

ACIN	Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios
CIDH	Comisión Interamericana De Derechos Humanos
CODHES	Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
COMOSOC	Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia
CRIR	Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR)
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
EPS	Entidad Promotora de Salud
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FUNTRAENERGETICA	Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares
ICEM	Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (siglas en inglés)
INPEC	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
MNSSS	Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
MOVICE	Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
SINTRACARBÓN	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón
SINTRAINAGRO	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO)

Relevamiento y Sistematización a cargo de Diana Patricia Cárdenas Quintero

Coordinación a cargo de Guillermo Correa

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS y <http://colombia.indymedia.org/>

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Febrero de 2010

Editada en agosto



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 632

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia*



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Diana Patricia Cárdenas Quintero

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas, Agencia de Información
Laboral ENS e Indymedia Colombia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Febrero de 2010

Lunes 1

Miles de indígenas del Cauca liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), inician una marcha hasta el centro de Popayán, con el fin de lograr que el Ministerio de Educación Nacional les garantice y permita manejar un Sistema Educativo propio. Por su parte, el alcalde de Popayán, Ramiro Antonio Navia Díaz, convoca a un consejo de seguridad para adoptar una serie de medidas, especialmente orientadas a ubicar a los indígenas en una zona donde no afecten el desenvolvimiento normal de la ciudad y se determina que será el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía el organismo que garantice el orden público durante la estadía de los indígenas.

Cerca de 3.200 internos de la penitenciaría de Bogotá La Picota, se declaran en huelga ante las deficiencias que existen en el sistema de salud y atención jurídica de los internos. En el pliego de petición de los detenidos se solicita la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, con el fin de realizar la verificación de sus demandas y la pronta resolución de la condición en la que se encuentran.

Más de tres mil personas vestidas de blanco marchan por las calles del municipio de Palermo, en el departamento de Huila, para rechazar el ataque que se presentó el pasado 16 de enero en el pueblo con la explosión a control remoto de una motocicleta abandonada. La explosión causó la muerte de dos policías y generó pánico en los pobladores.

Martes 2

El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, revela que éste organismo le entregaba informes periódicos al presidente Álvaro Uribe sobre la actividad sindical en todo el país. Señala que ese tipo de funciones no tenían objeto distinto al de prever posibles alteraciones de orden público, lo cual era una actividad normal dentro de ese organismo de seguridad. Seguimientos a sindicalistas y acciones de inteligencia en marchas y protestas, además de informes periódicos (verbales y telefónicos), eran algunos de los reportes que el ex director del DAS dijo le entregaba al presidente de la República. En esa dinámica, el ex funcionario reconoció que en varias oportunidades, desde el DAS, se hicieron seguimientos de inteligencia a las marchas y paros que se adelantaban en distintas partes del país, pero aclaró que esto se daba para prevenir alteraciones de orden público, y presuntas infiltraciones. Las declaraciones las entrega el ex funcionario durante el segundo día de audiencia de juzgamiento que se adelanta en su contra, por presuntos delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad en documento, entre otros.

Miércoles 3

El Ministerio de Educación Nacional y las organizaciones indígenas del Cauca, llegan a un acuerdo en el que se le delegó a los 500 resguardos el manejo administrativo de la educación, lo que permite

levantar el paro que adelantaban estas comunidades. Isabel Segovia, viceministra de educación, llega hasta el sitio La Cabuyera donde se encontraban los nativos y, después de una disertación, se concluye que las autoridades indígenas, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, tendrán autonomía sobre unos 18 mil alumnos de primaria.

Jueves 4

Miles de indígenas con autoridades tradicionales locales, zonales y Consejeros Mayores del CRIC, llegan a Popayán, centro administrativo del departamento del Cauca, después de varias jornadas caminando por la vía Panamericana, con el fin de exigir al Ministerio de Educación el cumplimiento del Derecho Constitucional a la Educación diferencial, a través del Sistema Educativo Propio, que el ministerio se comprometió a adelantar desde agosto del año pasado.

Vendedores informales de apuestas del municipio de San Gil, en el departamento de Santander, realizan una jornada de protesta por el deterioro de sus condiciones laborales debido al cobro de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de apuestas por parte del Gobierno Nacional, los anuncios de las empresas sobre la eliminación de algunas prestaciones, el pago mínimo de comisiones por ventas y la falta de dotación completa para cumplir con su labor. Los manifestantes aseguran que permanecerán en paro hasta que les den alguna solución a las peticiones que están realizando. Los voceros de los vendedores señalan que la mayoría de las personas dedicadas a esta actividad se encuentran en situación de discapacidad física, desplazamiento forzado y pobreza.

Sábado 6

Con el lema "la salud no es un favor, es un derecho", miles de personas marchan en las principales ciudades del país alzando pancartas y agitando consignas para rechazar los decretos de Emergencia Social del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre los manifestantes se encuentran estudiantes, médicos, usuarios del sistema de salud, sindicalistas, agremiaciones de profesionales, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil en general que rechazan las medidas decretadas por el presidente Álvaro Uribe al amparo de la emergencia social para tratar de detener el colapso del sistema de salud, que incluye aumentos en impuestos al consumo de cerveza, licores, tabaco y juegos de azar, y obligan a los usuarios a pagar tratamientos de alto costo. Mientras que los manifestantes señalan a los medios que los decretos "vulneran derechos esenciales y refuerzan la privatización de un servicio básico", el presidente Álvaro Uribe, por su parte, defiende su iniciativa al afirmar que el Gobierno necesita garantizar fuentes de recursos para los servicios de salud, sin imponer el impuesto al valor agregado a los alimentos básicos, la educación y los servicios públicos. El Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia social el 19 de noviembre del año pasado, para poder expedir decretos sin intervención del legislativo y enfrentar la crisis (económica, principalmente) en los servicios de salud y de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Los decretos deben ser examinados aún por la Corte Constitucional.

La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) denuncia y rechaza las detenciones masivas que se vienen presentando en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Entre las 10 am y 1 pm, un comando especial del Ejército Nacional perteneciente a la Brigada 30, adelanta un operativo en zona rural del municipio de Teorama, en el municipio de Convención, y en el casco urbano del municipio del Tarra, donde proceden a capturar a cerca de 16 campesinos y campesinas de la comunidad afiliados a su Asociación. Según los testimonios de la comunidad, son sacados de sus viviendas esposados y luego son llevados en helicópteros. Hasta el

momento no se tiene información sobre el paradero ni el estado de estas personas. La Asociación hace un llamado a los organismos de control del Estado, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, para que intervengan ante el ejército nacional y se establezca de inmediato la situación física y la ubicación de los campesinos y, de la misma manera, los motivos por los cuales estos campesinos han sido detenidos.

Domingo 7

Con 36 maniqués tendidos en el suelo, cubiertos con sábanas blancas, a 20 metros del Club el Nogal de Bogotá, se realiza un acto simbólico para rechazar el terrorismo y para no olvidar el atentado ocurrido hace siete años. El acto es convocado por la Fundación Colombia Herida y la Fundación Plataforma para conmemorar el atentado contra el Club El Nogal perpetrado por la Columna Teófilo Forero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 7 de febrero de 2003, cuando explotó un carrobomba con 200 kilos de explosivo C-4 y amonio, en el norte de Bogotá, dejando como saldo la muerte de 36 personas y más de 200 heridas. El hecho fue condenado por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Miércoles 10

El Consejo Comunitario de los Manglares del Micay y la organización étnico-territorial de comunidades negras de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) denuncian ante la opinión pública, por medio de un comunicado, las continuas amenazas, muertes y torturas de las cuales son objeto sus integrantes. Igualmente, denuncian que, entre 20 y 23 docentes, y un grupo de líderes comunitarios, habrían salido del corregimiento de Noanamito en López de Micay, en el municipio de Popayán como desplazados, en respuesta a las continuas amenazas y el temor por sus vidas. La organización enfatiza en su rechazo a todas las formas que atentan contra la vida y exigen garantías para el respeto de los derechos a la vida, libertad e integridad. Ante este crítico panorama, el Defensor del Pueblo, Víctor Meléndez, aseguró que, aunque no se conocen cifras exactas del grupo de desplazados que salieron de la localidad de Noanamito, éstos actualmente se encuentran en regiones vecinas de López de Micay e incluso algunos en el Valle del Cauca, donde tramitan el ingreso al Programa de Atención de la Población Desplazada ofrecido por el gobierno nacional.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) divulga el informe ‘Interceptaciones y seguimientos ilegales: grave intimidación al periodismo colombiano’, en el cual señala que “la obstrucción al trabajo periodístico tuvo un aumento dramático a raíz del escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas”. La fundación denuncia que en 2009, los periodistas colombianos sufrieron amenazas, interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales por el DAS, año en el que fue asesinado uno de ellos. En total serían 157 las agresiones perpetradas contra periodistas en el 2009. La organización muestra su preocupación porque, si bien las cifras en materia de seguridad física de los periodistas colombianos no se han deteriorado en los últimos dos años, tampoco se presenta una mejora en la situación.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y el Colegio Médico Colombiano (CMC) toman medidas para que la comunidad médica denuncie cualquier tipo de intimidación o restricción en su ejercicio profesional. El Presidente del CMC, Roberto Baquero, explica que la petición se hace como una medida preventiva para evitar constricciones frente a la forma cómo atienden y diagnostican los médicos, después de la expedición de los decretos para solventar la crisis del sector salud.

Jueves 11

Cerca de 60 carrozas y grupos folclóricos de los distintos departamentos de la Región Caribe y demás municipios del Atlántico participan en la décima tercera versión del Carnaval Educativo en Sabanalarga. Es un recorrido de dos kilómetros con mensajes alusivos a la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la promoción de la salud sexual y reproductiva, que cuenta con la presencia de personalidades de la vida pública colombiana. Este desfile hace parte del trabajo adelantado por la Gobernación del Atlántico, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Universidad del Norte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de Protección Social, para la implementación de la Política Pública de Juventud.

Viernes 12

Más de 20 mil motociclistas, realizan en 32 ciudades del país, una caravana en contra del proyecto de ley 207, que denominan "Antimoto". El objetivo de la caravana es luchar por los derechos de los motociclistas, que según ellos se están viendo claramente vulnerados con este proyecto legislativo que va en contra de las políticas de seguridad social planteadas por el mismo Gobierno, al pretender imponer el cobro de peaje y prohibir también llevar acompañante menor de 18 años, a no ser que se demuestre que es el hijo del conductor o que se tiene la patria potestad del menor. El proyecto de ley fue radicado el pasado 3 de noviembre en la Comisión VI de la Cámara de Representantes por parte del ministro de Transporte. Entre otras cosas, incluye el desmonte al subsidio que se recibe en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el pago de impuestos para las motos de 125 centímetros cúbicos y faculta a las autoridades de tránsito para restringir el libre uso de la motocicleta con acompañante.

Cerca de 350 personas se enfrentan con la policía durante el desalojo de familias asentadas en un predio privado en la vereda Potrerito del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Luego de que las autoridades tomaran control del predio, las familias se han tomado la escuela de la vereda. Estas mismas personas habían sido desalojadas recientemente de otros terrenos propiedad del Hospital Mental del municipio.

Lunes 15

Habitantes de barrios del sur occidente de Bogotá protestan por el abandono oficial y exigen la presencia del Alcalde mayor, Samuel Moreno Rojas, para establecer acuerdos que solucionen sus exigencias en materia de inseguridad, vías y demás obras de desarrollo. La protesta paraliza la prestación del servicio de transporte de Transmilenio y genera un enorme caos vehicular. Al finalizar la mañana, se llega a un acuerdo para realizar una reunión entre los voceros de la manifestación y las autoridades de la localidad.

Continúa el conflicto laboral en el campo petrolero que opera la British Petroleum (BP) en Tauramena, en el departamento de Casanare que afecta a cerca de 400 trabajadores, quienes, desde el pasado 22 de enero, se declararon en huelga por mejores salarios y condiciones laborales y cese de la persecución contra los y las trabajadoras organizadas. Los habitantes de la población en Tauramena denuncian graves agresiones por parte de la Fuerza Pública contra las personas que se encuentran apoyando la protesta por los bajos salarios que pagan los contratistas del pozo petrolero.

Miles de personas se toman una importante vía de la ciudad de Cali ante la falta de entrega de

subsidios de Familias en Acción. El aviso de una funcionaria de Acción Social sobre el cese de entrega de tarjetas para reclamar las ayudas del gobierno, por la caída del sistema, desencadena la ira de centenares de personas (en su mayoría mujeres) que llevaban hasta 48 horas haciendo fila a la intemperie en las afueras del Coliseo Maria Isabel Urrutia, en el Distrito de Aguablanca, a la espera de una tarjeta que les permitiría reclamar 50 mil o 100 mil pesos (según sea el caso), cada dos meses. Los disturbios se desencadenan cuando varias personas enfurecidas retiran las vallas de la Policía, con las cuales cierran las vías, y forcejean con la Policía, cuando uniformados intentan rescatar las vallas metálicas. Siguen enfrentamientos con piedras durante más de una hora, tiempo durante el cual el tráfico por el sector se paraliza. Las personas afectadas denuncian la falta de condiciones logísticas, técnicas y operativas para la entrega de las tarjetas como: falta de protección contra el intenso sol, la prestación de sólo cuatro baños portátiles que cobran 500 pesos por persona, la venta de puestos y el funcionamiento de sólo 20 computadoras para la atención de miles de personas.

La Misión Internacional de Observación Preelectoral, Global Exchange, denuncia que, luego de visitar varias zonas de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca, encontró una serie de presiones y amenazas de algunos candidatos al Congreso hacia los pobladores que se benefician con los subsidios del Programa Acción Social. De acuerdo con esta Organización No Gubernamental (ONG), varios líderes denunciaron que aspirantes a la Cámara y al Senado han asistido a encuentros con beneficiarios del programa en los que les indican que, si no votan por ellos o por partidos afines al Gobierno Nacional, se les eliminarán los subsidios. La Misión de Observación Electoral (MOE) hace seguimiento de las campañas electorales que se adelantan para los próximos comicios del 14 de marzo.

Martes 16

Los 142 trabajadores de la planta de la transnacional lechera DPA-NESTLÉ, en Valledupar, inician una huelga, en respuesta a la intransigencia de la empresa para negociar el pliego de peticiones que los trabajadores sindicalizados presentaron desde el pasado 17 de diciembre.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Asociación de Cabildos Embera, Tule y Woounan del Chocó OREWA, denuncian a la opinión pública nacional e internacional la sistemática violación a los derechos humanos que vienen cometiendo la Empresa Estadounidense Muriel Mining Corporation, miembros del ejército y la fuerza Aérea Colombiana en beneficio del proyecto minero “Batolito de Mande”, concesionado de manera inconsulta en el territorio sagrado del pueblo Embera, ubicado entre los Departamentos de Antioquia y Chocó. Los indígenas se quejan de las agresiones y de las reiteradas acusaciones que se les hace de ser miembros de las FARC, además insisten sobre la coartación impuesta sobre el ejercicio de sus tradiciones ancestrales.

Miércoles 17

Más de 200 trabajadores de la atunera Seatech Internacional protestan masivamente frente a la Alcaldía de Cartagena por el perjuicio a su salud y al bienestar laboral que genera el mal manejo del carbón en la empresa Puerto Mamonal y aseguran que el polvillo que emana de la empresa vecina se ha vuelto tan insoportable que se mete hasta en las loncheras de sus comidas, ensucia las mesas del casino de alimentos, los pisos, los techos, los baños, sus uniformes, la materia prima, las herramientas e incluso la planta donde laboran, lo cual es un peligro, ya que manipulan alimentos.

Jueves 18

Miles de personas, entre trabajadores de la salud, pacientes, sindicalistas, estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones sociales marchan en las principales ciudades del país para protestar contra los decretos de Emergencia Social que busca reformar el sistema de salud. La Jornada Nacional de Protesta es convocada por el Comando Nacional Unitario -conformado por las cuatro centrales sindicales del país: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)- y es respaldada por diversas organizaciones sociales y políticas del país. Varias organizaciones han mostrado su preocupación por la declaratoria de emergencia social hecha por el Gobierno nacional el día 23 de diciembre de 2009. El decreto 128 de 2010, expedido bajo el amparo de la emergencia social, establece que los servicios médicos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) deberán ser costeados por los y las pacientes usando sus cesantías, ahorro pensional e, incluso, préstamos ante entidades bancarias. Sólo en caso que se demuestre la total carencia de recursos económicos para el pago de los servicios que estén por fuera del POS el Estado pagará, sin embargo, limitando dicho gasto a la disponibilidad de recursos que cuente para estas cuestiones.

Más de 100 trabajadores y empleados de la Universidad del Tolima se declaran en asamblea permanente. El cese es total y al menos 5 mil estudiantes presenciales y 3 mil a distancia no reciben clases en las facultades. El Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), seccional Tolima, afirma que las asambleas tienen el respaldo de los maestros y los estudiantes. También afirma que el presupuesto de la Universidad "abunda para la parte administrativa, para la clientela y la burocracia", más no para el mejoramiento de la calidad educativa, el fomento a la investigación, la academia y la proyección social. Los trabajadores piden a las directivas no adelantar contratación con terceros para actividades misionales o de apoyo, propias de la institución. Además solicitan la apertura de concursos para cubrir los cargos vacantes en la planta de personal. También piden salud ocupacional garantizando dotaciones y protección en seguridad industrial.

La Defensoría del Pueblo confirma el desplazamiento masivo de 60 familias indígenas (cerca de 300 personas) en el departamento de Nariño, que huyen de enfrentamientos entre la Infantería de Marina y las FARC. Entre los desplazados se encuentran hombres, mujeres, niños y niñas, los cuales pertenecen a los caseríos La Tórtula (22 familias), Casa Grande (23 familias) y Robles (15 familias). El desplazamiento masivo fue desencadenado por un enfrentamiento que se habría presentado mientras se desarrollaba una Asamblea de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA) convocada por los indígenas debido a los continuos retenes realizados por parte de los grupos armados ilegales en las zonas urbanas. El contexto Colombiano está marcado por la presencia de grupos de guerrillas y grupos de paramilitares, ambos hostigan y acosan a la población civil en muchas regiones del país. La Defensoría del Pueblo denuncia además que en los meses recientes se ha conocido de cerca de 30 homicidios selectivos en la zona por parte de grupos armados ilegales que operan sobre la costa pacífica de Nariño.

Sábado 20

Cerca de un mes cumple hoy el paro que, desde el pasado 22 de enero, adelantan 400 trabajadores contratistas en el campo petrolero que opera la multinacional British Petroleum (BP) en Tauramena, en el departamento de Casanare sin que hasta el momento se vislumbre una salida al largo conflicto.

Los habitantes del corregimiento El Salado, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, realizan un acto simbólico con velas y fotografías para recordar y honrar a los amigos y parientes que cayeron a manos de los paramilitares durante varios días de masacre y tortura en febrero del 2000. Uno a uno son nombrados, y el pueblo camina por sus calles parando en cada esquina, cada portón, cada sitio por donde pasó el horror y se llevó a sus amigos y parientes. Se prohíbe el licor y la música porque el día y la noche estarían dedicados a recordar y honrar a sus muertos. Los habitantes forman con velas la frase: El Salado vive. Y vive, a pesar de las promesas no cumplidas, del riesgo que es habitar en los montes de María, terreno que se disputan los grupos armados ilegales.

El informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) habla de 61 víctimas mortales, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Mientras la cifra que maneja la Comisión Colombiana de Juristas asciende a 93 campesinos muertos. La Comisión Colombiana de Juristas llama la atención sobre la realidad que viven hoy los sobrevivientes de El Salado, quienes a la fecha no han sido reparados y es poca la justicia en su caso. De los 450 paramilitares que participaron en la masacre, solo 13 están pagando su condena y, de los 25 supuestos infantes de marina que participaron en ella, solo un miembro ha sido acusado penalmente.

Lunes 22

Cerca de 300 personas se reúnen en la Plaza de Bolívar, ciudad de Bogotá, en un acto simbólico para 'iluminar' la decisión de la Corte Constitucional ante el referendo reeleccionista con un faro de 5 metros de alto y cientos de linternas encendidas. El acto simbólico es convocado por la Alianza Ciudadana por la Democracia, un colectivo que agrupa organizaciones sociales, ex constituyentes y ciudadanos que se oponen a una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. La jornada también está acompañada de un grupo de zanqueros, música de tambores, gente con la cara pintada de colores, pancartas y discursos de ciudadanos demandando la ley de referendo ante la Corte Constitucional y solicitándole a la Corte que la declare como inexecutable.

Unas 200 personas en situación de discapacidad se toman la catedral de Neiva y se declaran en ayuno permanente para protestar porque "ha sido violentado el derecho a la igualdad" y no han podido acceder a los proyectos de vivienda social que ofrece la Alcaldía. Los manifestantes solicitan garantías de "acceso preferencial" a un macro proyecto de 5 mil viviendas, llamado 'Bosques de San Luis', que se levanta en zona rural de Neiva desde el inicio de la administración del actual alcalde, Héctor Aníbal Ramírez. La Personería de Neiva se hace cargo de la situación y solicita una reunión con la directora de vivienda municipal para que les brinde una asesoría directa frente al tema del acceso, y de cumplimiento de requisitos, con condiciones especiales para este grupo de población. También adelantan censos para hacerle seguimiento al proceso de las personas que están haciendo las solicitudes y seguimientos al municipio para ver el cumplimiento y la efectividad de este proceso.

Miércoles 24

Conductores de volquetas realizan un desfile de aproximadamente 300 vehículos desde Navarra, en el municipio de Bello, a la que se suman otras 100 del Sur y del Occidente de Medellín, para protestar por la alza en tarifa de un peaje -ubicado en el sector de Niquía, en el municipio de Bello-, para los vehículos tipo volqueta. Los conductores generan caos vehicular en la autopista Norte y en las inmediaciones al Centro Administrativo La Alpujarra, mientras solicitaban la presencia del

Gobernador de Antioquia para llegar a un acuerdo. La movilización de los 400 conductores se desarrolla con tranquilidad y orden durante todo el recorrido por la autopista Norte, hasta llegar a las inmediaciones de La Alpujarra donde se viven los momentos de mayor tensión y de gran congestión vehicular, cuando la Policía y el Tránsito bloquean el desfile para evitar el paso hacia el centro administrativo, como estaba previsto. Después de varias horas de diálogo, ambas partes llegan a un acuerdo para bajar la tarifa del peaje y los conductores, por su parte, se comprometen a cumplir con la reglamentación establecida para este tipo de vehículos.

Viernes 26

Miles de personas se aglutinan en las la Plaza de Bolívar, en las afueras del Palacio de Justicia, en Bogotá, para celebrar que la Corte Constitucional haya fallado en contra de la realización de un referéndum para la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. La Corte lo ha declarado como inconstitucional, por irregularidades durante el trámite de la Ley que habilita el proyecto que modifica la Constitución para permitir la elección por tercera vez del jefe de estado. La ponencia negativa del magistrado Humberto Sierra Porto, influyó substancialmente para lograr que la propuesta se hundiera, ya que demostró la inexequibilidad debido a varios vicios de trámite declarados insubsanables.

Glosario de Siglas

ACIESNA	Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño
ACSC	Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
ASCAMCAT	Asociación Campesina del Catatumbo
BP	British Petroleum
CIA	Central Intelligence Agency
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
CGT	Confederación General del Trabajo
CMC	Colegio Médico Colombiano
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CPC	Confederación de Pensionados de Colombia
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
EPS	Empresas Promotoras de Salud
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FLIP	Fundación para la Libertad de Prensa
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MOE	Misión de Observación Electoral
OEA	Organización de Estados Americanos
OIA	Organización Indígena de Antioquia
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONG	Organización No Gubernamental
POS	Plan Obligatorio de Salud

SINTRAUNICOL	Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa.

Relevamiento y sistematización a cargo de Diana Patricia Cárdenas Quintero.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Herald y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS e Indymedia Colombia.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Marzo de 2010

Editada en agosto



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 651

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia***



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Diana Patricia Cárdenas Quintero

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas, Agencia de Información
Laboral ENS e Indymedia Colombia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Marzo de 2010

Lunes 1

Pequeños y medianos empresarios y transportadores del servicio urbano de Bogotá inician un paro en la prestación del servicio desde las primeras horas de la madrugada. La Asociación de Pequeños Transportadores (APETRANS) indica que son cerca de 16.400 vehículos, entre buses, busetas y colectivos, los que han dejado de circular por la ciudad y municipios aledaños, para solicitar a la Administración Distrital ser incluidos en el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público. El paro genera una grave situación de movilidad y de orden público en la ciudad, por la generación de disturbios y el colapso de Transmilenio debido a la confluencia masiva de usuarios. Mientras que un sector del gremio de taxistas y del transporte intermunicipal de pasajeros anuncia su apoyo al paro, el Alcalde Samuel Moreno, por su parte, asegura que no se dejará presionar por el paro de transportadores, así mismo explica que el Distrito hará todo lo posible para garantizar el transporte de los bogotanos. El primer día del paro se cierra con disturbios especialmente en Kennedy y Bosa, donde manifestantes levantan barricadas, queman llantas y se enfrentan a piedra con la Policía.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (SINTRAMETAL) denuncia el despido masivo de 27 empleados en la empresa siderúrgica de Diaco-Tuta, durante la presente semana, a pesar de estar protegidos por fuero circunstancial. Con estos nuevos despidos ya son 40 los empleados que, en los últimos meses, han salido injustificadamente de la empresa perteneciente al grupo brasileño Gerdau. Los trabajadores despedidos eran de las áreas de metálicos, laminación y mantenimientos mecánico y eléctrico. SINTRAMETAL anuncia que tomará medidas de choque por estos nuevos despidos en la siderúrgica de Diaco, que actualmente cuenta con cerca de 480 empleados.

Colombia concluye la negociación de un acuerdo comercial multipartito con la Unión Europea (UE).

Martes 2

Por segundo día consecutivo continúa el paro de transporte en Bogotá, agravado por la inclusión de algunas empresas de taxis y de 76 empresas de servicio intermunicipal. La ausencia de buses, busetas y colectivos es total en la ciudad y cientos de miles de personas se movilizan a pié tratando de encontrar algún medio para llegar a sus sitios de trabajo. Los taxistas se suman desde la madrugada al cese de actividades, haciendo una operación tortuga y bloqueando importantes vías, entre ellas la Avenida Eldorado, la Avenida Primero de Mayo con Avenida 68 y, la calle 80 en el sector de Quirigua, La Policía interviene para restablecer la movilidad. Sólo opera el sistema Transmilenio con una alta congestión de usuarios en portales y estaciones. APETRANS reitera que el paro de buses continúa indefinidamente, luego de una fallida reunión con el Ministerio de Transporte a la cual asisten el director de la Policía Nacional, el comandante de la Policía de Bogotá y 44 representantes de las 60 empresas que se encuentran en paro.

Después de 67 días de cese de actividades, 185 obreros de la finca palmera Palo Alto, en el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena logran un acuerdo con la empresa, la cual,

durante todo este tiempo, se había negado a reconocerles sus derechos y los había despedido ilegalmente. Se recuerda que a mediados de enero, en esta finca, se vivió un dramático momento cuando un grupo de hombres armados irrumpió disparando contra los trabajadores que adelantaban el cese de actividades desde el 23 de diciembre, con el ánimo de desalojarlos. Una acción en la que un trabajador resultó herido. Desde entonces las posiciones se polarizaron. Luis Hernán Correa, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), resalta la importancia de este acuerdo para su organización y los trabajadores del sector de la palma. “No es fácil en estos tiempos y en un sector tan antisindical como el palmero, lograr las conquistas que lograron los trabajadores de Palo Alto, y menos en las condiciones en que lo hicieron”.

Miércoles 3

Luego de 22 horas de negociación, los pequeños transportadores se niegan a levantar el paro que ya completa 58 horas. Bogotá sigue sin transporte y el alcalde mayor, Samuel Moreno, anuncia la implementación de un conjunto de medidas para garantizar la movilidad en la ciudad, entre las que se encuentran la suspensión del pico y placa, la cancelación de clases en los colegios, nuevas rutas de Transmilenio y la suspensión de un partido de fútbol del campeonato nacional que estaba programado para jugarse en la ciudad. La situación en las calles es cada vez más caótica, los parqueaderos donde se guardan los buses, microbuses y colectivos siguen desocupados, los pequeños y medianos empresarios esperan llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver con los rendimientos por el pago que les ofrecen por sus vehículos, e insisten en que no cederán ante la propuesta del Distrito con respecto al límite de 18% de rentabilidad fija anual, es decir un 1,5% mensual. Los protagonistas del paro pretenden un 2% mensual; sin embargo, el alcalde Samuel Moreno ha dicho que aumentar el porcentaje es afectar las finanzas para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La Secretaría de Salud denuncia ataques a la Misión Médica durante el paro. Dos ambulancias del Distrito fueron atacadas por manifestantes en el sector de Suba- La Gaitana, cuando acudían a atender a varios heridos.

Más de tres mil personas marchan en Manizales para protestar contra la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en la ciudad protestan porque la entrada en funcionamiento del Transporte Integrado de Manizales (TIM) en días anteriores coincide con el aumento de cerca del 17% (200 pesos) en el precio de los pasajes de los otros medios de transporte público, con la reducción del número de rutas y con la escasez de tarjetas inteligentes, que reemplazan el efectivo. La protesta es promovida por estudiantes de la Universidad de Caldas y el Comité de Usuarios de Servicios Públicos, comienza de forma pacífica en horas de la mañana, recorre la avenida Santander -principal vía de la ciudad-, pero termina en una batalla campal entre manifestantes y fuerza pública. Ocho personas resultan heridas y 74 son capturadas, lo que obliga al mandatario local, Juan Manuel Llano, a declarar la Ley Seca.

Jueves 4

Después de cuatro días de paro y dos de negociaciones, termina el paro de transportadores en Bogotá. Durante toda la mañana es total la ausencia de buses, busetas y colectivos en Bogotá, debido al desarrollo del paro de transporte urbano. Los pequeños transportadores de la ciudad ratifican la orden de paro indefinido tras el rompimiento de las conversaciones con las autoridades de la Alcaldía del Distrito Capital y el Ministerio del Transporte. Finalmente, un acuerdo firmado en horas de la tarde entre la Alcaldía de Bogotá y el gremio de APETRANS, permite levantar el histórico y violento paro de transporte público que afrontó la capital del país durante los últimos

cuatro días. El documento firmado entre las partes establece que los propietarios de los buses tendrán una ganancia mínima mensual del 18% anual en el Sistema Integrado de Transporte Público, que inicia el próximo año y cuyas 13 zonas se adjudicarán el próximo 2 de julio. De la misma manera, logran acordar el establecimiento de mesas de trabajo para seguir discutiendo algunos aspectos del Sistema Integrado de Transporte Público.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, protestan por el anuncio de un recorte presupuestal. Se presentan fuertes enfrentamientos entre los estudiantes y la Fuerza Pública.

Más de 600 personas, entre comerciantes y taxistas, marchan de la Puerta del Sol al centro de la ciudad de Bucaramanga para protestar por el uso exclusivo que el sistema integrado de transporte masivo (Metrolínea) tiene de la carrera 15, vía arteria y céntrica de la ciudad. Según los comerciantes y los transportadores, el cierre de este corredor vial les ha ocasionado millonarias pérdidas ya que se prohibió allí el tránsito de taxis, busetas y vehículos particulares. La marcha termina disuelta, no finaliza en el punto programado y se registran roces con la Fuerza Pública. Algunos taxistas denuncian agresiones por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando la marcha se dirigía a la sede de la Alcaldía y fue disuelta por los agentes antidisturbios.

Después de 67 días de conflicto durante el cual la finca Palo Alto, en el departamento de Magdalena, se mantuvo ocupada por 185 trabajadores, la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa cede finalmente a las reivindicaciones de los ocupantes. A mediados del mes de enero en esta finca se vivió un dramático momento cuando un grupo de unos diez hombres armados irrumpió donde los trabajadores adelantaban un cese de actividades desde el 23 de diciembre, motivado por la negativa de la empresa a pagarles salarios atrasados y la cotización a la seguridad social, entre otros derechos. Los hombres entraron disparando con el ánimo de desalojarlos, acción en la que un trabajador resultó herido. Desde entonces las posiciones de ambas partes quedaron polarizadas.

La ocupación por parte de cinco mil pobladores indígenas de la estación de Policía de Piñuña Negro en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, durante 63 días termina con un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades indígenas. Las demandas de los indígenas incluían el fin al hostigamiento militar y paramilitar, negociaciones con el Gobierno por los esfuerzos de erradicación de la coca y un compromiso con el desarrollo social. Los esfuerzos de erradicación no incluían la ayuda prometida de sustitución de cultivos o mejoras a la infraestructura local.

En el municipio de Puerto Leguízamo, la estación de Policía de Puerto Piñuña, así como otras cuatro estaciones, fue ocupada durante 63 días por más de seis mil familias. Estas familias eran de ocho comunidades indígenas situadas a lo largo del río Putumayo. Al principio, el Gobierno hizo oídos sordos a las demandas por la negociación, pero finalmente fue obligado por el movimiento popular a entrar en un diálogo. Al final, el Gobierno firmó un acuerdo de 45 puntos prometiendo inversión social y un programa gradual y voluntario de sustitución de cultivos.

Viernes 5

La Gran Coalición Democrática (organización que aglutina a diversas fuerzas políticas, sindicales y populares) convoca a todas las organizaciones del país a participar de una vigilia en horas de la tarde en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, por iniciativa del grupo de Facebook que promueve la derogatoria de los decretos de la Emergencia Social en salud hecha por el Gobierno Nacional el 23 de diciembre de 2009 bajo el argumento de enfrentar la difícil situación atravesada

por el sistema de salud del país y la crisis de la Red Hospitalaria.

Sábado 6

Se realiza el Encuentro Nacional de la Red de Lucha contra el hambre y la pobreza en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (sede Macarena) en la ciudad de Bogotá.

Lunes 8

En varias ciudades del país se realizan marchas y diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Diferentes organizaciones sociales convocan para celebrar este día reflexionando sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en Colombia y realizan marchas por el respeto a los mismos.

La Gran Coalición Democrática realiza una masiva concentración frente a la Corte Constitucional -en la calle 12, entre carrera 7 y 8-, para exigir la declaratoria de inexecuibilidad de los 12 decretos de la Emergencia Social en salud.

Miércoles 17

Se presentan manifestaciones en los alrededores de la universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en la calle 72 con carrera 11. El Antidisturbios ESMAD controla la situación luego de dos horas de protestas en las cuales los manifestantes se enfrentan con piedras y palos a la policía, queman un paradero de bus y, así mismo, intentan quemar cajeros y motocicletas.

Alrededor de 20 activistas defensores de los animales se desnudan frente al Congreso en la ciudad de Bogotá para protestar contra un proyecto para reformar al Reglamento Nacional Taurino que busca prohibir todo tipo de manifestaciones en contra de la fiesta taurina. El proyecto de ley que se tramita en el legislativo, ordena a los alcaldes locales abstenerse de "patrocinar y/o promover cualquier campaña en contra del espectáculo o festejo taurino".

Domingo 21

Se realiza la asamblea de constitución de la Subdirectiva Regional Antioquia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de Transporte de Colombia (SNTT), que, en esta primera etapa, agremiará a los taxistas pero que a futuro se ampliará al resto de conductores de vehículos de servicio público. En esta asamblea se tratan los problemas más álgidos para los taxistas: la piratería por parte de automóviles particulares, la sobreoferta de taxis en el área metropolitana, y los desacuerdos que aún subsisten en el tema de "chatarización" o salida de circulación masiva de vehículos de transporte público en mal estado. Cabe señalar que en nuestro país el 52% de los taxistas son asalariados y el 48% son propietarios; en promedio laboran 60 horas semanales; el 46% no tiene prestaciones sociales y el 12% las tiene incompletas; sólo el 42% tiene cubierta su seguridad social completa (salud, pensiones y riesgos profesionales); y el 13% no está afiliado a ningún sindicato. El sindicalismo de taxistas es aún precario en Colombia. Los primeros en agremiarse fueron los de Cartagena, después los de Barranquilla, y ahora lo hacen los de Medellín.

Martes 23

Tras 60 días de conflicto laboral en el campo petrolero que opera la British Petroleum (BP) en el municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare, las partes involucradas se sientan a negociar y a buscar un acuerdo que permita solucionar una situación que afecta a unos 400 trabajadores, quienes desde el pasado 22 de enero sostienen una lucha por mejores salarios y condiciones laborales. En la mesa de negociaciones estarán delegados de los Ministerios de Protección Social y Medio Ambiente, y, en representación de los trabajadores, estarán varios directivos de la Unión Sindical Obrera (USO) y el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, quien, en declaraciones para la Agencia de Información de la Escuela Nacional Sindical (ENS), señala que el optimismo es moderado, debido a que la British Petroleum no se ha distinguido precisamente por el respeto al derecho de organización sindical de sus trabajadores.

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y populares realizan un plantón en solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare. El plantón se realiza frente a las oficinas de la multinacional en Bogotá.

Glosario de siglas

APETRANS	Asociación de Pequeños Transportadores
BP	British Petroleum
CGT	Confederación General del Trabajo
CPC	Confederación de Pensionados de Colombia
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ENS	Escuela Nacional Sindical
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
OEA	Organización de Estados Americanos
SETP	Sistema Estratégico de Transporte Público
SINTRAINAGRO	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
SINTRAMETAL	Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
SINTRAUNICOL	Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia
SITP	Sistema Integrado de Transporte Público
SNTT	Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de Transporte de Colombia
TIM	Transporte Integrado de Manizales
UE	Unión Europea
USO	Unión Sindical Obrera

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa.

Relevamiento y Sistematización a cargo de Diana Patricia Cárdenas Quintero.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS e Indymedia Colombia.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Abril de 2010

Editada en agosto



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 670

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia*



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Diana Patricia Cárdenas Quintero

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas, Agencia de Información
Laboral ENS e Indymedia Colombia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Abril de 2010

Viernes 2

Cerca de 1.500 campesinos se movilizan a la cabecera del municipio de Ituango Departamento de Antioquia, por enfrentamientos registrados entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona rural de esta población. El jefe de enlace del Departamento de Prevención y Atención de Desastres de Antioquia (DAPARD), Pablo Puerta, anuncia la coordinación de logística con el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada (CLAID), para realizar el censo y el acta del desplazamiento y así empezar a prestar la atención integral a la población.

Miércoles 7

Tras 44 días de cese de actividades, 142 trabajadores de la empresa Dairy Partners Americas – Nestlé, en Valledupar, llegan a un acuerdo que permite el levantamiento de la huelga que adelantaban desde el pasado 16 de febrero. El acuerdo se logra sobre la base de los puntos del pliego de peticiones que presentaron las tres organizaciones sindicales de esta multinacional lechera –SINALTRAINBEC, UTRADPA y SINTRADPA -, que tienen que ver con aumento salarial, mejoramiento de la cobertura de salud, subsidios a la educación, eliminación de los intereses de los créditos para vivienda que proporciona la empresa, garantías de estabilidad laboral y no represalias hacia los trabajadores que participaron en la huelga.

La Asociación Nacional de Desempleados de Pereira lidera una marcha por las calles de la ciudad para reclamar acciones urgentes que hagan frente a la grave situación de desempleo que se vive en el país.

Jueves 8

Maleteros y transportadores de carga y de personas en bicicleta colombianos bloquean el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Venezuela, para protestar por la detención de ocho compañeros por parte de las autoridades venezolanas. Los manifestantes queman llantas y montan barricadas para impedir el tránsito en el puente internacional fronterizo y exigir a las autoridades venezolanas no continuar con la persecución y acoso contra los colombianos.

Jueves 15

Se realiza una jornada nacional de movilización para solicitar a la Corte Constitucional que declare inexecutable los decretos de la Emergencia Social; estos decretos modifican tres normas del estatuto tributario, específicamente en los temas del pago de parafiscales y de seguridad social, que según el gobierno servirán para “aliviar” la crisis del sector salud. La movilización es convocada por

organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares agrupadas en la llamada Gran Coalición Democrática conformada por las centrales de trabajadores.

Sábado 17

Cientos de personas pertenecientes a la comunidad homosexual de Colombia protestan de forma pacífica en las puertas de la catedral de Bogotá contra las declaraciones del cardenal Tarcisio Bertone que, cinco días atrás, en Santiago del Chile, comparó homosexualidad y pederastia.

Martes 20

Alrededor de 200 habitantes de los barrios de la localidad de Suba, en Bogotá, bloquean en horas de la mañana el Portal de Transmilenio de esta localidad como protesta a la falta de buses articulados en las horas pico. Según voceros de la protesta, la mayoría de los habitantes están cansados de subirse en medio de empujones a los articulados, porque no existe una buena oferta del parque automotor. Al finalizar la mañana, los representantes de los usuarios y el gerente operativo de Transmilenio, llegan a un acuerdo para levantar la protesta.

Miércoles 21

Un grupo de usuarios de Transmilenio, en Bogotá, bloquean la Autopista Sur sobre la calle 65 para protestar por las fallas en el servicio del sistema de transporte y la demora en los servicios alimentadores, encargados de llevar a los usuarios desde los barrios hasta los portales. Esta manifestación se suma a la realizada por los habitantes de la localidad de Suba el día anterior y demuestra la insatisfacción de los consumidores con este sistema de transporte.

Lunes 26

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia graves amenazas contra 17 organizaciones, sindicatos y espacios de trabajo en defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio, la mayor parte, pertenecientes al MOVICE. En este sentido, las organizaciones piden que la Fiscalía General de la Nación investigue, juzgue y sancione los hechos, que los organismos de control del Estado activen el sistema de alertas tempranas, ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y víctimas de crímenes de Estado en el Magdalena Medio, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Cuerpo Diplomático y en general la Comunidad Internacional realicen un seguimiento a estos hechos y exijan al gobierno colombiano el respeto y la protección de los y las integrantes del MOVICE.

Estudiantes del Instituto Panamericano y el Colegio Camilo Torres protagonizan un bloqueo en la Avenida Caracas con calle 34, ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca como protesta por la fusión de éstos dos centros educativos. La presencia de los jóvenes impide el paso vehicular en ambos sentidos, tanto de los buses articulados de Transmilenio como del tráfico mixto. Varios estudiantes resultan heridos cuando la policía inicia el desbloqueo.

Cerca de 30 estudiantes del colegio Nicolás Esguerra en Bogotá marchan por la Avenida Américas,

carrera 42, hacia el oriente, por la calzada exclusiva de Transmilenio, razón por la cual, los buses rojos se movilizan por pequeños tramos por un carril de la calzada mixta.

Alrededor de 500 personas bloquean el paso vehicular en la Avenida Ciudad de Cali con Calle Séptima, en la ciudad de Bogotá, para protestar por las fallas en la prestación del servicio de Transmilenio en los sectores del Tintal y Patio Bonito.

Miércoles 28

Alrededor 200 estudiantes del colegio Camilo Torres, en Bogotá, protagonizan de nuevo un bloqueo vial, esta vez sobre la carrera Séptima. Los jóvenes protestan por la fusión entre el colegio Panamericano y el Camilo Torres, además de exigir una tarifa especial del sistema Transmilenio para estudiantes. El grupo de jóvenes se moviliza por la carrera Séptima desde la calle 34 en sentido sur, hacia la Alcaldía Mayor, en la Plaza de Bolívar. Voceros de los estudiantes señalan que se trata de una protesta pacífica que busca una rápida solución a la problemática de las dos instituciones educativas.

Aproximadamente 150 personas bloquean la calle 80 entre la avenida Ciudad de Cali y la Avenida Cali, en Bogotá, como protesta a la falta de buses alimentadores y rutas que cubran esta zona del occidente de la capital. El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, anuncia una reunión con el comité operativo de seguridad para evaluar e identificar las problemáticas del sistema Transmilenio, ante los bloqueos presentados en los últimos días en la ciudad por inconformismo de la ciudadanía en el sistema. Además asegura que, detrás de estas manifestaciones, hay agitadores que buscarían desprestigiar el sistema. Indica que la Policía investiga los hechos registrados para identificar quiénes están detrás de los bloqueos que afectaron a la ciudadanía en general.

Viernes 30

Desempleados inician desde la Plaza de Bolívar de Pereira una marcha hacia la ciudad de Bogotá en protesta por la falta de oportunidades laborales y el poco compromiso del gobierno nacional para solucionar ésta problemática. Durante todo el recorrido, promovido por la Asociación de Desempleados de Colombia, los marchantes cargarán una gigantesca cruz, como símbolo de la cruz que llevan a costas por no tener empleo y, en las plazas de Bolívar de Armenia, Ibagué y Bogotá se efectuarán actos de crucifixión de los desempleados. La primera parada será en Armenia donde se unirán más desempleados a la marcha; el primero de mayo los desempleados estarán pasando La Línea recordando que, en el día internacional del trabajo, 3 millones de compatriotas carecen de él; aspiran a llegar el 5 de Mayo a la plaza de Bolívar de Bogotá para convocar a los candidatos a la Presidencia de la República a que firmen un acta de compromiso con los desempleados colombianos. Durante su caminata, que durará seis días, los desempleados llevarán dos resmas de hojas de papel, en las que anotarán los nombres de todas las personas que se les acerquen y que tampoco tengan empleo, para inscribirlos a su asociación y llegar a Bogotá con las suficientes firmas para que los candidatos escuchen su reclamo.

Los usuarios del servicio de energía en la ciudad de Pereira realizan una marcha de antorchas para protestar por las altas tarifas y la imposibilidad de hacer reclamos sin que se hagan fuertes cobros por atenderlos, debido a las políticas adoptadas por la empresa prestadora del servicio a nivel local.

Glosario de siglas

CLAID	Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada
DAPARD	Departamento de Prevención y Atención de Desastres de Antioquia
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
MOVICE	Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
ONU	Organización de Naciones Unidas
SINALTRAINBEC	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas en Colombia
SINTRADPA	Sindicato de Trabajadores de Dairy Partners Americas
UTRADPA	Unión de Trabajadores de Dairy Partners Americas

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa.

Relevamiento y sistematización a cargo de Diana Patricia Cárdenas Quintero.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS e Indymedia Colombia.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Mayo de 2010

Editada en agosto



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 689

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia***



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Diana Patricia Cárdenas Quintero

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas, Agencia de Información
Laboral ENS e Indymedia Colombia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Mayo de 2010

Sábado 1

En todo el país se celebra el Día Internacional del Trabajo con movilizaciones, concentraciones y actos político-culturales, como es tradición en Colombia. Hay manifestaciones callejeras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, Manizales, Neiva, Popayán, Sincelejo y otras ciudades colombianas, con las mismas consignas de crear puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y frenar la violencia. En las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín se presentan disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública. Se conocen algunas denuncias de exceso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la policía y los manifestantes denuncian que los ataques de la fuerza pública han desencadenado los enfrentamientos. En Bogotá, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) reporta la detención de 219 adultos, y de 41 menores de edad, para un saldo parcial de 260 personas detenidas en la jornada. El CSPP reporta también 16 heridos: dos policías y 14 marchantes, entre ellos un adulto mayor de 80 años de edad y dos menores de edad.

Lunes 3

Víctimas de la violencia marchan en Medellín para pedir la ampliación del plazo para solicitar la reparación. Son las víctimas a las cuales se les rechazó la petición y tienen 3 días hábiles para apelar la decisión. Se presentan tensiones entre los participantes porque la alta presencia de desplazados hace que el propósito de la manifestación cambie de ser la petición de reparación para todas las víctimas de la violencia en el país, a ser una marcha contra el desplazamiento forzado.

Miércoles 5

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá protestan alrededor del centro educativo. Se presentan fuertes disturbios y se cierra el servicio de Transmilenio en la estación de la Calle 72.

Sábado 8

Madres víctimas de ejecuciones extrajudiciales reciben al Ministro de Defensa y actual candidato presidencial Juan Manuel Santos con una protesta en Soacha, municipio de Cundinamarca. Las madres de los jóvenes víctimas de “falsos positivos” organizan una concentración para recordarle a Santos la muerte de sus hijos. La manifestación se lleva a cabo en las afueras del Coliseo. Juan Manuel Santos tenía previsto saludar a la población de Soacha en la plaza principal, sin embargo, por razones de seguridad se desplaza hacia el municipio de Madrid para continuar su campaña presidencial. Mientras tanto, las madres se ven obligadas a sus viviendas porque no les permiten el paso al coliseo, ni muchos menos el derecho de palabra para ser escuchadas por el ex ministro de Defensa. Desde 2003 la Procuraduría colombiana ha iniciado las investigaciones por la muerte de

812 personas en aparentes casos de desapariciones forzadas o "falsos positivos". El mismo presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha reconocido que han habido violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en el llamado "Asesinato de Soacha", donde 11 jóvenes fueron hallados muertos el 23 de septiembre de 2008 en Cimitarra y Ocaña, al norte de Santander y sepultados en fosas comunes.

Viernes 14

Pobladores del Departamento del Huila participan en movilizaciones y concentraciones convocadas por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO); pequeños propietarios, cacaoteros, cafeteros, camioneros, aserradores, organizaciones sociales y juveniles, entre otros, con los propósitos de defender el territorio y las comunidades, impulsar la creación de una reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado en la Zona de El Quimbo, pedir indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la aplicación de la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de la transnacional Emgesa, impedir cualquier intento de iniciación de obras por Emgesa debido a las graves implicaciones económicas, sociales y ambientales y las reiteradas modificaciones de la Licencia ambiental. El Ministerio de Ambiente, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó conciliar el 21 de abril de 2010 la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para reducir los costos sociales y las compensaciones forestales y de esta manera satisfacer las exigencias de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel.

Un grupo de manifestantes recibe al candidato presidencial Juan Manuel Santos en la Universidad Santiago de Cali con arengas e impiden que presente dentro del claustro universitario sus propuestas de gobierno. La protesta inicia con la quema de llantas sobre la Calle Quinta con carrera 62, al sur de la ciudad, lo que obstaculiza el tránsito por la zona. Después los manifestantes ingresan violentamente al auditorio de la universidad, donde se encontraba Santos, rompiendo la puerta y los vidrios, y quemando papeles, lo que provoca nerviosismo entre los asistentes. El candidato, protegido por su equipo de seguridad, abandona las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali en medio de insultos del grupo de manifestantes.

Martes 18

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia ante la comunidad internacional el asesinato del campesino y defensor de los derechos humanos, integrante de su movimiento en el departamento de Sucre, Rogelio Martínez. El líder es asesinado aproximadamente a las seis de la tarde, luego de ser bajado de la moto en que se desplazaba en el camino hacia su residencia en la Finca "El Alemania", por un grupo de hombres encapuchados que vestían de negro. La Defensoría del Pueblo condena la muerte violenta del señor Rogelio Martínez, quien había sido desplazado de la finca la Alemania en San Onofre-Sucre por parte de integrantes del autodenominado Bloque Héroes de los Montes de María, y que había retornado a la finca en mención en el 2007. Con la muerte del líder, ya son 15 los campesinos asesinados por reclamar la devolución de la finca La Alemania en San Onofre, Sucre, que los paramilitares les robaron hace diez años.

Miércoles 19

La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Colombia, se produce en horas de la mañana y despierta temores y protestas en varios sectores, especialmente en el lácteo. Miles de productores lecheros y ganaderos marchan en varias regiones de Colombia para protestar por la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre este país y la UE, ya que consideran que ese acuerdo llevará a la quiebra al sector. Las manifestaciones, en las que los representantes del sector salen a las calles con sus vacas y reparten miles de litros de leche, tienen lugar en Medellín, ciudad capital del departamento de Antioquia, Valle del Cauca, en la ciudad de Tunja y en el departamento de Quindío. Además, en el departamento de Nariño, grupos de indígenas bloquean un puente fronterizo con Ecuador en protesta por el tratado. Los presidentes de las tres centrales sindicales del país -Confederación General del Trabajo (CGT), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)- coinciden en expresar su rechazo a la firma de dicho tratado y lo califican como inconveniente para el país, en la medida en que castiga la producción nacional y afecta muchos puestos de trabajo. La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) advierte de que el acuerdo con la UE perjudicará a unas 400 mil familias que viven de la producción de leche en el país.

Jueves 20

Un grupo de comerciantes del sector del Poblado, al sur de la Ciudad de Medellín departamento de Antioquia, bloquea el tránsito vehicular de la calle 10, por lo que consideran persecución de las autoridades de Tránsito, que imponen comparendos y multas a los clientes, residentes y visitantes ocasionales que parquean en las calles 43 y 42 con la 10. Ante la situación se hacen presentes oficiales de la Policía y funcionarios del Tránsito de Medellín, ordenando desbloqueo de la vía y explicando la legalidad de las acciones de las autoridades.

Viernes 21

Defensores y defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, se manifiestan pacíficamente en las instalaciones del Ministerio del Interior y de Justicia en Bogotá, a fin de exigir medidas integrales, efectivas e inmediatas para salvaguardar la vida de quienes trabajan por los derechos humanos en Colombia. A pesar de los llamados de organismos multilaterales de derechos humanos, los pronunciamientos de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, denuncias públicas e incluso vías de hecho para exigir acciones del gobierno y el Estado colombiano, la situación de agresión contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia y líderes sociales se hacen cada vez más crítica. Durante el presente mes, siete defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas campesinas han sido asesinados, cuatro de ellos asociados a la denuncia del desplazamiento forzado y a las reclamaciones para la restitución de sus tierras. Igualmente, más de 100 organizaciones que trabajan por los derechos humanos, organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas, entre otras, han sido blanco de amenazas por parte de actores armados ilegales o desconocidos, usando correos electrónicos, panfletos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes. Muchas de estas organizaciones amenazadas hacen parte del proceso de interlocución con el Estado colombiano en las Mesas Territoriales y Mesa Nacional de Garantías; proceso impulsado desde 2009 por las Plataformas de Derechos Humanos y Paz y por sectores sociales, en la búsqueda de garantías al ejercicio de defensa de los derechos humanos.

Lunes 24

Diferentes organizaciones sociales realizan un Plantón masivo desde las 8 de la mañana frente a los juzgados especializados de Bogotá para expresar su solidaridad con el profesor detenido Miguel Ángel Beltrán. Los manifestantes buscan sentar su voz de protesta y demostrar una firme oposición a lo que consideran la injusta detención del profesor que señalan como representante del pensamiento crítico en el país, la libertad de cátedra y el trabajo académico comprometido. Una Misión de Observación Internacional se desplaza a Colombia para verificar el debido proceso en el Juicio Oral al profesor, ilegalmente deportado desde México hace un año y acusado por el gobierno Colombiano de supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Miércoles 26

Reciben amenazas 17 organizaciones, entre las que se cuentan, sindicatos, de personas desplazadas y trabajadoras de derechos humanos de la región del Magdalena Medio del país, la mayoría de ellas pertenecen al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE), capítulo Barrancabermeja, departamento de Santander.

Glosario de siglas

ASOQUIMBO	Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
CGT	Confederación General del Trabajo
CSPP	Comité de Solidaridad con Presos Políticos
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEDEGAN	Federación Colombiana de Ganaderos
MOVICE	Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa.

Relevamiento y sistematización a cargo de Diana Patricia Cárdenas Quintero.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Herald y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS e Indymedia Colombia.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Junio de 2010

Editada en agosto



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 708

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Lorena Álvarez Ossa, Diana Ayala Villada y
Diego Alejandro Salazar López (asistentes)

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas y Agencia de Información
Laboral ENS

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Junio de 2010

Martes 1

Personas usuarias del Sistema de Transporte público masivo (Transmilenio) en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, protestan durante una hora en la Estación Avenida Ciudad de Cali. La protesta se disuelve luego de la conformación de una mesa de diálogo con funcionarios del sistema integrado de transporte.

Continúan en paro los transportadores en el corregimiento de Altavista de la ciudad de Medellín – departamento de Antioquia, que afecta a aproximadamente 12 mil personas. La ruta de buses que presta servicio a la comunidad entró en paro desde el pasado 31 de mayo, debido a las extorsiones de las cuales son objeto de manera recurrente los operadores del transporte público. La Secretaria de Gobierno de Medellín insta a quienes están afectados por las extorsiones para que denuncien y dispone algunas medidas de seguridad para garantizar el servicio.

Alrededor de 200 personas entre mujeres, niños y niñas familiares de los mineros en huelga en la Jagua de Ibirico, Departamento Cesar, ocupan la carretera que comunica esta población con la Guajira para presionar la solución del conflicto que completa dos semanas, y que involucra más de 800 personas que trabajan en el complejo carbonífero de la multinacional suiza Glencor, en esta región del país. Un directivo del sindicato de industria de la empresa Carbones de la Jagua S.A. - Sintramienergética - afirma que la Empresa ha sido intransigente frente a las demandas de los trabajadores y que mantiene condiciones de desigualdad en materia salarial, que ocurren porque, en el complejo carbonífero de la Jagua de Ibirico, la Glencor tiene dos empresas distintas: Carbones de la Jagua y Consorcio Minero Unido (CMU); en donde, en la primera, los trabajadores están sindicalizados (320 en total) y rige convención colectiva, mientras que, en la segunda, sus 400 trabajadores no están sindicalizados y devengan salarios más altos por pacto colectivo. En cuanto a las demandas del sindicato, piden un aumento salarial del 7%, mejoras en la seguridad industrial de las minas y estabilidad laboral. Las directivas sindicales dicen que la Empresa ha implementado una política de persecución a quienes se sindicalicen.

Miércoles 2

En Sabaneta, municipio Antioqueño, más de mil estudiantes de instituciones educativas de la localidad y sus familiares, así también como personas funcionarias de la Administración Municipal, realizan una marcha para prevenir y hacer pedagogía ante la violencia intrafamiliar. La marcha busca dar un mensaje para que las víctimas denuncien y las personas tomen conciencia frente a la importancia del tema.

Viernes 4

En la ciudad de Cali los pequeños propietarios de transporte citan a paro, después de hacer petición a la Administración Municipal de una indemnización por no seguir prestando el servicio en la

Ciudad, ante la operación del nuevo Transporte Masivo de Cali (MIO). Son 1.500 vehículos de transporte público, buses, busetas y camperos, que no circularán el próximo miércoles. Las personas transportadoras expresan que sus vehículos cuestan entre 80 y 120 millones de pesos, modelo 2000 y reciente, y que reciben compensaciones de 35 millones por chatarrización, sumado a que el Gobierno local no entrega indemnización y que son muchas las familias que dependen de los ingresos de los vehículos que salen del servicio.

Personas trabajadoras de la empresa de transporte bloquean, por casi tres horas, la calle 45 hacia Chimita en Bucaramanga – departamento de Santander- para expresar su descontento por la disminución de sus sueldos en un 40%, según el vocero sindical, a causa del aumento del transporte ilegal en el sector y por la inequidad en la asignación de rutas que hizo el Área Metropolitana. Quienes lideran la protesta exigen mayor control de las autoridades al transporte ilegal y espacios de escucha para plantear alternativas que no desmejoren sus condiciones de trabajo.

Trabajadores y trabajadoras de la Clínica Primero de Mayo en Barrancabermeja – departamento de Santander- retornan a sus labores. La administración del centro asistencial se comprometió a pagar dos de los cuatro meses de sueldo adeudados; se restablecieron la entrega de medicamentos, la aprobación de citas generales y especializadas y la atención de los laboratorios clínicos.

Domingo 6

Los trabajadores suspenden obra de construcción del acueducto de Corpojoya, en el departamento de Santander, porque no perciben sueldos hace dos meses. A esto se suma la denuncia por las pocas garantías a nivel de salud ocupacional, ya que no se les suministra casco, ni botas, ni faja, como medidas mínimas de protección en sus labores.

Martes 8

La conmemoración histórica del “estudiante caído” en la Universidad de Antioquia, en Medellín, termina en enfrentamientos de estudiantes con la Policía en la calle Barranquilla, que ocasionan el desalojo y la suspensión de actividades en el Alma Mater.

A cambio de ser sacado de la lista de 25 países que serán examinados este año por la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno colombiano, en la 99ª Conferencia de OIT, acepta la sanción de recibir en el país la Misión Tripartita de Alto Nivel de la este organismo, para examinar los problemas de derechos humanos y libertades sindicales. La presencia de la Misión se da por presión de representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación Pensionados de Colombia (CPC).

Miércoles 9

La Universidad de Antioquia con sede en Medellín- departamento de Antioquia- retoma actividades después del cierre, debido a enfrentamientos de estudiantes con la Policía en la conmemoración histórica del “estudiante caído”.

En la ciudad de Cali – departamento del Valle del Cauca- unos 2.120 vehículos están participando del cese de actividades, según los transportadores el 93% de la flota actual, pero, según la Administración Municipal de Cali, sólo es el 13%. Por lo menos, 3 mil personas participan de la marcha que recorre el sur y centro de la Ciudad, paralizando la movilidad en algunos sectores. Las autoridades realizan un plan de contingencia para evitar que quienes participen de la manifestación bloqueen y cierren vías, para ello disponen de 4.500 agentes de Policía, con el acompañamiento de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN). Además amenazan con sanciones para las empresas de hasta 700 salarios mínimos y 15 para quienes bloqueen vías.

Dieciocho organizaciones ambientales y sociales de Bucaramanga, Santander, rechazan que sea expedida la licencia ambiental al proyecto de explotación de Angosturas, el cual afectaría zonas como el páramo de Santurbán. La acción de protesta que recibe el nombre de “Marcha por el Agua de Bucaramanga” recorre las principales calles de la ciudad hasta llegar al Parque García Rovira, donde se realiza un ‘plantón’. Las ONG ambientalistas de la Provincia de Soto no están a favor de la minería de oro a cielo abierto, porque utilizan técnicas de lixiviación con cianuro, causando un impacto negativo a las fuentes hídricas y al ecosistema.

Jueves 10

Unas 150 personas trabajadoras de Aguas Kapital bloquean, por casi una hora, el sistema Transmilenio en Bogotá, en protesta por la inminente terminación del contrato que la Empresa en la que trabajan tiene con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). EAAB confirmó adelantar trámites para la terminación del contrato de gestión comercial y operativa con Aguas Kapital, suscrito desde 1° de enero de 2008 hasta diciembre de 2012, debido a que los requerimientos que se realizan al operador no fueron cumplidos en los plazos solicitados. Aguas Kapital presentó una propuesta de cesión del contrato después de descuentos y sanciones que le aplicó la EAAB. Durante la protesta se presentan enfrentamientos con la Fuerza Pública, quedando un manifestante herido.

La Asociación de Cultivadores de Tabaco de Piedecuesta (Acultapie), del departamento de Santander, municipio de Piedecuesta, amenaza con una protesta pública por la aprobación, en primer debate del Congreso de la República, de la reforma tributaria, en la que se impone impuestos a los productos del tabaco. La aprobación de esta Ley pone en riesgo 25 mil empleos, en este Municipio, de éste sector de la economía. Otras empresas que se verán afectadas por la problemática Ley, según Acultapie, son la Federación Nacional de Productores de Tabaco (FEDETABACO) y la Compañía Colombiana de Tabaco (COLTABACO), que tendrán que interrumpir sus programas de expansión, proyectos que generan empleos por el orden de los 30 mil a 50 mil familias dedicadas a esta labor.

Habitantes del municipio de Plato -departamento de Magdalena- realizan gestiones ante la Gobernación y la Secretaría de Educación para evitar el cierre de la institución educativa La Inmaculada Concepción, por considerarla patrimonio municipal.

Mil personas en el Centro de Medellín – Antioquia- se movilizan para sentar una voz de rechazo frente a las peores formas de trabajo infantil, en el marco del Día Internacional del “NO Trabajo Infantil”, 12 de junio. La marcha convocada por organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y de gobierno, defensoras de los derechos de la infancia, busca generar conciencia en la ciudadanía y

exigir la creación de políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de la infancia y erradiquen este flagelo.

Viernes 11

La Confederación Sindical Internacional (CSI), organismo que representa a 176 millones de trabajadoras y trabajadores en 155 países, responde el comunicado emitido por el Gobierno Colombiano, en el que se descalifica el informe anual que esta confederación publicó en días anteriores sobre el homicidio de sindicalistas en Colombia. La CSI insiste en que sus informes no buscan desprestigiar a ningún gobierno y le recuerda al Gobierno colombiano que, según cifras de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Colombia es el lugar más peligroso para el ejercicio de la libertad de asociación. Concluye que en Colombia se ha presentado el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Agrega que, durante el período de Gobierno del Presidente Uribe han sido asesinados 557 sindicalistas. En el año 2009 se cometieron 48 homicidios y en lo que va de 2010 se ha asesinado a 29 sindicalistas.

Lunes 14

Habitantes de la vereda Mazo, en Santa Elena, corregimiento de Medellín- departamento de Antioquia- se manifiestan por inconformidad con las obras que adelanta la Administración Municipal en el parque Arví y con la demolición de la sede comunal de Santa Ana. Las personas sumadas a la protesta se expresan frente al abuso de la Administración que demolió la sede construida por los habitantes del sector. Voces autorizadas de la Administración enunciaron que el predio donde estaba la sede comunal es propiedad de la Administración Municipal. Los hechos ocasionan enfrentamientos entre habitantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Martes 15

Los y las pacientes de la Clínica Primero de Mayo en Barrancabermeja – Departamento de Santander- protestan en sus instalaciones por no recibir de manera eficaz y oportuna la atención y entrega de medicamentos. A la crisis económica de esta institución se ha sumado el no pago de salarios a su planta laboral por parte de la empresa Operadores Clínicos Hospitalarios (OCH).

Miércoles 16

Más de 150 personas campesinas de siete veredas de Bucaramanga- departamento de Santander- se unen para marchar por la defensa del medio ambiente, particularmente por el cuidado de las cuencas hídricas de alta montaña. La marcha, promovida por líderes de la comunidad de los proyectos Escuela Campesina Agroambiental y la Red Agroalimentaria, está acompañada por organizaciones no gubernamentales y busca sensibilizar sobre la importancia de la acción del Estado en la vigilancia de los recursos naturales, por la tala y quema de bosques que pone en riesgo los ecosistemas de la región.

Habitantes del corregimiento de Camarones en la ciudad de Riohacha -departamento de la Guajira- bloquean la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 20, en protesta por los constantes cortes

energéticos que una empresa de energía efectúa a la población. La comunidad se queja de que la empresa no les informa sobre los cortes que realiza casi a diario y que tienen una duración de ocho a 12 horas, según voceros de la comunidad.

73 trabajadores mueren trágicamente en el Municipio de Amaga por una explosión en la Mina de San Fernando – Departamento de Antioquia. Accidentes como este ocurren por la existencia de deficientes programas de prevención, por las precarias condiciones laborales de la explotación minera, por la poca vigilancia y control de los Ministerios de la Protección Social y de Minas y Energía en Colombia sobre estas actividades laborales, consideradas de alto riesgo por la OIT y por la ausencia de seguimiento de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), organismos responsables de hacer el aseguramiento en el país. Estos hechos evidencian el fracaso de las políticas de seguridad social en riesgos profesionales de la Ley 100 de 1993 y convocan a estructurar normas que protejan a los trabajadores que laboran en condición de riesgo, como en el caso de las minas.

Jueves 17

85 personas trabajadoras del Hospital San Rafael en el departamento de Santander, contratados a través de la Cooperativa Salud vida, reclaman sus pagos atrasados. La Fundación para el Desarrollo Comunitario del Trabajador Solidario, la Democracia y la Paz (Fundeamigos), institución promotora de la Cooperativa Salud Vida, según sus directivas, ha adelantado los trámites para realizar la conciliación con la Gobernación de Santander de 670 millones de pesos que se adeudan a los trabajadores.

Viernes 18

400 personas, representantes de ONG y de comunidades negras e indígenas, protestan por la construcción de la carretera Panamericana que unirá Alaska con la Patagonia en la frontera de Colombia con Panamá. Esta acción de protesta hace parte de la Triatlón por la Vida del Darien conformada por ONG de derechos humanos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Red de alternativas a la impunidad y globalización del mercado, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y organizaciones indígenas y afrodescendientes.

Personas desplazadas de Soacha, en Bogotá, ingresan al edificio sede del Programa Acción Social, para protestar por el incumplimiento de promesas de tipo social que ha realizado el Gobierno Nacional. En los hechos se registran enfrentamientos entre la Policía y un grupo del ESMAD que entra en escena para controlar la situación.

Sábado 19

La Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA – repudia públicamente el asesinato de un activista de su organización sindical, hecho ocurrido en el municipio de Cauca – departamento de Antioquia. El líder sindical fue sacado violentamente de su lugar de residencia por hombres armados en el Corregimiento de Cuturú. Ya son siete el número de educadores sindicalizados asesinados en Antioquia en lo que va corrido del año 2010.

Domingo 20

Con un abstencionismo del 55.5%, sobre un potencial de 30 millones de personas votantes, se elige a Juan Manuel Santos Calderón como Presidente de Colombia, en segunda vuelta de la contienda electoral en el país. El candidato oficialista alcanza la victoria con más de nueve millones de votos. Santos ganó la presidencia con una estrategia de coaliciones de distintos partidos políticos, y muchos de ellos han declarado públicamente ser herederos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Santos cuenta con el 80% del Congreso de la República.

La plataforma Misión de Observatorio Electoral (MOE), compuesta por 302 organizaciones para vigilar y salvaguardar los procesos de la democracia en el país, hizo presencia en 242 municipios, que equivalen a 62% del potencial electoral, cubriendo el 78% de las ciudades capitales. El MOE acreditó a 1.594 personas para esta tarea, 15 de ellas están en embajadas y consulados de diez países. Las elecciones en Colombia se han desarrollado en relativa tranquilidad, según esta Plataforma.

Lunes 28

La Fundación País Libre insta a los miembros del Parlamento Europeo a mantener su apoyo a quienes están secuestrados y secuestradas en tierras colombianas. La ONG recuerda que hay personas que llevan más de diez años como víctimas de este flagelo en el país.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz entrega el informe “Buscando un equilibrio entre la justicia y la paz”, en donde se registran estadísticas de 37.996 homicidios cometidos por los grupos armados ilegales en el país, que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005, marco jurídico aprobado por el Congreso de la República para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia). Según este informe, el Estado colombiano ha encontrado 3.131 cadáveres de personas desaparecidas, ha exhumado más de 2.579 fosas comunes, ha entregado 908 cuerpos a los familiares de las víctimas e identificado a 1.046 personas asesinadas. El informe reporta que, hasta el 31 de marzo, un total de 281 mil 661 personas se han registrado en calidad de víctimas, para, de este modo, aspirar a la reparación económica prevista por el gobierno y hacerse parte en los procesos jurídicos contra los victimarios. Por testimonios de los paramilitares, en los últimos cinco años, se han descubierto un total de 40.455 hechos de violencia declaradas por personas acogidas por la Ley Justicia y Paz en Colombia, así mismo, entre agosto de 2002 y abril de 2010, se han desmovilizado 53.037 personas pertenecientes a grupos paramilitares y guerrilleros. El Alto Comisionado para la Paz advierte que la Ley de Justicia y Paz ha tenido dificultades en su implementación. Por otro lado, el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, señala que la Ley de Justicia y Paz sigue siendo profundamente insatisfactoria en sus resultados.

Martes 29

En el proceso de la Ley de Justicia y Paz colombiana, en el departamento de Bolívar, dos desmovilizados jefes paramilitares, Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, responsables de las masacres de Mampuján, San Cayetano e Islas Mécura, son condenados a ocho años de prisión máxima, en la primera sentencia que establece la mencionada Ley. Estas personas son responsables de 1.111 hechos cometidos por los bloques paramilitares, donde resultan 1.194 víctimas. La pena que deberían pagar estas

personas, si no se hubieran acogido al proceso de Justicia y Paz, oscilaría entre los 38 y 39 años de prisión.

Para garantizar que los ex paramilitares respondan ante las víctimas y la justicia colombiana, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, se realizan ajustes a la modificación de la norma de las extradiciones, contenidas en el decreto 2288 de junio de 2010, según informa el Ministerio del Interior y de Justicia del Gobierno Nacional. En dicho decreto se establece que las personas juzgadas por la Ley de Justicia y Paz no serán extraditadas de manera inmediatamente y detalla que los aplazamientos de las extradiciones quedan supeditados al esclarecimiento de crímenes en Colombia. Se anota que, durante los últimos meses, el Gobierno actual y la Corte Suprema de Justicia han tenido enfrentamientos porque el tribunal negó la extradición de varios ex jefes paramilitares.

En la presentación del informe de rendición de cuentas de 2009-2010, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, reporta 8.014 casos de asignados de derechos humanos, de los cuales 6.824 se encuentran activos: 4.750 bajo la ley 600 de 2000 y 874 bajo el nuevo sistema penal acusatorio. En estos casos se incluyen 1.366 ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos que involucraron a miembros del Ejército en algunas zonas del país.

Miércoles 30

Organizaciones de sociedad civil, entre ellas, Justicia y Vida, insisten en que las bases militares estadounidenses en Colombia no deben mantenerse vigentes por temas de soberanía en el país. Esta declaración se hace después de la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, relativa al futuro de éstas, en la Secretaría General de la Corte Constitucional. Aunque no se conoce el texto de la ponencia, las organizaciones le piden al Tribunal revelar el contenido de ese documento para que la sociedad civil pueda intervenir.

Glosario de siglas

ACULTAPIE	Asociación de Cultivadores de Tabaco de Piedecuesta
ADIDA	Asociación de Institutores de Antioquia
ARP	Administradoras de Riesgos Profesionales
CMU	Consorcio Minero Unido
COLTABACO	Compañía Colombiana de Tabaco
CPC	Confederación de Pensionados de Colombia
CSI	Confederación Sindical Internacional
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CTI	Cuerpo Técnico de Investigación
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ENS	Escuela Nacional Sindical
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FEDETABACO	Federación Nacional de Productores de Tabaco
FUNDEAMIGOS	Fundación para el Desarrollo Comunitario del Trabajador Solidario, la Democracia y la Paz

MIO	Tranporte Masivo de Cali
MOE	Misión del Observatorio Electoral
OCH	Operadores Clínicos Hospitalarios
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Onganizaciones no Gubernamentales
SIJIN	Seccional de Investigación Criminal
SINTRAMIENERGETICA	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética
TRANSMILENIO	Sistema de Transporte Público Masivo de la Ciudad de Bogotá

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya.

Responsable de informe y sistematización Lorena Álvarez Ossa.

Relevamiento a cargo de Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldó y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Julio de 2010

Editada en octubre



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 727

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia*



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Lorena Álvarez Ossa
Diana Ayala Villada
Diego Alejandro Salazar López

Fuentes

Diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas y Agencia de Información
Laboral ENS

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Julio de 2010

Jueves 1

En audiencia con la Sala Plena de la Corte Constitucional rindió cuentas el Gobierno Nacional con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional que emitió el alto tribunal para la atención de la población desplazada en el país. Para la atención de esta población se destinarán recursos por 40 billones de pesos en los próximos 10 años; al mismo tiempo que aumentan las coberturas en temas como educación, salud e inclusión en el programa familias en acción. Frente al delicado tema de devolución de tierras a quienes fueron expulsados de sus territorios, las autoridades del gobierno proponen: protección para evitar el despojo; un programa de restitución de tierras; formalización de los terrenos que no tienen título; y, programas de acceso a tierras a través de subsidios. Como parte del proceso de acceso a la justicia, la Fiscalía General de la Nación crea una unidad dedicada a investigar casos relacionados con el desplazamiento forzado, que comienza con 25 mil casos.

Salen a paro indefinido 30 personas trabajadoras del Hospital La Inmaculada del Municipio de Guatapé, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia, para reclamar por los salarios que no reciben desde hace cuatro meses. Tal situación afecta a 4.800 usuarios / as del centro hospitalario. La decisión del cese de actividades se tomó después de que las directivas del hospital no logran superar la crisis de la Institución. Vocero de los trabajadores y trabajadoras en paro manifiestan que la crisis hace parte de la situación del sistema de salud en Colombia, ante lo cual exigen al Estado tomar medidas necesarias, ya que la planta de personal de las unidades hospitalarias, no pueden renunciar a sus derechos laborales para garantizar la prestación del servicio.

200 mototaxistas del municipio de Ovejas, departamento de Sucre, protestan por controles que hace la policía para exigir documentos y elementos de seguridad en la movilidad en la Troncal de Occidente. Los manifestantes fueron dispersados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Viernes 2

Unas 200 personas, marchan en Medellín, departamento de Antioquia, para rechazar el asesinato del director del parque Biblioteca del barrio Belén de esta ciudad. La comunidad reconoce a este líder por su aporte a la cultura y al desarrollo social de la localidad.

En ceremonia, representantes de la Unidad de Justicia y Paz, entregaron a las familias escalofriantes relatos de víctimas del paramilitarismo en el país. Estos testimonios incluyen datos de cómo después de matar a las sus víctimas estos grupos armados ilegales, procedían a descuartizar los cuerpos y enterrarlos con el fin de borrar rastros. Uno de estos testimonios esclarece el caso de Octavio Franco Bernal, quien fue desaparecido el 11 de mayo de 2002, cuando se dirigía en transporte público de Vistahermosa, departamento del Meta, a Bogotá, y de quien no se recuperaron los restos, porque fueron lanzados a un caño de agua. Justicia y Paz afirma que hay por lo menos otras 32.000 víctimas que siguen desaparecidas.

Un paro de actividades adelanta el personal médico de la Clínica Primero de Mayo, en Barrancabermeja, departamento de Santander, por el no pago de cinco meses de salario, afectando a personas usuarias de este centro asistencial. La Personería de Barrancabermeja anuncia la instauración de medidas legales de protección de los derechos de la población desatendida en salud, ante el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia de Salud - Supersalud, la Nueva EPS, y los operadores de la clínica.

Personal medico y administrativo del Hospital San José de Maicao en el departamento de La Guajira, bloquearon la Troncal del Caribe, en protesta por el atraso en cinco meses de salarios.

Sábado 3

La Corte Constitucional ordena suspender los pagos de indemnizaciones a la población desplazada por la vía de la tutela; esta decisión la toma este organismo ante la avalancha de tutelas que se encuentran en curso (3.600 tutelas) contra Acción Social y ante la inexistencia de referentes de igualdad para que los jueces y juezas estudien las demandas. El Alto Tribunal aclara que la decisión no hace referencia a la ayuda humanitaria de emergencia social para la población víctima del conflicto, sino a la indemnización por daños sufridos. Los fallos que se encuentran en trámite serán definidos de manera unificada por tratarse de casos análogos y similares. La Coordinación Nacional de Desplazados, señala fallas en el sistema de atención a las víctimas, que está colapsado y es inoperante por el subregistro, que no permite darse cuenta del universo total de población desplazada, para de este modo valorar adecuadamente en términos económicos el restablecimiento de los derechos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), suprema autoridad de la Organización Electoral del país, continúa reuniéndose a fin de establecer los resultados de los escrutinios de las elecciones de marzo al Congreso de la República, especialmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca, donde se presentaron dificultades para definir los resultados. El CNE necesita definir estos resultados antes del 9 de julio.

Cuatro dirigentes comunales de Cúcuta, departamento del Norte de Santander, reciben amenazas contra su vida y deben abandonar la ciudad bajo estrictas medidas de seguridad. Las amenazas son realizadas a través de llamadas telefónicas y panfletos que llegaron a sus lugares de residencia. A estos hechos se suman la muerte de un líder comunal en el barrio El Progreso y a otras amenazas a otros líderes de juntas de acción comunal de la ciudad. Se presume que los responsables son bandas delincuenciales que operan en el departamento fronterizo.

Domingo 4

Cerca de cinco mil personas se reunieron en la Plaza de Cisneros, ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, para hacer homenaje al presidente Álvaro Uribe, en sus ocho años de gestión como presidente de los colombianos y colombianas. Otras ciudades se unieron a estas actividades: Bogotá, Cali, Barranquilla, Montería y Bucaramanga. En su discurso en Medellín, Uribe pidió mantener sus cuatro programas bandera de gobierno: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social.

Un grupo de personas protestan en Barranquilla, departamento de Atlántico, por el cierre de la Avenida Olaya Herrera a la altura de la calle 74, realizaron una protesta pacífica para exigirle a las autoridades locales y a las directivas del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla- Colombia (Transmetro) la reapertura de la vía.

Lunes 5

150 personas marchan en Bucaramanga, departamento de Santander, como homenaje a los procesos de Independencia de Colombia. Los y las marchantes serán recibidos en el Socorro, primer municipio que se independizó en Santander, el día 6 de julio, para continuar con su destino final en la ciudad de Bogotá.

Martes 6

Hasta el Socorro en Santander llegan 150 personas que caminan en honor a este municipio, el primero que en julio de 1810, se declara independiente en el país. Salen al encuentro de los marchantes una compañía de alrededor de 200 policías y soldados, acompañados de la población civil, que banderas en mano gritan arengas alusivas a los 200 años de independencia y a la importancia del prócer Francisco de Paula Santander. Esta hace parte de las actividades conmemorativas del bicentenario, que incluyen marchas, desfiles y otros actos culturales.

Jueves 8

300 Trabajadores /as de sindicatos de los sectores de salud, comunicación, transporte, educación superior, financieros, entre otros, realizaron mitin frente al ministerio de la Protección social en Bogotá, departamento de Cundinamarca, para divulgar y denunciar la situación de incumplimiento en materia de derechos laborales de la población trabajadora y del sindicalismo en el país, ante una comisión de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- que visita esta semana a Colombia. Los y las manifestantes protestan contra la violencia antisindical y la persecución laboral del gobierno y los empresarios para acabar con los sindicatos y evitar que los trabajadores /as ejerzan su derecho a la libertad de asociación.

Sábado 10

Alrededor de dos mil personas salen de San Gil, departamento de Santander, hacia el Socorro, provincia comunera, para entregar proclama construida por distintas comunidades y organizaciones de la minga comunera. Esta proclama incluye temas, tales como: propiedad y aprovechamiento de la tierra; el presente y futuro del agua; la seguridad alimentaria; y, por último, la situación de los campesinos en cuanto a los problemas que los afectan.

Lunes 12

Los transportadores de Barrancabermeja, departamento de Santander, realizan un cese de actividades para presionar la aplicación del Decreto 339 del 2009, por medio del cual se establecen medidas de control del servicio informal de transporte en la ciudad. Los manifestantes también exigen: creación de un cuerpo especial de la Policía que actúe en el control del transporte informal; la creación de políticas de mejoramiento de la movilidad de

la Ciudad; conformación de una mesa alterna para la implementación de políticas de empleo con representación de la comunidad, autoridades gubernamentales, la Empresa Colombiana de Petróleo- ECOPEL, el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena - y los contratistas; entre otros.

Martes 13

El Polo Democrático Alternativo, PDA, anunció que denunciará ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos -OEA, los homicidios perpetrados, en los últimos tres meses, contra militantes del partido y algunos de sus familiares.

Directivas de la Fiscalía pertenecientes a la Unidad de Justicia y Paz, declaran la suspensión del proceso de exhumación de víctimas del paramilitarismo en Colombia en todo el país, debido a los atentados y ataques que actores armados ilegales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC – EP) están realizando a los investigadores de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en tanto hacen un llamado a las autoridades competentes a garantizar la seguridad. La suspensión del proceso de exhumación afecta principalmente a las víctimas sobrevivientes que esperan del Estado, verdad, justicia y reparación.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abre investigación contra ocho ex congresistas señalados de haber incurrido presuntamente en delitos de lesa humanidad por sus nexos con grupos de paramilitares.

300 Mineros informales participan de una marcha por las calles del Municipio Amagá, en el suroeste del departamento Antioquia. Los mineros y sus familias exigen a la Gobernación y a las autoridades locales generar soluciones a sus problemáticas de bienestar laboral, así también como apoyo al proceso de legalización y tecnificación de sus minas, para así evitar el cierre, que afectaría a miles de familias de los municipios de Amagá, Fredonia, Titiribí y Angelópolis, que dependen de esta fuente de empleo. Los líderes mineros y directivas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), exigen a las autoridades políticas especiales en materia de regulación de los precios del carbón para evitar la intermediación, procesos de legalización acorde a las características del sector minero en la región, mayor supervisión de los entes encargados y mejoramiento de las condiciones de trabajo de los mineros, que están en condiciones de pobreza y abandono.

Miércoles 14

Cinco mil personas salen a marchar en las calles del Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, para celebrar 235 años de la fundación de la localidad y manifestarse de paso por la paz en dicha municipalidad. Estudiantes trabajadores /as, amas de casa, concejales, líderes cívicos y personalidades, asistieron al evento promovido por la organizaciones gubernamentales y la sociedad civil, para rescatar la imagen del Municipio que se vio afectada por hechos de violencia en los últimos días.

Jueves 15

Continúan protestas de los transportadores en Barrancabermeja, departamento de Santander, se presume que el flujo de busetas y taxis disminuyó por lo menos un 30%. Las autoridades toman medidas tendientes a mantener el orden público en la Ciudad, prohibiendo el consumo y venta de bebidas alcohólicas, la realización de reuniones, manifestaciones o aglomeración de personas que afecten el orden público, sin previo aviso de las autoridades competentes.

Crece la participación de la sociedad civil alrededor del debate sobre Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, cuyas obras de ingeniería se desarrollaran en el departamento de Antioquia, en el Municipio de Ituango. La Mesa de Debate Ciudadano sobre el megaproyecto es espacio de confluencia de concejales del Municipio de Medellín, organizaciones no gubernamentales- ONGs, sindicatos y otras expresiones; su misión es insistir en que el Proyecto sea de naturaleza pública, para que la ciudadanía conozca el desarrollos y los impactos obra de tal dimensión.

Viernes 16

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, se dieron cita 125 delegaciones del departamento para rendir un homenaje al Presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe entrega su cargo el próximo 7 de agosto al presidente electo Juan Manuel Santos. Al acto organizado por la Gobernación de Antioquia, asisten distintas personalidades de la política y ofrece un espectáculo de muestras culturales y expresiones artísticas de las distintas regiones.

Habitantes del corregimiento de Apure, municipio del Plato, departamento de Magdalena, bloquearon la vía que conduce de Bosconia a Cartagena, para protestar por el incumplimiento en el desarrollo de obras de construcción de acueducto y de dique en su localidad, ante la falta de atención de la Alcaldía

Domingo 18

Alrededor de 150 personas campesinas que navegan por el río Caguán, rumbo a Florencia - departamento del Caquetá, les fue impedido el desplazamiento por parte de unidades del Ejército Nacional, argumentando sobrecupo de las embarcaciones. Los y las manifestantes van a participar en las acciones de conmemoración del bicentenario, organizadas por más de 100 organizaciones de la región. Por su parte, los líderes de la movilización objetan los argumentos de la fuerza pública y se mantienen en la idea de continuar el rumbo a su destino, evitando que se les violen sus derechos.

Mil 500 indígenas del pueblo guambiano marchan desde el sur del país hacia Bogotá, distrito capital, en donde adelantarán una protesta pacífica en contra del modo y significado dado por las autoridades gubernamentales al Bicentenario de la Independencia. Las comunidades indígenas insisten en que a 200 años de las gestas independentistas no existe aún una verdadera independencia y autonomía de los pueblos indígenas.

Colombianos y Colombianas por la Paz, conjuntamente con otras plataformas y redes de organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos y la paz en Colombia, agrupadas en distintas expresiones, se manifiestan en contra de la retención de cuatro personas defensoras de derechos humanos, realizada por parte de la guerrilla, Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el Municipio de Teorama, departamento del Norte de Santander. Las organizaciones sociales hacen un llamado a las agrupaciones guerrilleras a respetar el derecho internacional humanitario aplicable al conflicto armado que vive el país, sobre todo a lo referido a la prohibición expresa de retener a civiles.

Lunes 19

200 estudiantes y familiares, bloquean el Sistema Integrado de Transporte -Transmilenio en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, como parte de una protesta por el incumplimiento en la obra de reconstrucción del Colegio Distrital Ricaurte, que está en construcción desde el 2006. Las personas manifestantes bloquean la vía paralizándolo el tráfico vehicular, afectando a, por lo menos, cien mil usuarios. En respuesta la Secretaría de Educación distrital se compromete a entregar totalmente terminada la obra en 45 días.

Alrededor de ocho mil indígenas se tomaron las dependencias administrativas y edificios de la Universidad Nacional de Bogotá, distrito capital, como parte de una marcha a la que dieron el nombre de “Marcha patriótica”.

Personas voceras de mil 500 familias desplazadas protestan frente a la Corte Constitucional en Bogotá, distrito capital, para exigir la oportuna atención a la población desplazada, así también como la garantía de sus derechos humanos. Los y las manifestantes expresan ante

la Corte el descontento por la manera como han sido atendidos por el Gobierno Distrital y exigen a este organismo que medie como garante de sus derechos.

Martes 20

La Universidad de Antioquia ubicada en Medellín, departamento de Antioquia, está en paro por la reelección de decano de la Facultad de Odontología. Para la gran parte de la comunidad universitaria es inexplicable que la situación de reelección de un decano mantenga la Universidad paralizada y distintas voces coinciden en afirmar que detrás de estos hechos se esconden fuertes pujas por el poder al interior del Alma Mater. Directivas de la universidad anuncian la cancelación de semestre en tres programas de pregrados de la universidad, entre los que se incluye odontología e idiomas, y se estudia la situación de otros.

Miércoles 21

Unas 10 mil personas entre campesinos y líderes comunales, participaron en Bogotá de una marcha denominada “Marcha Patriótica”, la cual culminó con un memorial de agravios en conmemoración al Bicentenario. Esta marcha se lleva a cabo por las principales vías de tránsito de la capital. Los manifestantes exigieron la independencia definitiva de la nación y de paso protestaron contra las políticas sociales del Gobierno actual. La “Marcha Patriótica” partió de la Universidad Nacional, donde los y las participantes permanecían desde hace varios días, después de una toma pacífica, hasta la Plaza de Bolívar. Quienes se movilizaron se declararon en cabildo abierto permanente y exigen del Gobierno Nacional que se de solución a la crisis social y de tierras que enfrentan las poblaciones indígenas y campesinos del país. Líderes de la marcha denunciaron que en Neiva, ciudad capital del departamento de Huila, donde también se llevó a cabo movilizaciones, hay un represamiento de por lo menos dos mil campesinos/as del municipio de Algeciras, quienes denuncian excesivos controles de la fuerza pública para avanzar hacia Neiva.

La ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con Colombia, aumenta el clima de tensión en la frontera. El impacto de esta situación lo reciben directamente los habitantes fronterizos y los empresarios que ven frenado el intercambio comercial con el vecino país. El gobierno venezolano solicitó una reunión de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) mientras que Colombia prefiere la intermediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante quien presentó la denuncia de presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en territorio venezolano. La crisis diplomática de Colombia con Venezuela ha disminuido las exportaciones colombianas en un 70% hacia ese país.

Más de 200 residentes e internistas del Hospital Universitario de Santander (HUS) en Bucaramanga, departamento de Santander, inician paro indefinido por la disminución de insumos médicos, la no vinculación de especialista y la parálisis de la propuesta de que sea la Universidad Industrial de Santander (UIS) la que pase a manejar la administración del centro hospitalario. El cese de actividades se inicia después de no recibir respuesta de la Administración Hospital a las demandas. Se está a la espera de reunión con autoridades departamentales.

Jueves 22

Parlamentarios europeos, defensores de derechos humanos de Colombia y alrededor de mil 500 campesinos /as asisten a audiencia pública en La Macarena, departamento del Meta, sobre “la crisis humanitaria en los llanos orientales”, convocada por el Senado de la Republica de la Comisión Auxiliar de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, para conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en los llanos orientales, expresada en detenciones, allanamientos, maltratos físicos y psicológico, pérdida de bienes por desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. En dicho evento se intenta esclarecer la verdad sobre un supuesto cementerio clandestino creado para sepultar víctimas de ‘falsos positivos’. El Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, conminará al Estado Colombiano para que investigue los hechos relacionados con fosas comunes y tumbas que contienen cuerpos sin plena identificación diseminados en un terreno de 6.500 kilómetros cuadrados de la región mencionada.

Viernes 23

Se normalizan las actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Bogotá, departamento de Cundinamarca, tras la salida de sus instalaciones de cerca de ocho mil indígenas que se tomaron distintas dependencias y edificios del campus, en días pasados, como parte de la llamada “Marcha Patriótica”. Las directivas del campo universitario hicieron un llamado a las autoridades y a los distintos actores sociales para que se respete la autonomía del centro académico.

Sábado 24

400 personas marchan por la paralela al Bosque, de la Autopista que comunica a Bucaramanga con Floridablanca, departamento de Santander, en protesta por el cobro

anticipado de impuesto por valorización de la transversal en esta localidad y por el desconocimiento que tiene la comunidad del proyecto vial.

Lunes 26

Al paro de la Universidad de Antioquia ubicada en Medellín, departamento de Antioquia, se suma una huelga de hambre que comienzan seis estudiantes de distintas facultades. Tanto el cuerpo de docentes que apoyan la anormalidad académica como los estudiantes de la universidad, mantienen sus peticiones de renuncia ó remoción de decano de odontología, conflicto que ocasiono la crisis, y la reforma de la resolución rectoral que determina la forma de elección de decanos.

Asesinan a dirigente del partido político PDA y líder de la etnia Wuayú. El líder indígena haría declaraciones en audiencia pública donde realizaría graves denuncias con pruebas sobre los manejos del sistema de salud en el departamento de La Guajira. La colectividad política envía notas al Ministerio del Interior sobre los hechos y reclama por la falta de respuesta ante amenazas de otros miembros de la organización.

Martes 27

Los trabajadores de la mina de carbón de la jagua de ibérico, en el departamento del Cesar, propiedad de la multinacional Glencore, levantan la huelga que duro más de un mes. El arreglo incluye un ajuste salariales que va del 5% para el primer año y del 15% para el segundo. Los trabajadores de la jagua paralizaron actividades el pasado 17 de junio.

Habitantes de la zona noroccidental Medellín, departamento de Antioquia, marchan para protestar por la violencia que generan bandas delincuenciales. Según la comunidad estos actos han aumentado la tasa de homicidios del sector y las desapariciones, además denuncian que estas bandas imponen fronteras en el territorio que afectan la movilidad. Un grupo de alrededor de ocho personas protestan frente a la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado en Puente Aranda, departamento de Cundinamarca, para reclamar ayudas humanitarias del Gobierno Nacional.

Personal del Hospital Universitario de Santander levantaron la asamblea permanente restableciendo los servicios en el centro hospitalario; esta decisión se da luego de un acuerdo con las directivas del HUS y de la UIS, donde se establece un compromiso con el pliego de peticiones en los puntos de contratación de especialistas y médicos generales; y de evitar el desabastecimiento de medicamentos.

Estudiantes del colegio El Castillo de Barrancabermeja, departamento de Santander, suspenden clases porque la Administración Municipal no ha cumplido con la construcción del coliseo y un laboratorio desde hace 10 años. La comunidad estudiantil exige también la dotación del laboratorio.

Las personas empleados del Hospital local de El Piñón, departamento del Magdalena, se declaran en paro por la falta de pago desde hace cuatro meses, a esto se suma el incumplimiento con las prestaciones 2001- 2008 y los subsidios familiares de nueve años.

Miércoles 28

Estudiantes, docentes y familias de las instituciones educativas, salen a protestar contra la fronteras imaginarias que trazan las bandas delincuenciales en algunos barrios de la comuna seis, zona noroccidental de Medellín, departamento de Antioquia, que impiden la circulación y atentan contra la seguridad de quienes habitan los barrios. En la comunidad hay una preocupación por la presencia de alrededor de 38 grupos delincuenciales en confrontación que se disputan extorsiones y plazas de drogas ilegales a fuego cruzado, dejando en medio a los habitantes del sector. Se denuncia que, por lo menos, 800 estudiantes desertaron del sistema escolar y se trasladaron hacia otros colegios distantes, por los enfrentamientos y la agudización de la violencia en el sector.

Hasta las instalaciones del Concejo Municipal del Socorro, departamento de Santander, llegaron víctimas del conflicto armado en Colombia para escuchar aclaraciones de Acción Social de la Presidencia de la República del Gobierno Nacional, acerca de los procesos de reparación a los que tienen derechos. En este Departamento existen una estadística de 8 mil 500 casos, muchos de ellos corresponden a varios miembros de una familia que necesitan reparación integral.

200 personas habitantes de 15 barrios del municipio de Soledad, departamento de Atlántico, mantienen bloqueada la vía a Granabasto, para presionar a la autoridad competente el arreglo de las vías; así también, como problemas con el sistema de alcantarillado. La protesta fue disuelta una vez hace presencia un funcionario de la municipalidad, con el que se acuerda que la Alcaldía empezaría las obras de mejoramiento de las vías inmediatamente.

Jueves 29

Estudiantes de la Universidad de Antioquia de Medellín, departamento de Antioquia, levanta paro después de casi de dos meses de cese de actividades académicas. Como parte del proceso de negociación se nombran dos representantes estudiantiles en la mesa multiestamentaria que discute la reforma al proceso de elección de decanos/as y

directores/as de institutos y escuelas; toda vez que el conflicto lo ocasionara la elección de decano de odontología, quien renunció en días antes del levantamiento del paro.

Tras las situaciones de tensión vivida en las fronteras con Venezuela, el Estado Colombiano a través del Decreto 2693, declaró la emergencia social, donde se establecen ayudas para 37 municipios fronterizos, por un periodo de hasta 30 días, estos municipios están ubicados en los departamentos de Boyacá, Cesar, La Guajira, Norte de Santander y Vichada. La crisis con el vecino país representa un impacto sobre el producto interno bruto de 0.5%. Las ayudas económicas incluyen exención de impuestos, la instalación de zonas francas, entre otras.

La justicia colombiana condenó a dos funcionarios del Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) del Ejército Nacional de Colombia, a 35 años de prisión, como coautores del crimen de dirigente sindical, ocurrido en agosto de 2001. La justicia probó la existencia de un aparato criminal conformado por miembros del GAULA de Barranquilla –departamento de Atlántico - y del Bloque Norte paramilitar, que realizaban actividades conjuntas de persecución y exterminio contra dirigentes sindicales y sociales en esta zona del país. Estos actos de exterminio sistemático del sindicalismo en el país, constituyen una grave violación de los derechos humanos de líderes sindicales, por lo que el Estado Colombiano debe garantizar el esclarecimiento de otros casos que están siendo investigados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Estudiantes de la Facultad de Salud de la UIS marchan por las calles de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, para protestar por los problemas administrativos del Hospital Universitario de Santander y de este modo apoyar la iniciativa de que la institución educativa se haga cargo del centro de atención en salud. Las directivas de la Universidad acuerda realizar reunión para estudiar la viabilidad técnica, económica y administrativa de la propuesta.

Viernes 30

Los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia acuerdan medidas para que los ex paramilitares extraditados comparezcan ante fiscales colombianos en los procesos de la Ley de Justicia y Paz. El plan que se implementará tendrá como fin aumentar el acceso de los representantes de la justicia colombiana. Este compromiso facilitará el avance de la ley de justicia y paz, y para las víctimas constituye una oportunidad de derecho a la verdad y la reparación.

El Gobierno entrante, a través del electo vicepresidente Angelino Garzón, manifiesta que no están cerradas las puertas al diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para una búsqueda negociada de la paz, poniendo como condiciones acuerdos en materia de liberación de personas secuestradas; fin al reclutamiento de niños y

niñas las filas de la organización guerrillera y, el uso de minas antipersonas. Este comunicado es expedido por el Gobierno después que las FARC-EP, a través de la publicación de videos en Internet abrió de diálogo y negociación con el Gobierno entrante, poniendo en el centro de la agenda los temas de devolución de tierras a campesinos, respeto a los derechos humanos en el país, reformulación del modelo de desarrollo económico y, por último, la restricción a la iniciativa de bases militares en Colombia.

Glosario de Siglas

CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNE	Consejo Nacional Electoral
CTI	Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleo
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC – EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
GAULA	Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal
HIDROITUANG	Hidroeléctrica Ituango
HUS	Hospital Universitario de Santander
OEA	Organización de Estados Americanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PDA	Polo Democrático Alternativo
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SUPERSALUD	Superintendencia de Salud
TRANSMETRO	Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla- Colombia

Colombia - Cronología del conflicto social – Julio de 2010 - OSAL

TRANSMILENIO	Sistema Integrado de Transporte de Bogotá
UIS	Universidad Industrial de Santander
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO)

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya

Responsable de informe y sistematización Lorena Álvarez Ossa

Relevamiento a cargo de Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

EQUIPO DEL OSAL / CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Agosto de 2010

Editada en noviembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 746

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia*



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Lorena Álvarez Ossa (responsable)
Diana Ayala Villada
Diego Alejandro Salazar López

Fuentes

Diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas y Agencia de Información
Laboral ENS

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Agosto de 2010

Domingo 1

Aproximadamente 200 personas habitantes de 15 barrios de Soledad, departamento de Atlántico, Bloquean la vía Granabasto en protesta por el mal estado de las vías de acceso al sector y el sistema de alcantarillados. La protesta se disuelve ante la presencia de las autoridades municipales, quienes se comprometen a iniciar las obras de mejoramiento.

En paro permanecen empleados del Hospital de El Pinón, en el departamento de Magdalena, ante el no pago de salarios, subsidios familiares y prestaciones sociales en el periodo correspondiente al 2001– 2008.

Lunes 2

La Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC) solicitan una veeduría internacional de organismos multilaterales, tales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, para que tomen nota de la situación que enfrentan las comunidades campesinas por el efecto de la fumigación con glifosfato (herbicida agrícola utilizado para acabar con cultivos ilícitos) que sigue contaminando las fuentes hídricas, ocasionando pérdida de otros cultivos de pan coger que son fuente de alimentación y aumentando las enfermedades, de tal modo que acentúan la situación de miseria y hambre de la población en la región. Directivas de ASOCBAC hacen un llamado a las autoridades y organizaciones de carácter nacional e internacional para que: por un lado, acompañen las denuncias de las comunidades, y por el otro, descubran los atropellos y violaciones de los derechos por parte de actores armados legales e ilegales, que cometen graves violaciones al derecho internacional humanitario. La organización llama a la movilización de las poblaciones campesinas de la región para la reivindicación de sus derechos.

Un grupo de estudiantes y egresados/as de la Universidad de Antioquia de Medellín, departamento de Antioquia; protesta por irregularidad en la elección de decano de una de

sus facultades, los y las implicadas denuncian el favorecimiento de uno de los postulantes. Las acciones de protesta generaron algunos disturbios. Las directivas universitarias y el Gobernador del departamento de Antioquia manifiesta su rechazo a las acciones de violencia en la universidad y apoyan el proceso de normalización académica de la misma.

El Presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia la puesta en marcha en su Gobierno del plan de restitución de tierras, a través del Ministerio de Agricultura. El anuncio se hace ante la falta de estrategias para la restitución de la tierra en Colombia, tal y como lo reconoce el Alto Comisionado para la Paz y la Reconciliación, Fran Pearl, funcionario del saliente gobierno. Para este funcionario, el problema de la tierra en el país tiene cuellos de botella difíciles de superar ligados a la tenencia de activos y tierras por parte de grupos ilegales. Por otro lado, el Estado Colombiano, agrega el funcionario, no tiene mecanismos jurídicos y administrativos que permitan identificar cadenas de testaferrato, incautar tierra y hacer extinción de dominio. En Colombia han sido usurpadas, abandonadas o ocupadas sin título alrededor de 5 millones 500 mil hectáreas, un millón 200 mil de estas hectáreas fueron usurpadas por grupos armados ilegales, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de ellas únicamente 17 mil están en poder del Fondo de Reparación.

Martes 3

Personal del Hospital de San Pablo, en el Departamento de Bolívar, entran en paro por el no pago de salarios. Al cese de actividades de los trabajadores/as de la salud del centro hospitalario se le suman 250 personas de la comunidad, que reclaman la atención oportuna de la Alcaldía Municipal. Directivos del Hospital dicen que el incumplimiento en sus obligaciones salariales obedece a la no cancelación de los servicios clínicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), quienes se estarán poniendo al día en las próximas horas con sus la liquidación de sus facturas, tal como lo expresaron públicamente.

Habitantes del municipio de Amaga, suroeste del departamento de Antioquia, salen a marchar ante las amenazas que reciben miembros de la comunidad, entre quienes se cuentan educadores, un dirigente político y un sindicalista. A los hechos se suman una serie de asesinatos selectivos contra jóvenes de la localidad.

En Medellín, departamento de Antioquia, se levanta el paro en la Universidad de Antioquia después de dos meses y medio de receso. La Universidad entró en paro tras el conflicto por la reelección de decano de la Facultad de Odontología, al finalizar el mes de abril.

Cerca de diez mil corteros de caña del Valle y del norte del Cauca, en su gran mayoría vinculados a cooperativas de trabajo asociado, se preparan para renegociar su pliego petitorio con los dueños de los ingenios en el mes de noviembre. Por tal motivo comienza a crecer la expectativa, dada la importancia económica del azúcar y el etanol, la cantidad de

familias que viven del corte de caña y el antecedente del largo paro que en el 2008 protagonizaron los corteros para forzar a los ingenios a mejorar sus condiciones salariales y laborales. Pese a que en la actualidad el acuerdo marco suscrito en 2008 a mejorado substancialmente las condiciones de trabajo, también, se han presentando inconsistencia en materia del cumplimiento del acuerdo, sobre todo en temas como el peso de la caña, la cantidad de corte asignado, el despido de trabajadores y el paro de los ingenios con el argumento de baja en las materias primas.

Vocero de Derecho Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Valle del Cauca, denuncia a la opinión pública el panorama adverso en materia de derechos humanos en el Departamento. El líder Sindical advierte que en lo que va corrido del año, se han presentado cuatro muertes de sindicalistas en la región. A estos hechos se suma, el aumento de las amenazas y hostigamientos contra líderes y dirigentes sindicales de la CUT y sus sindicatos adscritos, cuya autoría en algunos casos se las atribuyen grupos armados ilegales de paramilitares, “Autodefensas” y “Águilas Negras”. El líder sindical denuncia que la protección de las personas amenazadas es precaria por parte del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, tanto en la disposición de agentes como en la asignación de recursos.

Miércoles 4

280.000 afiliados a la Federación Colombiana de Educadores – FECODE, de distintos departamentos del país, participan de una jornada de protesta nacional para rechazar la política pública educativa, desarrollada durante el Gobierno del Presidente de la República saliente, Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por un retroceso en materia de derechos a la educación de la población colombiana y de derechos laborales para los y las docentes.

Jueves 5

La comunidad bloquea la vía que comunica a Barranquilla – Juan Mina- Tubará, departamento de Atlántico, en protesta por el incumplimiento en el arreglo y adecuación de las calles de acceso. Las acciones de protesta ocasionan trastornos en el transporte y disposición de basuras del Área Metropolitana de Barranquilla, ya que los carros recolectores no se pudieron desplazar al relleno sanitario de Los Pocitos.

En el departamento de Antioquia, municipios de Campamento, Granada, San Francisco, Rionegro y Medellín, se realizan actividades públicas en el marco de la Semana de la Verdad en Antioquia, en donde se busca que las víctimas del conflicto armado cuenten sus historias para hacer un ejercicio contra el olvido. En estas actividades se dieron a conocer datos del proceso de Justicia y Paz, en donde según cifras presentadas han desmovilizado

31.694 paramilitares y 223 miembros de la guerrilla. Además se han esclarecido en el país 1.309 masacres, 32.348 casos de desaparición forzada, 3.557 casos de reclutamiento de personas menores de edad. A las actividades asisten organizaciones de la Mesa Departamental de Víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil.

Viernes 6

Habitantes de Puerto Wilches, departamento de Santander, taponaron vías del centro para protestar por problemas con el alcantarillado y represamiento de aguas negras.

Al concluir ocho años del saliente Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, líderes del sindicalismo y de organizaciones sociales hacen un balance negativo frente al aumento de la estigmatización y exclusión social. Los y las líderes argumentan que durante este Gobierno se perdieron avances en materia de: reconocimiento a espacios de diálogo y concentración de política social; estigmatización, represión, criminalización y minimización de la organización, movilización y toda expresión de protesta; cooptación de los líderes y movimiento sociales para intereses políticos del Gobierno; fusión de los ministerios de Trabajo y Salud en protección social, que desconoce el carácter fundamental de la salud y el empleo, en la garantía de los derechos; la falta de voluntad política para avanzar en la aprobación de normas acorde a la realidad que vive el país en el tema de empleo, con el crecimiento de la informalidad, la flexibilidad en materia de contratación y la desprotección en temas de seguridad social de un gran porcentaje de la población trabajadora; la inclusión en las llamadas listas negras de directivos sindicales, información que se conoce tras el escándalo del DAS. De acuerdo a los líderes del sindicalismo y de organizaciones sociales el Gobierno se habría caracterizado por una política contraria a los derechos de movilización, organización y defensa de derechos de los trabajadores /as.

Sábado 7

Asume la presidencia de Colombia el doctor Juan Manuel Santos, elegido el 20 de junio de 2010. Santos fue investido como Jefe del Estado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, distrito capital, ante unas 5.000 personas invitadas, entre quienes están jefes de estado y gobierno, vicepresidentes y otras altas personalidades del mundo de la política.

Personal del Hospital San Juan Girón, municipio de Girón, departamento de Santander, reclaman el pago de salarios atrasados con cadenas en los brazos, pancartas, carteles y pintas en los muros del centro de atención médica.. Vocera de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC) de la localidad, dice que a los trabajadores/as se les adeudan salarios, primas y vacaciones, al igual que los pensionados.

Lunes 9

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia insta al Gobierno Colombiano para que continúe trabajando por el respeto y la protección de los pueblos indígenas. Esta solicitud se hace en marco de la celebración del 'Día Internacional de los Pueblos Indígenas'. El organismo multilateral manifiesta su preocupación porque pese a que el Estado Colombiano ha mantenido contacto con algunas comunidades en riesgo de extinción, aún no se implementa ningún plan de protección de las mismas, y hace un llamado al Nuevo Gobierno (de Juan Manuel Santos) para que se realicen esfuerzos tendientes a la preservación de las comunidades indígenas en peligro de desaparición, que son catorce en total, según el Sistema de Alertas Tempranas, generando acciones efectivas para su protección de manera concertada y oportuna. En materia de derechos humanos, según cifras oficiales, referidas por la ONU, en el país ente los años de 2004 y 2009, unas 55.513 personas de comunidades indígenas fueron víctimas de desplazamiento y un 70% de ellas por situación de violencia.

Martes 10

Levantán paro conductores de la zona centro occidental de la Ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Los conductores mantenían la protesta por las extorsiones de que son víctimas y por la falta de seguridad en el sector. La protesta se levanta una vez se acuerda con el Alcalde de la Ciudad y la fuerzas pública mayores garantías para la prestación de sus servicios.

Miércoles 11

200 personas entre estudiantes y personal docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander -UDES- en Bucaramanga, departamento de Santander, salen a paro para protestar por el cierre del departamento de gineco-obstetricia y la posible salida de personal médico docente del Hospital Universitario de Bucaramanga Los Comuneros. Los y las estudiantes que se declaran en protesta pacífica reclaman la permanencia de su espacio de práctica y la atención adecuada de las mujeres que demandan los servicios del centro de salud, y exigen que las directivas del Hospital y la Universidad se reúnan para buscar salidas a la crisis.

Jueves 12

Organizaciones sindicales y sociales repudian el asesinato de Luis Germán Restrepo Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Empaques (SINTRAEMPAQUES) y tesorero de la Confederación General del Trabajo (CGT), ocurrido en Medellín, departamento de Antioquia, al tiempo que exigen de las autoridades el esclarecimiento de los hechos en los que perdió la vida el alto directivo sindical.

5.300 personas, entre estudiantes, docentes y familias, se reúnen en el Foro estudiantil de Derechos Humanos en el municipio de Líbano, departamento de Tolima, a expresar las problemáticas de esta población en temas, tales como: conflicto interno, diversidad sexual, discriminación y otros. Al evento asisten personas de Bélgica, Inglaterra, Francia, de la ONU- y 20 organizaciones nacionales.

En Bogotá se dieron cita decenas de persona, para expresar su rechazo a los hechos de violencia, tras la explosión este mismo día de un carro bomba en la madrugada, en el Centro Financiero Internacional, en particular en los edificios del sector y Caracol Radio. Tal concentración se da tras el llamado del Alcalde, Samuel Moreno, a toda la ciudadanía al rechazo de la violencia y la exaltación de la libertad de prensa.

Viernes 13

Por lo menos 220 personas, entre habitantes, conductores y líderes de acción comunal bloquearon vía principal de acceso a la Mesa de los Santos, departamento de Santander, para protestar por el mal estado de las vías y otros caminos de acceso a veredas y corregimientos de la zona. La comunidad denuncia la negligencia de las Gobernación y el consorcio ejecutor de obras de mejoramiento; y solicitan se le dé cumplimiento al contrato de obra pública 368 de 2004, así también como la creación de una mesa de trabajo, con su participación directa, que vigile y verifique el cumplimiento del contrato.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, protesta por la implementación del nuevo carné universitario, Tarjeta de Identidad Personal (TIP). Las directivas universitarias se mantienen en la idea que la implementación de la TIP pretende mantener un mayor control de las personas que ingresan al alma mater, evitar expendió de drogas y bebidas alcohólicas en su interior, así también como disminuir hechos de inseguridad que se vienen presentando en el interior del Alma Mater.

5000 estudiantes y docentes de la Universidad Santiago de Cali, marcharon por las calles de la ciudad de Calí, departamento del Valle del Cauca, para rechazar el asesinato de uno de sus decanos. A las acciones de protesta se unió la Universidad Libre del Valle. Los

estudiantes rechazaron que las universidades se sigan convirtiendo en territorios de guerra y de violencia.

Sábado 14

Indígenas del suroeste del país, denunciaron violaciones a los derechos humanos, en el resguardo La María del municipio de Piendamó, departamento del Cauca. Según líder de esta comunidad, hay un total 1.250 nativos que han perdido su vida desde 1980 a consecuencia del conflicto armado interno que vive el país, a esto suma la violación y el desconocimiento de derechos que históricamente les han sido negados por el Estado. Los indígenas denuncian que en los últimos años las políticas gubernamentales han estado orientadas a desacreditar el y estigmatizar el trabajo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de las autoridades nativas de la región. Tales declaraciones en el marco de la visita del juez español Baltasar Garzón, asesor de la Corte Penal Internacional -CPI, quien está en el país calidad de amigo de las comunidades indígenas. Garzón visitó a las comunidades en compañía de la fiscal de la Audiencia Nacional de España Dolores Delgado.

Continúan amenazas contra defensores de derechos humanos de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). La nueva amenaza fue dirigida contra miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y dirigente del Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda; este último afirma que estas amenazas las profieren paramilitares del grupo conocido como “Águilas Negras.

Conductores del Municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, taponaron la vías de las glorietas que conducen al sur del área Metropolitana del Valle de Aburra, en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros en este sector de la Ciudad. Los manifestantes se quejan de las extorsiones y robos de que son víctimas; y exigen de las autoridades mayor atención, protección y seguridad para ellos.

Domingo 15

Un grupo de personas desplazadas intenta tomarse un predio de la Empresa Urrá, generadora y comercializadora de energía, en Tierra Alta, departamento de Córdoba, como mecanismo de presión por la exigencia de su derecho a un techo digno. En la toma y ante la reacción del Escuadrón Móvil Antidisturbios con gases lacrimógenos muere un niño. El hecho esta siendo investigado por las autoridades.

Lunes 16

Por lo menos 1.500 personas se tomaron las calles de la Comuna 13 en Medellín, departamento de Antioquia, para manifestarse en contra de la fronteras territoriales que imponen las bandas delincuenciales del sector. La comunidad se tomo el espacio público exaltando la convivencia y la integración social.

Martes 17

Cientos de personas pasajeras vuelos aéreo que llegaron a las islas de San Andrés protestan al frente a las instalaciones de una aerolínea, por el retraso en sus vuelos nacionales y conexiones internacionales.

Como una medida de protección a los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 13 de Medellín, departamento de Antioquia, una caravana de alegría se toma las calles de los barrios, concurren estudiantes, sus familiares, funcionarios /as de la Alcaldía, acompañados de personajes coloridos. La medida se toma después que se presentará un aumento de la deserción escolar producto de los enfrentamientos de bandas delincuenciales en el sector. Dichas actividades pretenden exaltar la vida y la importancia del respeto de los de los derechos de la infancia.

Se reanuda el servicio del Cable Metro del Sistema de Transporte Integrado de la ciudad de Medellín – METRO, en la Comuna 13 de Medellín. El servicio había sido suspendido por los continuos enfrentamientos de bandas delincuenciales en la Ciudad de Medellín. Tal situación afectaba a unas 7.500 persona usuarias del servicio en el sector.

Jueves 19

El Sistema de la ONU en Colombia, a través de su Coordinador en Bogotá Bruno Moro, expuso su preocupación por las múltiples amenazas que hay sobre la comunidad humanitaria, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles y sociales del país. El señor Moro hace sus declaraciones en el marco del Día Mundial Humanitario, agregando que 2010 no ha sido un año fácil para los trabajadores /as humanitarios en el país. A estas declaraciones se suman también las proferidas el 25 de febrero por el Sub Secretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda a Emergencias, John Holmes, quien destaca la urgencia continua de las necesidades humanitarias en Colombia por el contexto del país y a quien le preocupa la vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas en el país, especialmente la situación de sus líderes y otras personas que defienden los derechos.

Conductores del barrio Robledo en Medellín, departamento de Antioquia, entraron en paro por el asesinato de uno de sus compañeros. Los conductores manifiestan su conformidad por las extorsiones, los robos y los atentados contra sus vidas en el sector, a lo que exigen mayor seguridad y protección de parte de las autoridades. A estos hechos se suman un aumento de la violencia contra las personas que prestan este servicio público en diferentes zonas de la Ciudad. Según la Personería de Medellín, ya son más de siete los conductores de servicios público muertos violentamente en el Área Metropolitana.

500 personas se reunieron en Plazoleta de la Alpujarra, pleno centro de Medellín, departamento de Antioquia, a ratificar su apoyo al Alcalde de la Ciudad, Alonso Salazar. El evento tuvo lugar después de que la Fiscalía General de la Nación estableciera, según investigaciones, que grupos paramilitares no tuvieron ningún vínculo con la candidatura del político en años anteriores. A la actividad asistieron representantes políticos de la región que exigieron a la comunidad rodear la institucionalidad y apoyar a la Alcaldía y a las autoridades en momentos de crisis.

Viernes 20

87 municipios del departamento de Santander marchan en rechazo de la violencia. La marcha la encabeza el Gobernador del Departamento y hace parte de una voz de protesta contra la bomba que explotó el 12 de agosto cerca a las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, distrito capital. El llamado es a la libertad de prensa y al respeto a los medios de comunicación.

Unas mil personas se reúnen en el centro de Medellín, departamento de Antioquia, en la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, que cuenta con representaciones de 17 departamentos, allí se reclama al Estado: el esclarecimiento de la verdad, el rescate de la memoria de las víctimas y la acción decidida para vencer la impunidad que ha reinado en torno a los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos por los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla. Entre las conclusiones de este encuentro sobresalen: la persistencia en el país de una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas; se mantienen las amenazas, persecuciones, estigmatizaciones y homicidios en contra de personas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos; la falta de efectividad en la aplicación de justicia y el esclarecimiento de los crímenes, donde se sigue condenando a los autores materiales, dejando libre a los autores intelectuales de los hechos; la necesidad de propiciar espacios para la discusión y generación de políticas públicas en contra de la impunidad; la necesidad de seguir realizando acciones para la organización y movilización de las víctimas en la exigibilidad de sus derechos. En la Audiencia no se hacen presentes

representantes de la Fiscalía General, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de las altas Cortes, para dar cuenta sobre los casos emblemáticos de las víctimas.

Sábado 21

290 personas de 74 familias, entre las que se cuentan 121 niños /as, huyen en el departamento del Chocó, costa pacífica colombiana, ante los enfrentamientos armados de supuestas bandas de paramilitares, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. El desplazamiento se da en la región media del Bajo Baudó y la mayoría de víctimas corresponde a población afrodescendiente. La Defensoría del Pueblo, el Comité de la Cruz Roja Internacional –CIRC-, la Personería del Medio Baudó y Médicos sin Fronteras, intentan articular acciones que garanticen el regreso de esta población a sus sitios de origen. Los enfrentamientos entre estos grupos ilegales se dan por el control de zonas de tráfico de drogas.

Lunes 23

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)- rechazó la muerte de la defensora de derechos humanos, Norma Irene Pérez, quien fue hallada muerta en la Unión, departamento del Meta, tras haber sido dada por desaparecida en La Macarena el sábado 7 de agosto. La líder se había participado a mediados del mes de junio de 2010 de una audiencia pública, en la que se denunció la existencia de un cementerio clandestino, en el que se presume se habían enterrados personas sin identificar y víctimas de los llamados “falsos positivos”, en realidad civiles muertos quienes se hicieron pasar por integrantes de grupos guerrilleros por las instituciones militares y/o policiales.

Cientos de personas salieron desde Barrancabermeja en el departamento de Santander, hacia el municipio de Puerto Salgar en Cundinamarca, en una marcha contra el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia. La marcha se da en el marco del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, que cuenta con la presencia de delegaciones de organizaciones de derechos humanos. La acción hace parte de una protesta contra los efectos negativos que este tipo de acuerdos tienen sobre la población civil.

Martes 24

Informe reciente de la ONU insta al Gobierno Colombiano a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar los derechos en medio del conflicto armado que

vive el país. Por lo menos unas 7.500 personas engrosarían la lista de población en situación de desplazamiento para 2010, según Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la (ONU –OCHA) en Colombia. De acuerdo a este informe una de las situaciones más críticas se dio en el municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, donde más o menos unas 300 personas se desplazaron en el mes de agosto por combates entre el Ejército y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC; la población más afectada sigue siendo la indígena y la afrodescendiente, que en medio del conflicto vive problemáticas relacionados con el tema de seguridad alimentaria, movilidad, exclusión y desigualdad social. El informe también resalta el desplazamiento de 380 indígenas en Caloto y en Nechí en el Cauca, donde se presentan enfrentamientos protagonizados por grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico.

Conductores de los sectores del El Volcán, El Cristo y Villa Laura en la Comuna 13 en Medellín, departamento de Antioquia, permanecen en cese de actividades por el incremento de las acciones delictivas de las bandas del sector que les extorsionan y roban. A estos hechos se suman el enfrentamiento de estos grupos delincuenciales, que ya dejan varias personas muertas y heridas. Ante tal situación, las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad y la protección en la zona.

Miércoles 25

Miles de personas de la comunidad educativa, líderes políticos y sociales, salen a marchar en Bucaramanga, departamento de Santander, para expresar su rechazo a los actos de violencia que tuvieron lugar el 12 de agosto en Bogotá, donde explotó un carro bomba cerca de las instalaciones de Caracol Radio. Otras personas salen a marchar en el departamento en los municipios de San Gil, Barbosa, El Socorro y Barrancabermeja. Las personas marchantes expresaron su intolerancia e inconformidad frente a los actos de violencia.

La Mesa de Transportadores de la Ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, denuncia que hace más de 10 meses se ha reactivado la violencia en la ciudad en diferentes sectores, dejando a cinco conductores muertos y un número similar de heridos. Los sitios de mayor violencia son Robledo, Castilla, Manrique y la Comuna 13. En Medellín hay 95 terminales de buses legales, donde prestan servicios unos 4.500 vehículos, entre buses y colectivos, y todos sufren extorsiones, según vocero de los transportadores, quien agrega que las pérdidas por las vacunas y los destrozos que sufren los vehículos para obligarlos a pagar son incalculables. Los transportadores se quejan por la baja respuesta de las autoridades y por la inexistencia de programas de atención a sus demandas y necesidades de seguridad y de protección.

Viernes 27

En reunión del Presidente Juan Manuel Santos y las centrales obreras se acuerda la instalación en mes de septiembre de una mesa de interinstitucional concertación para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de sindicalistas y defensores de derechos humanos.

La central unitaria de trabajadores (CUT) denuncia y rechaza la desaparición del educador José Omar Olivo Britto, miembro del Sindicato de Educadores de Magdalena - EDUMAG. El sindicalista desapareció en la Ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena. El educador fue víctima de amenazas, junto a otras personas, por parte de paramilitares y no había recibido la protección por parte de las autoridades.

Unas 10.000 personas salen a marchar en Bucaramanga, departamento de Santander. El llamado a la marcha lo hizo la Gobernación, para romper la indiferencia contra las acciones de violencia y manifestarse en nombre de la paz. La jornada se extendió a otros 87 municipios del departamento.

Sábado 28

En Soacha, departamento de Cundinamarca, propietarios de transporte público, protagonizan un paro de 10 horas. La protesta se da en respuesta a desacuerdos frente a ajustes realizados en el plan de rodamiento, según la Alcaldía de esta localidad, por lo cual empresas de transporte y autoridades revisan el acuerdo en un plazo de 15 días. Durante las jornadas protesta se dieron algunos actos de vandalismo que se reprimen por la fuerza pública.

Miles de personas de 30 barrios de la Comuna 13, ciudad de Medellín, departamento de Antioquia salen a marchar contra las bandas armadas que se disputan el control de territorial, las plazas de droga y las extorsiones a transportadores y comerciante, afectando a los y las habitantes del sector. La movilización fue convocada por la junta de acción comunal y otras organizaciones sociales. La marcha se desarrolla como preámbulo a la apertura por parte de las autoridades del Centro Integrado de Intervención, a través del cual se establece una acción integral de la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el DAS, junto a otras entidades sociales del Estado, para enfrentar al crimen organizado y proteger a los pobladores del sector.

La Defensoría del Pueblo denuncia el secuestro dos asesores indígenas en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, por parte de grupos paramilitares. Tal situación se suma a hechos de hostigamientos por parte de paramilitares a las comunidades indígenas de esta región.

Domingo 29

Las comunidades indígenas y organizaciones sociales rechazan la muerte de líder indígena de la comunidad Los Pastos y de su esposa en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño. Este doble homicidio se suma a la falta de protección de los líderes indígenas por parte de las autoridades y a su difícil situación en materia de derechos humanos.

Autoridades locales en Medellín, departamento de Antioquia, pide ayuda autoridades nacionales ante la emergencia de pandillas que se disputan territorio, operando al mando de narcotraficantes y paramilitares, desbordando una ola de violencia en la ciudad que ha dejado desde enero de 2010, 1250 personas muertas y unos 2266 desplazados intraurbanos. A la situación de violencia se suma los paros de los transportadores que se resisten a las extorsiones de los grupos delincuenciales y exigen de las autoridades más contundencia. Según datos oficiales de la Personería de Medellín hay en el municipio más de 400 agrupaciones ilegales y de ellas unas 200 están activas, con un total de 5.000 miembros. Las zonas de la ciudad más afectadas son: centro occidental, noroccidental y nororiental.

Habitantes de la Comuna 13 en Medellín, departamento de Antioquia, recorren las calles en compañía del Alcalde Alonso Salazar y otras autoridades de policía para expresarse en contra del crimen y las bandas que operan en los barrios. Los líderes comunitarios aprovecharon la oportunidad para expresar la grave situación de desempleo y marginalidad que enfrenta la comunidad, y su situación de desprotección frente al crimen organizado. Las autoridades por su parte hicieron un llamado a los pobladores a no dejarse intimidar por los violentos y no permitir que destruyan los barrios y su tranquilidad.

Cientos de personas salen a marchar en Medellín, departamento de Antioquia, como parte de una campaña educativa para concientizar a las familias frente a la importancia de tener hábitos de alimentación saludable.

En Medellín, departamento de Antioquia, se mantienen paralizadas obras de vivienda por las extorsiones que sufren las empresas contratistas. Líder de derechos humanos de la zona noroccidental de la localidad, advierte a los entes gubernamentales, que millonarios contratos de mejoramiento urbano del sector, podrían ser víctima de cuantiosas extorsiones, que realizan bandas delincuenciales que operan en zona. A esto se suma la agudización de los índices de delincuencia, arrecidos por las disputas territoriales de las bandas, que cobran en sólo dos de estos barrios, Castilla y Doce de octubre, un total de 184 personas asesinadas; aumentado el número de desplazados intraurbanos; así también como limitan la movilidad de la población residente en el sector, por miedo a las retaliaciones de las bandas delincuenciales.

Martes 31

Alrededor 200 estudiantes de ciencias agropecuarias de la Universidad de Sucre bloquean la Troncal de Occidente, entre Sincelejo y el municipio de Sampués, departamento de Sucre, para exigir mayor presupuesto a los programas de zootecnia y otros. La manifestación de la comunidad estudiantil produce represamiento en el tráfico vehicular

Personal de salud de 50 sedes de asistencia médica en Medellín, departamento de Antioquia, realizan plantón en sus lugares de trabajo para exigir respeto a la misión médica. Enfermeras, médicos /as y directivos /as, con banderas blancas manifiestan su neutralidad en el conflicto y exigir el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Las directivas de la Red Pública Hospitalaria de Medellín –Metrosalud - manifiestan su rechazo a acciones de violencia contra el personal y la infraestructura de los centros hospitalarios, recalcando que el objetivo del personal médico es salvar vidas. Esta actividad se realiza ante un recrudecimiento de acciones de violencia en la ciudad y es programada por Metrosalud y la Alcaldía de Medellín. Por su parte, la Asociación Médica Sindical Colombiana, seccional Antioquia (ASMEDAS) insistió sobre la necesidad de crear un observatorio de seguimiento a la misión médica.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT) denuncia las precarias condiciones salariales, laborales y sindicales que enfrenta la población trabajadora del sector transporte, conductores de buses y busetas, en Bogotá, distrito capital, caracterizada por la informalidad, las pocas garantías en el cubrimiento de la seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), las largas jornadas laborales, las escasas posibilidades de movilización y organización social para la defensa de sus derechos, entre otros. Vocero de esta organización denuncia que tal situación se acentúa en esta Ciudad tras la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a través del cual se reordenará la movilidad en la capital. Sin lugar a dudas, la implementación de este sistema trae mejoras en la prestación del servicio y contribuirá a la formalización de un grupo considerable de trabajadores /as, según vocero del Sindicato, pero presenta dilemas en materia de violación del derechos al trabajo, en aspectos, tales como: la pérdida del empleo de por lo menos unos 4.000 trabajadores por la chatarrización buses y colectivos; la pérdida del empleo de trabajadores en edades superiores a los 40 años, quienes tienen pocas oportunidades de emplearse en el nuevo Sistema; la disminución de capacidades de organización sindical; entre otros.

Glosario de siglas

ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
ASMEDAS	Asociación Médica Sindical Colombiana
ASOCBAC	Asociación Campesina del Bajo Cauca
CICR	Comité de la Cruz Roja Internacional
CGT	Confederación General del Trabajo
CND	Coordinación Nacional de Desplazados -
CPDH	Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
CPI	Corte Penal Internacional
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
DPA	Polo Democrático Alternativo
EDUMAG	Sindicato de Educadores de Magdalena
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPS	Entidades Promotoras de Salud
FARC;	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
METRO-	Sistema de Transporte Integrado de la ciudad de Medellín
METROSALUD	Red Pública Hospitalaria de Medellín
OCHA	Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU

Colombia – Cronología del conflicto social de agosto de 2010 - OSAL

ONU	Organización de Naciones Unidas
SINTRAEMPAQUES	Sindicato de Trabajadores de Empaques
SIT	Sistema Integrado de Transporte
SNTT	Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte
TIP	Tarjeta de Identidad Personal
UDES	Universidad de Santander

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO)

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya

Responsable de informe y sistematización Lorena Álvarez Ossa

Relevamiento a cargo de Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Herald y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Septiembre de 2010

Editada en noviembre



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 765

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia***



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Lorena Álvarez Ossa (responsable)
Diana Ayala Villada
Diego Alejandro Salazar López

Fuentes

Diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El
Heraldo y Vanguardia Liberal, Semanario voz,
Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia
de Información Laboral ENS.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Septiembre de 2010

Miércoles 1

300 personas habitantes de Juan Mina en Barranquilla, departamento de Atlántico, bloquean la vía para exigir la instalación del alcantarillado, después que se les incumplan acuerdos con la Administración Municipal. En el hecho se registran enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades policiales, en las que quedan cuatro personas heridas. Las protestas se disuelven después que personal de la Alcaldía logra calmar a los y las manifestantes.

Los operadores y guías de turismo se toman la carretera que conduce a La Guajira en Santa Marta, departamento de Magdalena, por el mal estado de las vías de acceso a un balneario. Los manifestantes exigen del gobierno de la Municipalidad la reparación inmediata de la vía.

15 mil personas marchan en contra de los violentos en Montería, departamento de Córdoba. Las personas que participan de la movilización denuncian que en lo que va corrido del año se han registrado alrededor de 400 muertes violentas.

Vendedores /as del chance ‘La blanquita’ (apuestas) protestan al frente de la gobernación en Barranquilla, departamento de Atlántico, para exigir al Gobierno departamental la legalización de su actividad económica, de las que depende unos 1.100 personas y sus familias.

Habitantes del barrio La Arboleda, en Soledad, departamento del Atlántico bloquean vía al Aeropuerto (calle 30) para exigir mayor seguridad y obras de alcantarillado.

Jueves 2

Persona con insuficiencia renal y sus familiares se toman las instalaciones de la caja de compensación familiar – CAJACOPI- en Valledupar, departamento de Cesar, para protestar por la suspensión de los servicios médicos. Los y las manifestantes exigen el derecho a la salud y responsabilizan a esta institución de las consecuencias de no recibir tratamiento médico.

En encuentro programado por la Corte Constitucional sobre “La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la creación de trabajo formal”, realizado en Bogotá, Distrito Capital, dirigentes sindicales reconocieron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha permitido el disfrute de los derechos laborales a importantes grupos de trabajadores/as. No obstante, insisten sobre que la realidad laboral del país es tan precaria que la labor de la Corte Constitucional se queda corta para proteger los derechos laborales. Se requieren más esfuerzos para hacer realidad los derechos en materia de acceso al trabajo, consagrados en la constitución nacional de Colombia y ajustándose a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo referido a trabajo decentes.

Domingo 5

Habitantes de San Juan Nepomuceno y de San Jacinto en el departamento de Bolívar, bloquean carretera Troncal de Occidente por los continuos cortes de energía, lo que ocasiona estancamiento en el tráfico vehicular.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) organización que hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en su Junta Nacional, reunida en el Municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca, exige al Gobierno Nacional, poner en marcha una verdadera reforma agraria dedicada a acabar con el latifundio en Colombia, para de este forma vencer el conflicto social, económico, político y armado que vive el país. Al mismo tiempo, se denuncia y divulgan en este evento, las amenazas, judicializaciones, asesinatos y persecución de que son objeto las personas líderes de las organizaciones campesinas y populares en Colombia.

Unas 100 personas marchan de la provincia García Rovira, departamento de Santander, hacia la Gobernación, para protestar por el cierre de la vía Málaga – Curos. La comunidad exige de los gobiernos nacional y departamental, una solución inmediata a sus necesidades.

Lunes 6

Continúa protesta de habitantes de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en el departamento de Bolívar, bloquean la Vía Troncal de Caribe, en protesta por el mal servicio de energía, que es suspendido varias veces al día. La protesta se levanta tras establecer una delegación de la comunidad, funcionarios/as de la empresa de energía y el alcalde de la localidad.

Unas tres mil 300 personas acreedoras de la Frontino Gold Mines (FGM) bloquean vía de acceso al Municipio de Segovia, nordeste del departamento de Antioquia, para denunciar la ilegalidad de las venta de las minas y cuestionar la participación del Gobierno en el negocio. En 1976 en una coyuntura internacional marcada por la caída del precio del oro, el recrudecimiento de la situación de orden público en la región, la agudización del problema ambiental y el aumento de la carga prestacional, los inversionistas extranjeros deciden entrar en concordato preventivo. Fue así como en 1979 representantes de la junta de directiva compadecen ante un juzgado londinense y manifiestan su disposición de ceder los activos al Gobierno Nacional, a la entidad que consideren pertinente o a los trabajadores y pensionados que son los únicos acreedores de Mina, esto último se protocoliza en Notaría en Medellín en el año de 2003. Por otro lado, el Alto Tribunal Administrativo de Medellín, decidió que este no prestaba mérito ejecutivo y por tanto la Superintendencia de Sociedades, después de 28 años, en 2004, decide dar a apertura a la liquidación y en medio de ese proceso aparece Zandor Capital que hace el millonario negocio. Los trabajadores y pensionados reclaman sus derechos laborales. La acción de protesta se concertada por distintas expresiones organizadas de la localidad, Sintraminergética, la Veeduría Ciudadana, las Acciones Comunales, la Asociación de Pensionados Residentes en Segovia, la Asociación de Acreedores de la FGM, el Concejo Municipal de Segovia y otras organizaciones sociales y populares de la región.

Martes 7

Alredor de 2.000 personas habitantes San Onofre, departamento de Sucre, bloquen la vía que conduce a Cartagena para protestar por el mal estado de las vías, que comunican la región. Al lugar llegaron las autoridades y la Defensoría del Pueblo del departamento con el fin de poner fin a la situación, sin embargo, los y las manifestantes se mantendrán en la protesta hasta no ver soluciones concretas.

Miércoles 8

Tras un acuerdo con las autoridades locales y departamentales, habitantes de San Onofre, levantan el bloqueo a la carretera Troncal del Caribe. Vocero de la protesta afirma que la comunidad también tiene problemas en materia de salud y que varias personas han muerto por falta de atención. Las autoridades competentes se comprometen a realizar trabajos para el mejoramiento de las vías con la cooperación de la empresa camaronera que tiene allí su centro de operación y que se vio afectado por la protesta. La Defensoría del Pueblo se compromete a realizar el seguimiento al acuerdo y la comunidad advierte que de incumplirse los acuerdos nuevamente iniciará las acciones de protesta.

Viernes 10

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) sindicato federado en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una protesta nacional en rechazo a las pretensiones del Gobierno nacional de acabar con su régimen especial en salud para docentes federados, así también como para exigir al Gobierno ponerse al día con deudas de más de 300 mil educadores /as por su pasivo pensional. Las protestas contaron con la presencia de la comunidad estudiantil, estudiantes y familias.

Sábado 11

Unas 50 personas bloquean la calle 45 frente a las instalaciones Cárcel La Modelo en Bucaramanga, departamento de Santander, para protestar por el recorte de la hora de ingreso de las visitas. La manifestación se disolvió tras la llegada de personal de la Policía Nacional.

Lunes 13

En la Conferencia Interamericana de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP) que se realiza en Cartagena, departamento de Bolívar, voceros del sindicalismo colombiano denuncian la grave situación de vulnerabilidad que viven las organizaciones sindicales en Colombia, tanto de este sector como de otros. 420 Personas delegadas de 134 sindicatos de empresas prestadoras de servicios (públicas y privadas) de 32 países de toda

América, incluida las Antillas, hacen un capítulo final de resolución que pone de relieve la grave situación colombiana en materia de sindicalismo, expresando su solidaridad con los trabajadores/as colombianos y, al mismo tiempo, solicitando un cambio de la política antisindical que se agencia desde el gobierno y el empresariado del país.

Martes 14

Conductores de 130 buses y 122 busetas salen a paro en el Municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, para protestar por la violencia de que son víctima, por parte de bandas de delincuentes que operan en esta zona. Los conductores se quejan de millonarias extorsiones y de acciones que ponen en peligro su vida y seguridad, así también como de la falta de acompañamiento y protección de la fuerza pública.

Miércoles 15

Un grupo de moto taxistas se da cita en el centro de Bucaramanga, departamento de Santander, para protestar por la implementación medidas de tránsito que limitan su movilización. La protesta terminó en enfrentamiento de los manifestantes y agentes de la policía nacional tras el taponamiento de las vías. Decenas de personas se afectaron por la parálisis del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana – Metrolínea.

Alrededor de 200 personas, entre estudiantes y profesores /as de la Universidad de Antioquia en Medellín, departamento de Antioquia, protestan a la entrada de bloque administrativo por implementación Tarjeta de Integrada Personal (TIP). La protesta terminó con actos de violencia después del ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD- de la Policía, lo que obliga al cierre de la clausura. Estudiantes participantes en la protesta, denuncian la presencia de personas ajenas a la universidad tomando fotos a quienes protestan. Por otro lado, directivas universitarias dicen que la protesta se tornó beligerante por la presencia de personas encapuchada. La Universidad ha venido sufriendo cierres hace algunas semanas, por el nombramiento de decanos no legitimados por algunos estudiantes y docentes; la puesta en marcha de la TIP; actos de violencia y agresión, tras la irrupción de la fuerza pública. Directivas de la Universidad reconoce la Asamblea Estudiantil, como un actor político, que representa a los estudiantes, a través del cual se puede buscar una solución concertada a los problemas de coyuntura del Alma Mater.

Jueves 16

Habitantes del Municipio de Malambo, departamento del Atlántico, bloquen la vía Oriental que comunica con Barranquilla, interrumpiendo tráfico vehicular en protesta por la suspensión del servicio de agua potable, durante 15 días. La comunidad exige una solución rápida a su problema.

Personas propietarias y trabajadoras de las colmenas, en Valledupar, departamento de Cesar, protestaron por el decomiso en el mercado público de dos toneladas de azúcar venezolana por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. La acción de decomiso ocasionó un enfrenamiento campal de los y las manifestantes y la policía.

Docentes indígenas wayuu de Riohacha, departamento de la Guajira, protestan en las instalaciones de la Alcaldía de la Municipalidad, para exigir el pago de las quincenas de febrero y marzo.

Continúa paro en la Universidad de Antioquia en Medellín, departamento de Antioquia, las directivas universidad insisten en que la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP), motivo de las protestas de los y las estudiantes, continuará. Estudiantes que protestan por el nuevo sistema de carnetización, se mantendrán en Asamblea permanentes. Desde la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, se mantiene la intención de realizar un pacto académico que permita el regreso a la normalidad académica. Por otro lado, este organismo no se opone a la implementación de la TIP, pero, argumenta que se requiere mayor racionalización en su implementación para no impedir el acceso de la comunidad a la misma.

452 delegados/as reunidos en la XXVI Congreso de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que se realiza en Cartagena, departamento Bolívar, ratifica la necesidad de continuar avanzando en el fortalecimiento de la organización sindical en el país, en vía de continuar en la defensa de los derechos de la población trabajadora, afectada en Colombia por las políticas legislativas de flexibilidad en el trabajo, la intermediación de las cooperativas de trabajo asociado y el crecimiento informalidad. Para ello, se aprueba una reestructuración de la Central, que incluye la creación de dos nuevas vicepresidencias: de la juventud y la mujer; el refuerzo al departamento que se ocupa los temas de los trabajadores/as de la economía informal; así también como se da vía libre a la afiliación de trabajadores/as independientes, apoyados en la sentencia constitucional C- 468, que acoge el principio de la OIT sobre autonomía sindical.

Viernes 17

Docentes wayuu que protagonizan protesta el 16 de septiembre en Alcaldía de Riohacha, departamento de la Guajira, rechazan pronunciamiento del Personero, Jaime Peralta Brito, en el cual se califica sus acciones de secuestro, los implicados afirman que no perturbaron las labores de los funcionarios/as del ente público. Para el personero la acción de los manifestantes violentó e impidió la movilidad por las dependencias públicas.

Sábado 18

Unas 30 personas protagonizan un levantamiento en Nuevo Triunfo en el Municipio de Soledad, departamento de Atlántico, por homicidio de habitante del sector, asesinado por presunto persona delincuente del sector. La comunidad respondió ante el crimen de manera enardecida e indignada ante los hechos. La revuelta fue controlada por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.

Se mantiene tensión en la Universidad de Antioquia en Medellín, departamento de Antioquia, por la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP). Las Directivas de la Universidad argumentan que la implementación de este sistema, permitirá impedir el ingreso a la universidad por parte de delincuentes expendedores de sustancias psicoactivas y todo tipo material pirata (música, software y películas) que son vendidos al interior del alma mater. Por otra parte, estudiantes y profesores expresan su inconformidad por la implementación del sistema, ya que obstaculiza el ingreso e intercambio con la comunidad; lo que ha generado toda clase de protestas.

Lunes 20

Continúa paro en la Universidad de Antioquia en Medellín, departamento de Antioquia, después de la ocupación por parte de la Fuerza de Pública, ante la protesta de estudiantes y profesores /as en el bloque administrativo en días pasados. Durante dos días se realizaron reuniones de distintas dependencia para analizar la situación y avanzar en la declaración de la normalidad académica.

Martes 21

Un grupo de personas de distintos sectores de la sociedad civil, reclaman a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo que les atiendan sus exigencias, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ciudad capital. Entre las demandas de quienes manifiestas están: la no privatización Empresas Públicas de la ciudad de Cali – EMCALI (Valle del Cauca); la construcción de viviendas de interés social, compromiso del Gobierno anterior; la exigencia de la negociación del conflicto armado por parte de familiares de soldados y policía en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC; la búsqueda de soluciones en materia de cumplimiento de derechos humanos, para miles de personas que se encuentran sumidas en la pobreza; entre otros.

Personas y familias beneficiarias de créditos hipotecarios afectadas por desalojos salen a protestar en la Plaza de Bolívar en Bogotá, distrito capital, exigiendo el respeto de sus derechos fundamentales. Los y las manifestantes desarrollan la campaña “No pago, No entrego, No me dejo Desalojar” a través de la cual llaman la atención de los bancos y del Gobierno sobre la usura de las tasas de interés, y la crisis que enfrentan las familias tras la pérdida de sus viviendas.

Tres mil quinientas personas se dieron cita en la Cancha El Salado, Comuna 13, Medellín, departamento de Antioquia, para cantar a la vida y a la paz, tras una explosión de violencia que afectara a esta zona en las últimas semanas. Al evento asisten altas personalidades, entre políticos, cantantes y expresiones organizadas y culturales del barrio, entre quienes se encuentra el famoso cantante Juanes.

Pese a que se mantiene paro en la Universidad de Antioquia en la Ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, estudiantes y profesores se congregan en sus inmediaciones para mostrarse a favor del diálogo con distintos estamentos de la universidad y se muestran a favor con activar las clases. Las problemáticas de la universidad exigen que permanezca el dialogo abierto, de las distintas expresiones organizadas que hay en su interior.

Miércoles 22

Más de 300 personas habitantes de calle en Bogotá, distrito capital, marchan en protesta por el envenenamiento con cianuro de seis de estas personas, que termina con la vida de una de ellas, y el asesinato de otros dos. Las personas sin hogar exigen el respeto a sus vidas y denuncian los malos tratos de la ciudadanía.

Colombia – Cronología del conflicto social de septiembre de 2010 - OSAL

En reunión con Gobierno Nacional en Bogotá, Distrito capital, líderes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), denuncia los casos de violencia y violación de derechos humanos contra líderes sindicales en el país y exigen del Estado avanzar en las investigaciones, ya que hay un precedente de impunidad que llega al 95% de los homicidio y violencia contra sindicalistas. Otros temas de preocupación para las centrales son: los obstáculos en la organización de los trabajadoras/es en el país, y los efectos negativos de las cooperativas de trabajo asociado que afectan la estabilidad y la protección en seguridad social de los trabajadores/as. Según la CUT, continúa en el país el exterminio del movimiento sindical, que en lo que va corrido del año ha afectado a sectores como el magisterio, donde se cuentan ya 20 maestros/as asesinado. Las centrales solicitaron al Gobierno Nacional medidas para proteger la vida de los/as dirigentes, así también como para que los derechos de organización, negociación colectiva y huelga tengan un espacio suficiente de respeto en Colombia.

Jueves 23

Continúa las protestas en Segovia, departamento de Antioquia, por venta de Mina FGM a Zancor Capital.

Sábado 25

La ciudadanía sale a caminar por la Paz como parte de la actividad “Acepto vivir sin armas” en Barranquilla, departamento del atlántico. Con la programación de este tipo de actividades los entes gubernamentales y organizaciones sociales, quieren incidir en la disminución de los índices de violencia que se han disparado en la región.

Lunes 27

Unas 200 personas habitantes del Municipio de Luruaco, en el departamento de Atlántico, protestan por el mal estado de la carretera, la construcción de obras que ayuden a mitigar el impacto de las lluvias y los cortes continuos de energía eléctrica. La comunidad afectada exige una respuesta oportuna de parte de las autoridades locales y departamentales.

Miércoles 29

180 personas indígenas de los pueblos, zenú, embera catío, embera dobidá, embera chamí y tule, se da cita en Medellín, departamento de Antioquia, para exponer y denunciar las problemáticas que afectan los resguardos y, exigir al Gobierno Nacional y Departamental se dé respuesta a sus demandas en materia del cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional (acto 004 de 2009, apoyado en la sentencia T-025 de 2004, a través de la cual se obliga al Gobierno nacional a que reconozca las problemáticas de las comunidades indígenas y les brinde solución, en dos vías, brindar garantías a las etnias indígenas para evitar su extinción y crear un plan para proteger y tutelar sus costumbres y cultura). En Antioquia hay unas 167 comunidades, que albergan a 29 mil indígenas, en 32 municipios. Entre las problemáticas de estas comunidades indígenas se cuentan: el desplazamiento forzado; el confinamiento de las comunidades indígenas que temen a los enfrentamientos de grupos armados ilegales y fuerza pública; los cultivos ilícitos que colonos hacen en territorios indígenas; las minas antipersonas; la presencia de bandas emergentes, que con panfletos crean malestar y zozobra en la población; la explotación minera sin concertación con las comunidades en sus territorios ancestrales; entre otros. Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA) entre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario más recurrentes contra las comunidades indígenas está la invasión a sus territorios, los hostigamientos por parte de grupos armados y el reclutamiento forzoso de personas menores de edad.

Jueves 30

Unas 200 personas entre educadores, sindicalistas, organizaciones de mujeres y estudiantes protestan en Bogotá, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación en contra del fallo proferido por el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba por 18 años por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC-EP. Piedad Córdoba ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su mediación frente a la liberación de secuestrados por parte de este grupo insurgente. Los y las manifestantes consideran que este fallo afecta la gestión humanitaria a favor de la liberación de secuestrado.

Glosario de siglas

CAJACOPI-	Caja de Compensación Familiar –
CGT	Confederación General del Trabajo -
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores –
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
EMCALI	Empresas Públicas de la ciudad de Cali –
FARC- EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	La Federación Colombiana de Educadores
FGM	Frontino Gold Mines -
FENSUAGRO	Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria --
ISP	Federación Internacional de Servicios Públicos –
METROLÍNEA	Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana
OIA	Organización Indígena de Antioquia –
OIT	Orgnización Internacional del Trabajo
SNTT	Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte
TIP	Tarjeta de Integrada Personal

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO)

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya

Responsable de informe y sistematización Lorena Álvarez Ossa

Relevamiento a cargo de Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López

Colombia – Cronología del conflicto social de septiembre de 2010 - OSAL

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Herald y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Colombia

Octubre de 2010

Editada en diciembre



Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 784

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Colombia*



Integrantes

Guillermo Correa Montoya (coordinador)
Lorena Álvarez Ossa
Diana Ayala Villada
Diego Alejandro Salazar López

Fuentes

diarios El Espectador, El Tiempo, El
Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal;
Semanario Voz, Semanario Virtual Caja de
Herramientas y Agencia de Información
Laboral ENS

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Octubre de 2010

Viernes 1

Familias habitantes de Campo Alegre en la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, bloquean tráfico vehicular en el sector conocido como El Tobogán. La comunidad protesta por el mal estado de las vías y del alcantarillado, que ocasiona emergencias de deslizamientos y afectaciones en algunos apartamentos, y ante la ineficiencia del Gobierno local para la aplicación de recursos ya asignados en la realización de dichas obras. La protesta se disuelve ante la presencia de un funcionario público de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, quien se compromete a dar solución a las problemáticas.

En Bogotá, Distrito Capital, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), en reunión con el Gobierno Nacional, denunció cómo las amenazas contra los educadores y educadoras son desestimadas por las autoridades educativas en distintas regiones del país, terminando en algunos casos con la muerte de docentes implicados. Se hace mención a dos casos en el departamento de Caldas, donde dos educadores que habían solicitado se les diera estatus de amenazados, a fin de ser trasladados, no fueron atendidos y terminaron asesinados. Los directivos y directivas docentes también se refirieron a los temas de incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno pasado, la necesidad de unificar un Estatuto de carrera docente, la declaratoria de escuelas y colegios como territorios de paz (incluyendo una petición de que el Ejército Nacional no se acantone en las escuelas y colegios, sobre todo en las áreas rurales), y el inconveniente avance de la privatización de la educación pública en Colombia.

Sábado 2

Habitantes del barrio Los Sauces en Medellín, departamento de Antioquia, se reunieron para recordar el episodio trágico que estremeció la ciudad hace 20 años, tras la explosión de 200 kilos de dinamita que se encontraban almacenados en una vivienda, que dejó un total de 12 personas muertas, entre las que se encontraban ocho niños y niñas. Familiares de las

víctimas insisten en recordar los hechos para sanar las heridas y para exaltar el respeto a la vida.

Lunes 4

El Consejo de Seguridad del Atlántico crea Comité interinstitucional, coordinado por la Gobernación y las autoridades civiles y militares, para estudiar las causas de las protestas que interrumpen el tráfico vehicular en las carreteras de este departamento. En este departamento es común encontrar marchas, bloqueos de vías y protestas ante la ineficiencia en la prestación de servicios públicos y el mal estado de las vías. Las autoridades presentan estadísticas de 696 protestas este año por la ineficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios y sanitarios, que ocasionan en promedio una parálisis de tres horas del tráfico vehicular por día, lo que afecta también la economía con pérdidas. Lo anterior genera una situación de incertidumbre y sensación de des-gobierno en el departamento.

Martes 5

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del departamento de Bolívar, denunció la situación de amenazas contra varios dirigentes sindicales por parte de los paramilitares que se hacen llamar “Águilas Negras”, así también como las pocas garantías en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras de distintas empresas en Cartagena, en donde persiste el desconocimiento del derechos de la población trabajadora. Entre los casos más importantes están: el de atunes marca Vikingos y Van Camps, empresa en la que trabajan 1.200 personas, de las cuales 83 fueron despedidas por atreverse a afiliarse a la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL) para protegerse de las precarias condiciones laborales de esta empresa; el de la Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR), filial de Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL), la cual es un macroproyecto con problemas de contratación laboral, entre los que figura el despido arbitrario de 110 personas y la falta de garantías laborales; la situación de informalidad de cientos de trabajadores portuarios que son sobreexplotados y precarizados laboralmente; y, por último, la situación de informalidad de los taxistas de la localidad que viven problemas de inseguridad, de competencia del transporte ilegal, entre otros.

Personas que trabajan en Tubos del Caribe, filial de la multinacional Tenaris, empresa constructora de tubos para compañías petroleras, realizan acciones de protesta por la negativa de la empresa a negociar el pliego de peticiones que desde hace seis meses presentó el Sindicato de Trabajadores de Tubos Caribe (SINTRATUCAR), organización que agrupa a unos 300 trabajadores. Vocero de la CUT-Bolívar denuncia la política antisindical de la gerencia de Tubos Caribe, ya que adelanta acciones en contra de la

organización sindical y obstaculiza la convención colectiva al realizar despidos y ofrecer incentivos a quienes se desafilien del Sindicato, dicha situación se convierte en violatoria de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Voceros sindicales denuncian en Barranquilla, departamento de Atlántico, la situación de amenazas contra tres directivos de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales Públicos, (ANTHOC) Atlántico. A este panorama se suma la situación de alejamiento de derechos de otros trabajadores y trabajadoras de esta ciudad, entre los que sobresalen: Coca Cola Barranquilla, en donde el conflicto de esta última se visualiza a través de postulados de directivas sindicales que argumentan que la multinacional está en pleno proceso nacional de negociación con los sindicatos, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas en Colombia (SINALTRAIBEC), y que anuncia su intención de desconocer derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras en la convención colectiva. El caso de Quintal, empresa de químicos y abonos para la agroindustria que, de acuerdo con la denuncia de la CUT-Bolívar, emprendió una arremetida contra el Sindicato Nacional de la Industria Química, Agroquímica, Gases, ramas Afines y Derivados (SINTRAINQUIGAD), mediante planes de retiro voluntario, el despido de más de 30 obreros sindicalizados y la imposición de un pacto colectivo. Y, por último, los procesos de reestructuración en la Alcaldía Municipal que dejan sin trabajo a un grupo considerable de personas, sin respetar sus derechos laborales fundamentales.

Miércoles 6

Se suspende el paro del Sindicato de Taxistas en la Ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, después que las personas conductoras de taxis llegan a un acuerdo con la Alcaldía Distrital en los temas de aplicación de multas y control de transporte ilegal.

Se declara la normalidad académica en la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, la decisión se toma después de una reunión del Concejo Superior. El Alma Mater fue cerrada desde el pasado 15 de septiembre, tras el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una protesta de estudiantes por la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP), un nuevo carné que se empezó a implementar desde el 13 de septiembre. La rectoría informa que se mantendrá la implantación de este Sistema e invitó a quienes no tienen la Tarjeta a acercarse para su diligenciamiento. La apertura de las sedes universitarias se hará de manera gradual, concluyendo el 11 de octubre con su sede principal.

Jueves 7

Personal del sector Salud y agremiaciones del mismo, realizan una marcha en la Ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, para defender la salud como un derecho esencial. Los y las médicas, enfermeras y organizaciones, exigen que el Estado colombiano tome las medidas necesarias para superar la crisis del sistema de salud, caracterizada por el cierre de hospitales y por su quiebra, los paros de personal médico por salarios, el endeudamiento millonario y las múltiples demandas de usuarios/as reclamando atención por la vía legal de las tutelas. Para la Asociación Médica de Antioquia (ASMEDAS) el sistema de salud colapsó y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos es el encargado de liderar una profunda reforma en este momento que “tiene todo el Congreso a su favor”.

400 Trabajadores y trabajadoras de distintas organizaciones sindicales de Barranquilla, departamento de Atlántico, marcharon por las calles de la ciudad, para reclamar condiciones de trabajo digno, en adhesión a la Jornada mundial por el trabajo decente, así también como en protesta por algunas decisiones administrativas del Distrito que afectan a la población trabajadora. Entre los manifestantes están las organizaciones sindicales, los estudiantiles, las centrales obreras, las y los pensionados, y líderes comunitarios. El sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) denuncia que de 6 millones de estudiantes de esta Institución, sólo 200.000 han tenido el contrato de aprendizaje, que fue desmontado por el Gobierno anterior, lo que implica que la gran mayoría no podrá graduarse al no haber concluido su proceso de formación teórico- práctico. Lo anterior tendrá repercusiones sobre los y las jóvenes pobres, que son quienes particularmente acuden al SENA para insertarse en el mercado laboral. Las acciones de protesta afectan el tráfico vehicular en la Ciudad y particularmente el Sistema de buses articulado de TRANSMETRO.

Personas de distintas organizaciones sociales de Colombia se concentran en diferentes ciudades de Medellín, departamento de Antioquia; en Cali, departamento del Valle del Cauca; y en Bucaramanga, departamento de Santander, para reclamar condiciones laborales ajustadas a los principios de la OIT y a los Derechos Humanos fundamentales, y para denunciar los atropellos contra las libertades sindicales y el derecho de asociación que permanecen en el país. En los distintos eventos de los departamentos se resalta el aumento del desempleo, el incremento de las tasas de informalidad y subempleo, y la creciente pérdida de la legalidad en el trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras del país. Se resalta particularmente la situación de las mujeres y la población joven, que tiene menores niveles de cumplimiento de derechos en materia laboral. Algunas tasas generales importantes muestran la situación del país en materia laboral en el 2009: desempleo 12%; subempleo 39%; informalidad 57%.

Viernes 8

Organizaciones sociales y habitantes de la zona nororiental, en los barrios Bello Oriente, La Cruz y Honda, realizan movilización en el centro de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, para manifestarse a favor de la vida y el bienestar de sus comunidades.

Los sindicatos nacionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN, SINTRADIAN y SINDIAN), realizan protestas pacíficas en diferentes secciones de Bogotá, Distrito Capital, así como en otras ciudades del país, para tratar de revertir la medida de recorte masivo de personal, que deja sin empleo a 1.012 personas en todo el país. Según un vocero sindical, esta situación no le permitirá a la entidad cumplir con las metas del recaudo de los ingresos corrientes de la nación en el siguiente año, pues los supernumerarios cumplen tareas en todos los procesos de la Institución. Actualmente, este ente estatal tiene, a nivel nacional, un total de 9.774 trabajadores y trabajadoras.

Sábado 9

En Medellín y su Área Metropolitana, ubicada en el departamento de Antioquia, 350 sindicalistas a bordo de cinco vehículos tradicionales (chivas), realizan una caravana acompañados de motos y carros, haciendo paradas en empresas multinacionales emblemáticas en la Ciudad, como Philip Morris, Coca Cola, Meodoro, Global de Pinturas (Pintuco), Parmalat, Noel, Holasa, entre otras. Esta actividad es convocada por el Comité Sindical de Empresas Multinacionales, del cual hacen parte sindicatos adscritos a la CUT, y tiene por objetivo denunciar la renuencia de las multinacionales a respetar el derecho de asociación y a visibilizar precarización las condiciones laborales.

Domingo 10

En Bogotá, Distrito Capital, se realiza una simbólica caravana en bicicleta en el Día Internacional de las Soluciones Climáticas. La actividad la programa el movimiento Acción Climática Colombia, que comienza a hacerse notar a nivel nacional, de la mano con 350, una organización internacional que busca reducir 350 partes por millón la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera para mantener a raya el calentamiento global. El tema del cambio climático en Colombia está generando mucha movilización entre las personas jóvenes, quienes toman conciencia con la conservación del planeta.

Lunes 11

La comunidad educativa de la Universidad Católica de Oriente, ubicada en el Municipio de Rionegro del oriente antioqueño, marcha para protestar por el asesinato de uno de sus estudiantes. El joven se caracterizó por su liderazgo y por emprender acciones para dar solución a la ola de asaltos que se comenten en los alrededores de la sede universitaria. La Universidad invita a la comunidad a participar en las mesas de seguridad y rinde un homenaje al joven víctima de los sicarios.

En Medellín, departamento de Antioquia, regresan a clases los estudiantes de la Universidad de Antioquia. El Alma Mater estaba cerrada desde el pasado 15 de septiembre, tras el ingreso del ESMAD durante una jornada de protesta de algunos /as estudiantes. Al momento se está impidiendo el ingreso de visitantes de la biblioteca mientras se implementan los sistemas para el registro de visitantes. La Asociación de Profesores de la Universidad, a través de su vocero, solicita el establecimiento de un diálogo abierto entre las directivas y los estudiantes, así también como invita a atender la solicitud del Concejo de Medellín de crear una mesa de concertación, donde participen directivas, estudiantes, profesores y representantes del Concejo y la Asamblea Departamental de Antioquia para dar unas soluciones sostenibles a las tensiones que vive la comunidad universitaria.

Martes 12

Unas 1500 personas campesinas se tomaron la carretera que de Currulao conduce a Nueva Antioquia, en el municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño, la protesta se realiza por el mal estado de las vías, que impide que productos agrícolas como maíz, cacao, yuca, plátano y madera salgan para su comercialización a la cabecera municipal. Las acciones de protesta terminaron en problemas de orden público, que dejan un saldo de 15 policías heridos y muchas personas afectada por los gases lacrimógenos.

Jueves 14

Personas que utilizan la bicicleta como herramienta de trabajo protestan en la Alcaldía de Barranquilla, departamento de Atlántico, por la aplicación del artículo 131 de la ley 1383 del código de tránsito, que les impide la libre circulación de la Ciudad. Los manifestantes reiteran su derecho al trabajo y denuncian los atropellos y maltratos constantes de los agentes de tránsito al momento de retenerles sus vehículos.

Viernes 15

Personas protestan en Santa Marta, capital del Departamento de Magdalena, por homicidio de bebe recién nacida. Según las autoridades del Magdalena, la bebe fue agredida días atrás por una joven estudiante de enfermería, que se hizo pasar como médica de la Clínica de la Mujer de la Ciudad, ingresando a este centro asistencial y sacando a la recién nacida de la sala de neonatos del centro asistencial y luego procedió a asesinarla. El hecho ha generado indignación y repudio en la Comunidad en general.

Sábado 16

La comunidad educativa del colegio Calixto Álvarez en Barranquilla, departamento del Atlántico, realizan plantón para protestar por el asesinato de uno de sus estudiantes en masacre. El niño de cinco años era estudiante de transición y murió con otras personas de su familia. Las autoridades de la Gobernación informan que los crímenes son producto de la retaliaciones entre traficantes de droga.

En el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, personas intentaron tomarse un parqueadero donde se encontraban retenidas, por parte de las autoridades de tránsito, unas 600 motocicletas que había sido inmovilizadas por la Policía durante un operativo que buscaba reducir el transporte informal, lo que obligó a las autoridades a decretar toque de queda. Los manifestantes exigen a las autoridades legalizar su trabajo, que en este momento es prohibido por las autoridades.

Domingo 17

Se levanta el bloque de la vía que de Currulao conduce a Nueva Antioquia, en el municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. Las protestas llevan ya varios días y tienen como fin denunciar el mal estado de las vías que ocasionan la pérdida de productos agrícolas que no pueden transportarse para su comercialización en la cabecera municipal. La protesta se levanta una vez que se llega a un acuerdo, que incluye mantenimiento de las vías lo más pronto posible y apoyar el desplazamiento de los productos agrícolas, entre la comunicad, la Alcaldía Municipal, Acción Social y el Ejercito Nacional.

Alrededor de 800 personas bloquean vía que comunica al corregimiento de El Tres con San Pedro de Urabá, en la subregión del Urabá Antioqueño. Las protestas se realizan por el mal estado de la carretera producto del crudo invierno que vive la región. Este bloqueo se disuelve una vez las autoridades locales de Turbo llegan a un acuerdo de mejoramiento de vías con la población.

Martes 19

450 personas trabajadoras de Flores, La Fragancia, se declaran en paro para reclamar a la Empresa el pago de la seguridad social y otras prestaciones sociales. La anterior acción de huelga, hace parte de una crisis que vive el sector floricultor desde hace ya varios años y que se intensifica en los últimos meses, dejando un balance negativo de pérdida de más o menos unos 17 mil puestos de trabajo en la sabana cundiboyacense. Directivo CUT denuncia que este sector ocupa una inmensa cantidad de mano de obra barata tercerizada, constituida por una amplia proporción de mujeres cabeza de familia, y asegura que la mayoría de los empresarios nunca han pagado los derechos reales de la población trabajadora del sector. Por otro lado, la pérdida de garantías laborales no ha recibido ninguna acción de control por parte del Estado, para mínimamente garantizar los derechos. Por otro lado, los sindicatos denuncian que la revaluación del peso se ha convertido también en una excusa para que las empresas agudicen su sobreexplotación laboral y hagan mal uso de los subsidios y créditos que les otorga el Estado, profundizando la precarización de las personas.

Miércoles 20

La comunidad de Tame en el departamento de Arauca, marcha para protestar por la muerte de una niña de 14 años y dos de sus hermanos de 6 y 9 años en esta localidad. A los hechos se vinculó a subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, quien fue acusado por fiscal de Derechos Humanos, que le imputó cargos por homicidio agravado, acceso carnal violento, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años,. Los y las marchantes exigieron a las autoridades el esclarecimiento de las muertes y castigo para los implicados. En la protesta pacífica participan población campesina, funcionarios/as públicos e instituciones educativas.

Trabajadores informales que se desplazan en bicicleta bloquearon vías en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, en protesta por los operativos de la Policía de tránsito, que les impiden estar por distintos lugares de la localidad. La Administración Municipal se mantiene en su decisión de aplicación de la norma y adelantarán las acciones necesarias para impedir que se cierren las vías de tránsito vehicular, por su lado, los manifestantes reiteran que mantendrán las acciones de protesta.

Jueves 21

En Medellín, departamento de Antioquia, la CUT-Antioquia y 25 organizaciones sindicales rechazan las declaraciones de Alonso Salazar, Alcalde de la Municipalidad, en contra del Sindicato de Empresas Varias de Medellín (EEVV) empresa dedicada a los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. El Alcalde de la Ciudad, según los directivos sindicales, ha desacreditado a los sindicatos por expresar su desacuerdo con la forma como se adelanta el proceso de reposición del parque automotor en esta Institución. Tal posición del alto funcionario público obstaculiza el diálogo social y constituye una amenaza contra la libertad de Asociación.

25 organizaciones sindicales, cabeza de la CUT-Antioquia, realizan en Medellín, departamento de Antioquia, acciones de protesta en contra del despido de 180 personas trabajadoras de misión de la Empresa Social del Estado Metrosalud, que es la red pública hospitalaria de la ciudad. La Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD) se declara en alerta laboral ante el anuncio del inminente despido, que no sólo vulnera los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de esta entidad, sino que también afecta a la atención en salud a la población más pobre y vulnerable de Medellín. Directivo sindical de la CUT afirma que, si bien el ente estatal tiene un déficit millonario, no puede ser que quienes trabajan allí paguen los errores administrativos y de gestión de la Institución.

Lunes 25

Unas 150 personas de Bogotá, Distrito Capital, asistieron al debate de control político del Concejo de la Ciudad para protestar por el proyecto de construcción de una concha acústica para eventos en el Parque El Salitre, cerca de un cuerpo de aguas. Los argumentos de quienes se oponen al proyecto son claros: proteger la zona que representa un pulmón para la ciudad y con ella el humedal que representa una fuente de aguas limpias, evitando, de este modo, que se acaben con diferentes especies de aves migratorias, que viajan al sur del continente para reproducirse. Esta acción hace parte de una serie de actividades que viene adelantando la comunidad para la protección de este ecosistema.

500 estudiantes de San Rafael de Heliconia, municipio del occidente antioqueño, se declaran en cese de actividades académicas hasta que no se concluya la edificación de la única institución educativa que hay en la localidad. La comunidad educativa y las autoridades denuncian que las obras se iniciaron en el 2007 con un mejoramiento locativo y que después se determinó que debía ser demolida por fallas estructurales y volver a ser edificada; sin embargo, pese a que se demolió la edificación, aún no se termina su construcción, lo que ocasiona serios problemas, sociales y de materia educativa, a su

alumnado. Aún no se giran los recursos por parte de la Gobernación de Antioquia para concluir con la obra.

Martes 26

Habitantes del barrio La Esmeralda, damnificadas por el invierno, protestan en Barranquilla, departamento de Atlántico, por la falta de efectividad del Estado y los organismos de emergencia. Al sitio llegaron agentes del ESMAD de la Policía, quienes dispersaron con gases lacrimógenos la manifestación. En medio de la protesta resulta muerto un joven de 23 años.

Habitantes de El Copey en Valledupar, departamento de Cesar, bloquearon Troncal de Oriente, carretera nacional que comunica a la Costa con el interior del país y con el resto del Caribe, para protestar por la mala calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía en la zona. La protesta se disolvió una vez se logra firmar un acta de acuerdo entre personas voceras de la comunidad, representantes de las empresas de servicios públicos, gobierno municipal y la personería.

Miércoles 27

Más de 1.000 personas dedicadas al comercio en Riohacha, departamento de la Guajira, participan en una marcha para protestar por la situación de seguridad de la ciudad. Los comerciantes denuncian ser víctima de extorsiones y asesinatos, y exigen de las autoridades medidas contundentes para frenar la ola de criminalidad que hay en la Ciudad.

Jueves 28

En Medellín, departamento de Antioquia, la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Asociación de Educadores de Antioquia (ADIDA), presentó una investigación de memoria histórica sobre las diversas formas de violencia ejercida contra los educadores afiliados a esta Asociación de 1978 a 2008. Esta investigación registra 1890 casos de violaciones contra la vida, la libertad e integridad de los educadores antioqueños, entre los que se cuentan 372 asesinatos y desapariciones, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Medellín, Oriente de Antioquia y Urabá, regiones en las que el conflicto ha revestido unas dinámicas particulares. Las y los educadores sindicalizados en el departamento han sido víctimas de una sistemática violación de sus derechos humanos y de la estigmatización y persecución por parte de actores armados ilegales, particularmente de

paramilitares, ante la impunidad del Estado que no ha judicializado a los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.

Domingo 31

Continúan en jornadas de protesta 500 estudiantes de San Rafael de Heliconia, municipio del occidente antioqueño, porque llevan tres años esperando que les terminen la construcción de la institución educativa; el Gobierno Departamental aún no gira los recursos. El problema de la falta de instalaciones adecuadas tiene a los estudiantes arrinconados en sede improvisada, sin laboratorio de física ni de química.

Glosario de siglas

ADIDA	Asociación de Educadores de Antioquia
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales Públicos
ASMEDAS	Asociación Médica de Antioquia
ASMETROSALUD	Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud
CUT	Central Unitaria de Trabajadores –
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleo
EEVV	Empresas Varias de Medellín
ENS	Escuela Nacional Sindical
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
METROSALUD	Red pública hospitalaria de la ciudad
OIT	Organización Internacional del Trabajo

Colombia – Cronología del conflicto social de octubre de 2010 - OSAL

PINTUCO	Global de Pinturas
REFICAR	Refinería de Cartagena S.A
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SINALTRAIBEC	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas en Colombia.
SINALTRAINAL	Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario
SINDIAN	Sindicato Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
SINTRADIAN	Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
SINTRAINQUIGAD	Sindicato nacional de la industria química, agroquímica, gases, ramas afines y derivados.
SINTRATUCAR	Sindicato de Trabajadores de Tubos Caribe
TIP	Tarjeta Integrada Personal
TRANSMETRO	Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Barranquilla
USTRIAL	Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya.

Responsable de informe y sistematización Lorena Álvarez Ossa.

Relevamiento a cargo de Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López.

Fuentes principales: diarios El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Colombia – Cronología del conflicto social de octubre de 2010 - OSAL

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

País

Mes de Año

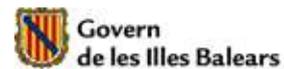
Editada en el MES de AÑO



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 000

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de*



Integrantes Nombres

Fuentes Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Noviembre de 2010

Martes 2

Habitantes de los barrios del suroriente y suroccidente de Cartagena, departamento de Bolívar, protestan por falta de solución a problemas de inundación provocados por las fuertes lluvias, que dejó anegados el 70% de los barrios de la ciudad. La protesta se disuelve una vez se acuerda reunión con autoridades municipales, quienes anuncian la creación de un fondo de compensación para ayudar a las personas que perdieron electrodomésticos, enseres, muebles y demás pertenencias, además de la otorgación de créditos de bajo interés.

Miércoles 3

Habitantes del barrio La Candelaria en Cartagena, departamento de Bolívar, bloquean vía en protesta por la falta de solución a problema eléctrico provocado por una tormenta. Líder cívico del sector denuncia la respuesta agresiva de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que disparan gases lacrimógenos contra la población civil en medio de la protesta.

Habitantes de El Socorro, Blas de Lezo y San Pedro en Cartagena, departamento de Bolívar, protestan por la falta de servicio de energía durante varios días.

Habitantes de Altos del Campo en Barranquilla, departamento de Atlántico, realizan manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Constructora Alejandro Char y Cia., la cual construyó el Conjunto Residencial Altos del Campo, que presenta problemas de estabilidad estructural y de habitabilidad afectando a 160 familias residentes. Las personas exigen a las autoridades ser evacuadas inmediatamente ante el riesgo de la vida, la Alcaldía no tiene establecido un plan de contingencia que responda ante las necesidades que presentan las familias.

Jueves 4

Cinco mil estudiantes y profesores de la Escuela Normal Nacional de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, protestan por la muerte violenta de una alumna del colegio. Los y las manifestantes piden respeto a la vida y exigen a las autoridades celeridad en la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Familias damnificadas de cinco barrios del suroccidente de Barranquilla, departamento de Atlántico, protestan ante la Administración Distrital para exigir el pago de los meses de arriendo que les adeudan. Las familias fueron sacadas de sus viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, con el compromiso del pago del arriendo. Durante la protesta se presentan enfrentamientos con agentes de policía que custodian el edificio municipal. La protesta se disuelve tras el compromiso de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de entregar el dinero.

Viernes 5

Habitantes del Conjunto Residencial Miraflores, ubicado en la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, protestan en contra de la Constructora Metrópolis, porque el conjunto habitacional presenta fallas estructurales en su edificación. Los y las manifestantes denuncian el agrietamiento de las viviendas y la existencia de estudios que demuestran que éstas no tienen valor inmobiliario por estar ubicadas en zonas de alto riesgo; los manifestantes afirman que el avalúo simbólico de las viviendas está en un costo muy inferior al precio en el que fueron adquiridas y anuncian acciones legales contra el Distrito.

Lunes 8

El Consejo Municipal de Empleo y Productividad de Medellín, departamento de Antioquia, toma la decisión de avanzar en la construcción de una política pública de Trabajo Decente para esta capital. La tasa de desempleo general para Medellín está alrededor del 13%, la tasa de informalidad 51% y la subempleo 30%. Son las poblaciones más pobres quienes enfrentan la condición de mayor alejamiento de derechos laborales, que repercuten en sus insuficientes desarrollos en materia de indicadores de calidad de vida y en el fenómeno de violencia histórica que vive la ciudad.

Habitantes de Barranquilla, departamento de Atlántico, bloquean el paso de vía del barrio Olaya para exigir la pavimentación de vía.

Martes 9

Habitantes de sectores privados, públicos y sociedad civil de Riohacha, departamento de la Guajira, marchan para protestar contra el acto legislativo 013, que constituye el Sistema General de Regalías, que hace modificaciones a articulados de la Constitución Política, ya que consideran que este le resta autonomía a los entes territoriales que tienen el derecho de recibir beneficios por la explotación de sus recursos naturales. Para quienes manifiestan, la no recepción de los recursos de regalías constituye una amenaza para garantizar programas de educación y nutrición de la población en muchos municipios del departamento. La comunidad se manifiesta para exigir que no se modifique la distribución de las regalías, así también como que se garantice la autonomía de los entes territoriales en la Constitución Política del país.

Miércoles 10

Familias del Parque Residencial Atardeceres afectadas por deslizamientos de tierra en la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, realizan bloqueo de vía para recibir respuesta a sus demandas. La protesta se disuelve tras la firma de acuerdo, en el cual se resuelve, iniciar remoción de tierra inmediatamente, habilitar otra entrada al conjunto residencial, mejorar la iluminación del sector para evitar inseguridad y encerrar el conjunto residencial para evitar más catástrofes.

Miércoles 10

En Bogotá, Distrito Capital, un grupo de usuarios y usuarias del Sistema de transporte público masivo de la Ciudad –TRANSMILENIO, se toman durante seis horas el portal de la calle 80 para protestar por la demora en el servicio, afectando a unas 75.000 personas. Luego de cinco horas de negociación con los usuarios y con el Distrito, se acordó: mejorar la capacidad de operación (disponibilidad, continuidad y frecuencia de los buses), optimizar el funcionamiento de las rutas, aumentar el número de guías de información dentro del sistema, instalar botones de sobrecurso en los articulados y generar tarifas diferenciales para estudiantes y clientes frecuentes.

Las clases en la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín, departamento de Antioquia, se suspenden por actos vandálicos. Los estudiantes y profesores concentrados en las entradas de la universidad manifiestan su indignación por el ingreso del ESMAD. Se reiteró que la Alma Mater no es un territorio de confrontación, sino un territorio del conocimiento, del debate y de la democracia.

Indígenas wayuu marchan pacíficamente en la Riohacha, departamento de la Guajira, para exigir que el Congreso de la República, no sancione el acto legislativo 013 que cursa en el

Congreso, que cambia el sistema de regalías, algunos artículos de la Constitución Política del país, entre otros. Los indígenas exigen justicia para los departamentos productores de recursos naturales, ya que serán afectados económicamente de manera dramática con la sanción de la disposición legal que pretende redistribuir los recursos de regalías. Esta comunidad indígena expone que el acto legislativo 013 es violatorio del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989”, ratificado por Colombia.

Jueves 11

Cuatro mil estudiantes de 40 instituciones educativas participan, en el Municipio de Bello, departamento de Antioquia, en marcha para pedir por el respeto a la vida y la promoción de estilos de vida saludable. La iniciativa hace parte del Proyecto de Vida de la Administración Municipal, que busca hacer un acompañamiento integral a la población estudiantil. En este programa participan 14.500 personas, entre adolescentes y jóvenes escolarizados/as, entre quienes se cuenta con unos 1.400 estudiantes con problemas de comportamiento y rendimiento académico.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmeccánica, Metalúrgica y Siderúrgica (SINTRAIME), Subdirectiva Medellín, departamento de Antioquia, realiza divulgación de la actitud de la Empresa Bonem S.A, que desconoce la resolución del Ministerio de la Protección social del gobierno nacional, la cual le obliga a negociar el pliego de quienes en minoría están sindicalizados. El Sindicato denuncia, que tal situación impide los derechos de asociación y de la negociación colectiva, ratificados por Colombia ante la OIT.

500 personas familiares y allegadas de víctimas de paramilitares protestan en Segovia, departamento de Antioquia. Las familias salen a las calles a conmemorar 22 años de la masacre de Segovia, ocurrida en el año de 1988 y donde murieron 43 habitantes de la región, entre quienes se encontraban niños. El ataque fue perpetrado por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) quienes ejecutaron en el nordeste antioqueño acciones en contra del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP). La movilización fue convocada por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) defensoras de Derechos Humanos, y clama por justicia y reparación frente al crimen de lesa humanidad. Actualmente el caso de esta masacre fue asumido por la Corte Suprema de Justicia, quien investiga la responsabilidad de político liberal y ex congresista Cesar Pérez, detenido el 22 de julio de 2010, ya que para el momento perdía la urna con la UP, dicho acto se comente en retaliación y para amedrantar a los votantes. Las personas asistentes a la marcha se quejan de la difícil situación de orden público en la zona por la presencia de bandas criminales, que sacan dividendos de la minería ilegal en la región.

Viernes 12

Un grupo de estudiantes de medicina de Medellín, departamento de Antioquia, realizan protesta por Resolución 1058 del Ministerio de Protección Social, a través de la cual se les modifica la prestación del servicio social obligatorio. Entre las preocupaciones de los futuros médicos y medicas está: la ampliación de su servicio social obligatorio de seis meses a un año, lo que según los y las estudiantes técnicamente no se puede hacer por el número de plazas limitado debido a que el número de facultades de medicina aumentó en la ciudad. La asignación de lugares localizados en zonas de orden público es afectada por el conflicto armado, lo que amenaza la vida e integridad física de los estudiantes. La crisis económica del sistema general de salud ha obligado a las clínicas y hospitales a no pagar sus nóminas durante meses. Por último, los y las manifestantes insisten en que estas disposiciones hacen que empresas sociales de salud del Estado no llenen sus plazas con estudiantes sino con médicos generales. Los y las alumnas refirman su renuencia a ir a lugares donde no se garantice su seguridad física y exigen que el Ministerio de Protección Social y otros entes encargados del tema den respuesta a sus inquietudes con respecto a la puesta en marcha de la disposición legal.

Estudiantes de la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín, departamento de Antioquia, formaron cadena humana para evitar que el ESMAD ingresara a la ciudadela universitaria. El acto pacífico planeado como un momento simbólico de unión, fuerza y rechazo a los violentos se alteró generando el ingreso de la fuerza policial a la universidad, con la consiguiente reacción de la población universitaria. Los eventos de protesta de los estudiantes siguen presentándose por la implementación de la Tarjeta de Identificación Personal (TIP) un nuevo carné que se empezó a implementar desde el 13 de septiembre.

Sábado 13

Familias y comunidad de Armero – Guayabal, departamento de Tolima, participan en acto de recuerdo a la tragedia de Armero, acaecida un miércoles 13 de 1985 por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz , que dejó unas 20 mil personas muertas.

Alrededor 200 mil estudiantes se declaran en desobediencia educativa en protesta por la falta de pago de sus docentes. El acto de desobediencia es convocado por la Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR) ante el no pago de salarios y primas.

Martes 16

En San Jerónimo, municipio del occidente de Antioquia, conductores de camión protestaron porque no hay paso por daños en la carretera que conduce a la ciudad de Medellín.

Miércoles 17

Dos mil personas mantuvieron bloqueada la vía que comunica al municipio de Juan de Acosta con Barranquilla, en el departamento de Atlántico, en protesta a que llevan 15 días sin agua. La protesta se levanta cuando la empresa prestadora del servicio público llega a un acuerdo con los afectados, que incluye la reactivación del servicio y el no cobro de la factura. La comunidad también se queja por la interrupción del servicio de energía.

Habitantes del corregimiento de San Basilio de Palenque, en el municipio Mahates en el departamento de Bolívar, bloquean calle de sector neurálgico conocido como La Cruz, que es transido para Sincelejo, Montería y el interior del país, para protestar por la falta de servicios de salud, de energía y la adecuación de vías.

Habitantes de Sincerín, corregimiento de Arjona, departamento de Bolívar, bloquean vía para protestar por inundaciones y la falta de respuesta de las autoridades a sus problemáticas.

Aproximadamente 500 personas habitantes de Mirador de Campo Alegre y Ciudad del Sol marchan para exigir al gobierno la reubicación de sus viviendas, en Barranquilla, departamento de Atlántico. La Personería Distrital acompaña las acciones de protestas de las familias que, por más de 5 décadas, evidencian problemas por estar ubicadas en sitios geológicamente inestables. La construcción de las unidades residenciales fue autorizada hace unos años, pese a que Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) en el año de 1997, definió la zona de la ladera occidental de la ciudad como un lugar de alto riesgo.

Jueves 18

En el municipio de Tame, departamento de Arauca, se realiza protesta en la que se repudia el asesinato de una niña y dos niños en hechos que implican a militares del Ejército nacional. La acción de protesta es liderada por la senadora de la República, Gilma Jiménez. Por la gravedad de los hechos el Senado de la República de Colombia crea Comisión Accidental para que se analicen las circunstancias de los crímenes.

400 personas transportadoras protestan en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, para que la Alcaldía Municipal les devuelva las rutas de transporte, suspendidas por obras en las vías. Tal situación mantuvo la ciudad paralizada.

150 estudiantes de la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla, departamento de Atlántico, marchan por el norte de la ciudad, para protestar por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de la facultad. La marcha paraliza el tránsito en los alrededores y causa traumatismos en la operación del Sistema de transporte masivo de Barranquilla-

TRANSMETRO. Los y las estudiantes están en contra de que se confiera los terrenos de la Escuela y hacen un llamado a la comunidad para que se defienda el edificio como Patrimonio Histórico de la Nación.

Viernes 19

400 habitantes del barrio Campo Alegre, conjuntos residenciales y barrios aledaños, ubicados en zonas geológicamente inestables, marchan en Barranquilla, departamento Atlántico, para exigir al Distrito y el gobierno nacional la reubicación inmediata de las familias afectadas por el invierno y los deslizamientos, así también como la atención inmediata del gobierno nacional por la ola invernal en la Costa Atlántico. La Personera Distrital realiza vigilancia de la problemática de las urbanizaciones, acompañando a las familias para exigir su reubicación para no lamentar vidas humanas; también afirma que se abrirán procesos de investigación para establecer la corresponsabilidad entre los constructores, vendedores de predios, ex secretarios de planeación y a quienes expidieron los permisos y licencias de construcción a sabiendas que existían riesgos de deslizamiento.

Sábado 20

Habitantes del municipio de Cicuco, departamento de Bolívar, protestan por la falta de atención médica en la sede hospitalaria de la localidad, debido al paro que adelantan sus trabajadores desde hace 15 días. La comunidad denuncia que hay una emergencia en salud, debido a las inundaciones que en estos momentos cubren el 70% de la parte urbana.

Domingo 21

Los habitantes de Barranquilla, departamento del Atlántico, marchan el Día de la Alegría Caribe para manifestarse en contra de la desnutrición y la violencia en la ciudad.

Lunes 22

Habitantes de los barrios Loma Roja y Villa del Rosario en Barranquilla, departamento de Atlántico, protestan en la Alcaldía Municipal para reclamar el subsidio de arriendo que este ente gubernamental acordó, en días anteriores, entregarle por concepto de daños que ha generado el invierno en sus viviendas.

Martes 23

Más de 300 indígenas Zenúes se toman la Asamblea Departamental de Córdoba, en la ciudad de Montería, en protesta por una ordenanza territorial que debe delimitar los municipios de Tuchín y Chimá. La protesta obedece a la inconformidad de las comunidades indígenas por los límites establecidos.

Unas 1.000 personas del Barrio Juan XXIII realizan, en Medellín, departamento de Antioquia, protesta en contra de la violencia que azota este sector de la zona centro occidental de la Ciudad. La protesta se realiza durante sepelio de niño víctima de una bala perdida, durante enfrentamiento entre pandillas.

Miércoles 24

En el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Sindicalismo organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia, realizado en la ciudad de Bogotá, distrito capital, el gobierno, a través del vicepresidente Angelino Garzón, analiza la penosa situación de impunidad de los crímenes contra sindicalistas en el país. Para el alto funcionario público, pese al avance en materia de investigación de algunos casos por parte de la Fiscalía General de la Nación, aún las sentencias siguen siendo mínimas frente a los miles de casos que hay en el país sin investigación respectiva y el silencio de la justicia. Según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) del 1° de enero hasta el 30 de agosto de 2010, persiste la violencia y violación de derechos contra los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en Colombia, expresado en los primeros seis meses de este año por 35 homicidios (10 de ellos contra dirigentes sindicales) y 17 atentados (14 contra dirigentes sindicales). El gobierno actual manifiesta su interés y compromiso en avanzar en una política de promoción y respeto de los derechos laborales como parte de los derechos humanos fundamentales y fortalecer, y materializar a través de los entes competentes los procesos de investigaciones y acusaciones contra las víctimas.

Un grupo de personas damnificadas por el invierno del barrio Carrizal bloquean la vía de circulación de los buses del TRANSMETRO en Barranquilla, departamento del Atlántico, para exigir al Distrito los subsidios de arriendo por haberse quedado sin techo. Los y las manifestantes se quejan de la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de entes gubernamentales locales.

120 familias de Loma Roja y de Villa del Rosario en Barranquilla, departamento de Atlántico, protestan en el Palacio Municipal para exigir que les entreguen los subsidios de arriendo por efectos de las inundaciones a causa del fuerte invierno que azota el país. La protesta se disuelve tras ser atendidos por funcionario de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Distrito.

Conductores de la ciudad de Cartagena, en el departamento Bolívar, que hacen el recorrido por el barrio Nelson Mandela y otros 20 barrios más, protestan para exigir a las autoridades competentes el arreglo de vías, que les ocasiona millonarias pérdidas. El paro de transportadores afecta a unas 50.000 personas. La protesta se levanta una vez se hace presente la Secretaría de la Infraestructura del Distrito, quienes se comprometen a realizar las obras de mejoramiento vial.

Jueves 25

Habitantes del barrio Arriba de Riohacha, departamento de la Guajira, bloquean vía que comunica el centro con el norte del departamento, en el puente de Riíto. Las personas protestan por las aguas negras que están represadas en el sector, debido a los trabajos de reposición que realiza la empresa de acueducto en la tubería. Los y las manifestantes exigen la presencia de las autoridades locales y departamentales, y las empresas de acueducto.

Los habitantes del barrio Arriba de Riohacha, departamento de la Guajira, bloquean el paso vehicular entre el norte y sur de la ciudad, exigiendo la pronta culminación de las obras de alcantarillado que los tienen en emergencia sanitaria. La Junta de Acción Comunal denuncia a la Gobernación por falta de cumplimiento de las obras millonarias, así también como el retraso de la empresa contratista, que afecta con el represamiento de aguas lluvias a los habitantes del sector.

En los municipios Bello y Medellín, departamento de Antioquia, se realizan actividades públicas en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Cientos de mujeres se dieron cita para proclamar el Derecho a la vida libre de violencias y hacer un llamado a las autoridades gubernamentales para que se desarrollen programas dirigidos a prevenir y erradicar las violencias basadas en el género.

Viernes 26

Habitantes de la comuna 5 y 6 de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, marchan para protestar por las fronteras territoriales que establecen los actores armados y las bandas en la ciudad. La marcha fue promovida por ONGs del sector y recorre las principales calles de la zona.

160 personas internas del patio F de la Centro Penitenciario el Pedregal en Medellín, departamento de Antioquia, se declararon en huelga de hambre para protestar por la desatención médica de seis de sus compañeros, quienes se encuentran en grave estado de salud. Según la Personería de Medellín, ente encargado de velar por los derechos humanos, la situación de reclusión en esta cárcel es preocupante, ya que se evidencian, además de la

desatención en salud, problemas de alimentación, quejas de maltratos por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y falta de actividades para la remisión de penas. La Personería de Medellín, no sólo se refiere a la situación de este centro sino al de la Cárcel de Bellavista, ubicada en el Municipio de Bello de este mismo departamento, que presentan problemas de derechos humanos agudos y ante lo cual esta dependencia del Ministerio Público presentará informe al gobierno nacional esperando que se tomen medidas inmediatas para el cumplimiento de derechos.

Sábado 27

200 mujeres marchan para protestar por las calles del barrio Doce de Octubre en la zona noroccidental, en Medellín, departamento de Antioquia. La marcha se convoca por organizaciones sociales en el marco del 25 de noviembre Día internacional de No a la Violencia Contra las Mujeres. Las mujeres siguen siendo víctimas en la ciudad de diferentes tipos de violencias de género, intrafamiliar, conyugal, económica y sexual, y de otras violencias producto del conflicto armado. A esto se suma la acentuación de las acciones delictivas de las bandas que afectan la movilidad y la vida de las mujeres en la ciudad, así también como la falta de estrategias del Estado para prevenir este tipo de violencias y la inoperancia del sistema judicial para el acceso a la justicia.

Pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica se toman pacíficamente la sede de la Entidad Promotora en Salud (EPS) Humana Vivir, en Barranquilla, departamento Atlántico, por problemas con la atención médica. La toma termina con el compromiso de la gerencia de Humanas Vivir para comprometerse con el tratamiento de los pacientes.

Martes 30

Habitantes del barrio 20 de Enero, de Barrancabermeja, departamento Santander, bloquean vía para protestar por su mal estado. La Junta de Acción Comunal denuncia la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales competentes.

Glosario de Siglas

ADEMACOR	Asociación de Maestros de Córdoba
ENS	Escuela Nacional Sindical
EPS	Entidad Promotora en Salud

Colombia – Cronología del conflicto social de noviembre de 2010 - OSAL

ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
INGEOMINAS	Instituto Colombiano de Geología y Minería
INPEC	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
MRN	Muerte a Revolucionarios del Nordeste
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONGS	Organizaciones No Gubernamentales
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Colombia
SINTRAIME	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmeccánica, Metalúrgica y Siderúrgica
TIP	Tarjeta de Identificación Personal
TRANSMETRO	Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Barranquilla
TRANSMILENIO	Sistema de transporte público masivo de la Ciudad de Bogotá
UP	Partido político Unión Patriótica

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO)

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya. Relevamiento y sistematización por: Lorena Álvarez Ossa, Diana Ayala Villada y Diego Alejandro Salazar López.

Fuentes principales: diarios El Mundo, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

País

Mes de Año

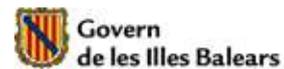
Editada en el MES de AÑO



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 000

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de*



Integrantes Nombres

Fuentes Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Colombia

Cronología del conflicto social

Diciembre de 2010

Miércoles 1

Habitantes del barrio 20 de Enero, en la Comuna Tres, de Barrancabermeja, Departamento de Santander, deciden bloquear las vías con un árbol navideño y agregarle un muñeco antropomórfico, esto como protesta ante el hartazgo de solicitar el arreglo de la calle 76 entre carreras 21 y 24, sin obtener otra respuesta diferente a que el caso corresponde a vigencias futuras, afirma Rogelio Scarpetta, presidente de la Junta de Acción Comunal. Según el líder, desde 2008 se han enviado solicitudes y derechos de petición, tanto al despacho del alcalde como a la Secretaría de Infraestructura, pero la vía principal de acceso al barrio sigue igual.

Jueves 2

La atención al público en la Alcaldía de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se ve afectada durante unas 2 horas, por las protestas que adelantaron los celadores y los damnificados de los sectores de Me Quejo y Loma Roja. Los celadores reclaman el pago de la liquidación, horas extras y dotación de uniformes, mientras que los de Loma Roja el pago de subsidios de arriendo para 58 familias afectadas por el invierno.

En Barranquilla, Departamento del Atlántico, los docentes elegibles marchan desde la calle 53 con carrera 46 hasta la calle 63 con carrera 43, afectando la circulación del sistema de transporte masivo por espacio de media hora. Los elegibles reclaman el nombramiento en las plazas que hoy ocupan los docentes provisionales. Ellos dicen que ganaron un concurso de méritos que la Secretaría de Educación no ha respetado.

Viernes 3

Un enorme tráfico en toda la Autopista al Sur se presenta en horas de la mañana, debido a una protesta de los estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander en el sector de Conucos, Departamento de Santander. La manifestación se debió a las

inconformidades que tienen ellos con la reforma al reglamento de posgrados, que elevará el costo de algunas matrículas de \$2 millones a \$10 millones. Luego de un diálogo que se realizó entre las autoridades y los protestantes, estos últimos acordaron despejar finalmente la Autopista.

Sábado 4

Se presentan protestas contra el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico por las medidas que ha adoptado en las últimas horas, para garantizar la movilidad y evitar la ocupación del espacio público en el Centro Histórico. Algunos vendedores ambulantes y estacionarios se congregaron en la puerta del edificio de la Alcaldía, para exigirle al alcalde, Alejandro Char, que les dejara trabajar en el espacio público por la temporada de fin de año.

Domingo 5

Una protesta de más de dos horas adelantan los taxistas de Cartagena por la muerte, esta madrugada, de Jorge Luis Montemiranda Rodríguez, de 36 años de edad, quien fue asesinado por dos maleantes que le robaron el dinero del producido de las carreras que había hecho entre las seis de la tarde del sábado y la una de la mañana de hoy. Los taxistas bloquearon el sector El Amparo y exigieron a la Alcaldía y a la Policía mayor seguridad para el gremio.

Lunes 6

Tras siete horas de parálisis en el transporte de la ciudad, los taxistas de Cartagena, Departamento de Bolívar, empiezan a desbloquear las 15 intersecciones viales que tuvieron bloqueadas en manifestación por la muerte de un taxista a manos de atracadores y la herida de gravedad que recibió otro conductor. Los conductores aceptaron levantar los bloqueos luego de dialogar con la alcaldesa de Cartagena, quien se comprometió a trabajar por la seguridad de ese gremio, así como a incrementar los operativos de seguridad en la noche y reactivar, con 50 estaciones de taxis, la red de apoyo con la Policía.

El sistema de transporte colectivo de Cali, Departamento del Valle del Cauca, se paraliza parcialmente por protestas de sus conductores quienes reclaman el pago de salarios y prestaciones legales; 250 motoristas del operador Unimetro mantienen la parálisis afectando la flota del Sistema de Transporte Masivo de Cali, Mio. La exigencia de los

trabajadores se relaciona con la cancelación de tres quincenas, la prima de junio, el pago de la Entidad Promotora de Salud (EPS) y las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

Viernes 10

El presupuesto de la ciudad para la próxima vigencia fiscal y la adopción de políticas de seguridad ciudadana, genera polémica en el Concejo de Santa Marta, en el Departamento de Magdalena. El proyecto busca adoptar las bases para una política de seguridad más social y menos represiva y que ubique los factores sociales que generan violencia. En medio de la protesta de un grupo de ediles se da aprobación en segundo debate al proyecto de presupuesto del Distrito para la próxima vigencia fiscal, establecido en 302 mil millones de pesos. La inconformidad de la comunidad se centra en la forma de cómo la iniciativa tuvo su curso sin la participación de ellos.

Lunes 13

Unas 400 personas del corregimiento de Gambote (Arjona, Departamento de Bolívar), bloquean durante media hora un puente de una de las dos vías que comunican la Costa Caribe con el Occidente del país. La protesta se presenta por la suspensión del suministro de piedra y arena para enfrentar los embates de las aguas, pues están a punto de desbordarse.

Miércoles 15

Conductores de carga pesada bloquearon la vía al puerto de Buenaventura a la altura de Cisneros, el sector de Puente Piedra y Loboguerrero. Juan Carlos Ramírez, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), dice que la protesta se da por el mal estado de la vía, por el incremento en los precios del combustible y para que se mejoren las condiciones de inseguridad en la carretera.

Unos 200 mineros procedentes de los municipios de Buenos Aires y Suárez, en el departamento del Cauca, donde sus habitantes viven de la minería artesanal, ocupan la sede del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), que tiene su oficina regional en la universidad del Valle, en la sede de Meléndez, en el sur de la ciudad de Cali, para reclamar por la tardanza en la certificación de las minas y para que, de esta forma, el Ejército les entregue los explosivos necesarios para realizar sus labores.

Jueves 16

Habitantes de los barrios Ciudad Latina y Compartir en el municipio de Soacha Cundinamarca, se quejan de la falta de transporte público. La comunidad asegura que los buses y colectivos llegan a demorarse hasta una hora en los paraderos. Los transportadores manifiestan que ellos *deben seguir una programación*, palabras que la administración del municipio calificó como 'excusas'.

Sábado 18

Cuatro mujeres con los senos descubiertos, acompañadas de varios hombres, también con el torso desnudo, caminan desde el monumento a la India Catalina hasta la Torre del Reloj, en la llamada Plaza de la Paz, en la ciudad de Cartagena. Protesta motivada por el derecho a la igualdad y como oposición a los tabúes sexuales impuestos por las religiones tradicionales. Los manifestantes pertenecen a la religión Raeliana, la cual promueve la creencia de que unos seres extraterrestres habrían creado la vida sobre la Tierra.

Decenas de familiares de secuestrados se agrupan en la plaza de Bolívar de Bogotá para enviarles mensajes de navidad a sus seres queridos, que se encuentran privados de la libertad.

Lunes 27

En la ciudad de Bogotá, los habitantes del barrio Uval en la localidad de Usme bloquean la vía al Llano con palos y piedras después de que uno de sus vecinos fuera arrollado por un carro. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disuelve la protesta. Los habitantes denuncian haber sido agredidos por los uniformados.

Como señal de protesta por las constantes amenazas que reciben por parte de los combos delincuenciales, los conductores de la empresa de transportes Rápido Santa María, de Itagüí –Antioquia-, entran en paro por tiempo indefinido. Los conductores exigen la presencia de los dueños de la empresa transportadora o las autoridades pertinentes para que se tomen medidas concretas que garanticen su seguridad.

Glosario de Siglas

ACC	Asociación Colombiana de Camioneros
ARP	Aseguradoras de Riesgos Profesionales
EPS	Entidad Promotora en Salud
ESMAD	Escuadrón Móvil Antidisturbios
INGEOMINAS	Instituto Colombiano de Geología y Minería

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis de Coyuntura de Colombia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO)

Coordinación a cargo de Guillermo Correa Montoya. Relevamiento y sistematización por: Mauricio E. Giraldo Mejía

Fuentes principales: diarios El Mundo, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y Vanguardia Liberal.

Otras fuentes: Semanario voz, Semanario Virtual Caja de Herramientas, Agencia de Información Laboral ENS.